

BC-PS

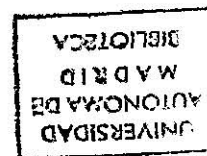
64

T/170

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID
FACULTAD DE PSICOLOGIA

LA MEDIACION EN LOS PROCESOS
DE SEPARACION Y DIVORCIO

R. B. C. 55270



Reg. 4: 20066.

TESIS DOCTORAL

Director: Dr. José Miguel Fernández Dols

Autora: D^a Trinidad Bernal Samper

Madrid, 1992



BIBLIOTECA
PSICOLOGIA

I. INTRODUCCION

II. MARCO TEORICO

1.- RUPTURA MARITAL E INTERVENCION LEGAL

- 1.1 Introducción
- 1.2 El Convenio Regulador
- 1.3 Análisis del contenido del Convenio Regulador
- 1.4 Procedimientos matrimoniales

2.- RUPTURA MARITAL E INTERVENCION PSICOLOGICA

- 2.1 Introducción
- 2.2 Intervención Pericial
- 2.3 El informe pericial psicológico
- 2.4 Metodología del Peritaje psicológico
- 2.5 Proceso de Evaluación Familiar
- 2.6 Dificultades para la evaluación en los casos
de ruptura marital

3.- INTERVENCION PSICOLOGICA Y JURIDICA EN LOS PROCESOS
MATRIMONIALES

- 3.1 Introducción
- 3.2 Diseño del trabajo interdisciplinar:

Primera entrevista, estudio conjunto,
información, estudio psicológico y
jurídico, fase educativa y resolución

4.- LA MEDIACION FAMILIAR: Un nuevo campo de estudio.

- 4.1 Introducción
- 4.2 La Mediación y los conflictos familiares
- 4.3 Variables que justifican el uso de la Mediación
- 4.4 La intervención del psicólogo como Mediador
- 4.5 Experiencias de Mediación Familiar

III. ESTUDIOS EMPIRICOS

- ESTUDIO 1: Intervención legal

Introducción
Método
Resultados
Resumen y Conclusiones

- ESTUDIO 2: Intervención Psicológica

Introducción
Método
Resultados
Resumen y Conclusiones

- ESTUDIO 3: Intervención Psicológica y Jurídica

Introducción

Método

Resultados

Resumen y Conclusiones

- ESTUDIO 4: Mediación

Introducción

Método

Resultados

Resumen y Conclusiones

IV. CONCLUSIONES GENERALES

V. REFERENCIAS

VI. ANEXO

I. INTRODUCCION

Esta tesis pretende mostrar el desarrollo de unas hipótesis sugeridas a lo largo de 13 años de experiencia en el campo de los problemas de pareja así como de la observación del trabajo del abogado a la hora de resolver la situación legal de las parejas con problemas de relación que plantean la separación o el divorcio.

La experiencia como profesional de la psicología en las relaciones de pareja llevó a sugerir el que una atención en el terreno emocional podría ayudar a las personas que se separan a llevarlo a cabo de forma menos dañina. La observación del trabajo del abogado en los asuntos matrimoniales, como si se tratara de cualquier otro pleito, sin percibir este aspecto emocional tan central en los procedimientos de Familia (Duquette, 1978) y resolviéndolo desde un enfoque exclusivamente legal y adversarial, llevó, por otro lado, a pensar en la necesidad de formación del abogado en el aspecto psicológico, sensibilizándolo hacia la colaboración con el psicólogo para trabajar en estos temas de Familia, así como en el uso de una vía legal menos conflictiva.

El trabajo como perito psicólogo en los procedimientos matrimoniales, realizando informes al juez para asesorarlo sobre la asignación de la guarda y custodia, volvió a sugerir otra idea relacionada con el trabajo del psicólogo en este campo, la poca utilidad del informe para resolver los no acuerdos de ambos miembros de la pareja y la dificultad, a través de la evaluación psicológica al uso, de concluir sobre la idoneidad para esa guarda y custodia.

Estas sugerencias posibilitaron el diseño de un trabajo conjunto, muy creativo pero poco sistematizado que, con la práctica, ha servido de base al programa de Mediación, donde se perfila el rol del psicólogo como Mediador, utilizando estrategias de negociación para resolver los problemas que la pareja presenta a la hora de acceder a la vía judicial, hipotetizando que el uso de la mediación es más beneficioso para las parejas, posibilitando más acuerdos entre ellos y por lo tanto más resoluciones por vía pacífica y una disminución de los incumplimientos después de haber tramitado el procedimiento legal, lo que significa un mejor entendimiento entre las parejas y por lo tanto un menor coste emocional para ellos y para sus hijos.

Un repaso a la casuística de separaciones y divorcios nos demuestra cómo, en general, las disputas familiares se resuelven en un contexto legal litigioso, que si bien es un buen método para resolver conflictos referidos a disputa sobre la propiedad y a cuestiones criminales, no lo es para resolver los conflictos familiares, donde los componentes afectivos y emocionales son centrales y movilizan las relaciones interpersonales (Duquette, 1978). El procedimiento contencioso supone una duración mayor en el tiempo utilizado para resolver el conflicto, un coste económico más elevado y una intensificación de los sentimientos negativos (Eitzen, 1985; Kressel et al 1980; Kressel 1985, 1987). Los abogados que utilizan este tipo de procedimiento, se convierten en el defensor de una parte y atacan a la otra, agudizando las desavenencias de la pareja.

Desde un punto de vista psicológico, tanto la intervención pública como privada, se basa en la realización de un informe pericial que tiene como objetivo principal

evaluar la idoneidad de las partes. Este proceso evaluativo sigue un esquema clásico de la clínica, orientado a encontrar alteraciones en una parte que justifiquen, la calificación de "apto" para la otra. Este estilo de trabajo psicológico, reproduce, sin proponérselo, la forma de trabajo del abogado que usa el procedimiento contencioso: división de las partes y la existencia explícita o implícita, de un culpable y de inocente, favoreciendo también las disputas entre ambos miembros de la pareja.

Este trabajo pretende, en primer lugar, estudiar los procedimientos utilizados usualmente en el derecho de Familia, la forma de trabajar los abogados, según su experiencia cuando tramitan estos temas y su actitud ante la colaboración del psicólogo y el uso de la vía amistosa como mejor forma de resolver los conflictos de pareja.

Para este cometido partimos de las siguientes hipótesis:

- 1.- El procedimiento contencioso es el más usado para solucionar legalmente los problemas de ruptura.
- 2.- El uso del procedimiento consensual es más ventajoso que el uso del procedimiento contencioso:
 - más corto
 - menos costoso
 - menor nivel de incumplimientos
- 3.- Las experiencias del abogado, su actitud positiva ante el uso de la vía amistosa y de la colaboración del psicólogo, ayudan a conseguir más tramitaciones consensuadas y menos incumplimientos.

En segundo lugar, pretende analizar la forma de trabajar los psicólogos en el campo del derecho de familia,

mediante los informes psicológicos periciales que acompañan a los procedimientos realizados por los abogados, hipotetizando que:

- 1.- El objetivo que sirve de base al informe, no es adecuado para solucionar los enfrentamientos que tiene la pareja.
- 2.- La evaluación psicológica utilizada en la realización de los informes de los juzgados de Familia, no se adecua al contexto legal y difícilmente se puede concluir sobre la idoneidad de los padres.
- 3.- Las conclusiones a los que llegan los psicólogos de los juzgados de familia, facilitan de tal forma la toma de decisión del juez, que hacen recaer sobre el psicólogo la competencia del juez, que es la de dictaminar con qué padre deben quedar los hijos.

En tercer lugar, y basándonos en los resultados del primer grupo de trabajo llevado a cabo por abogados, pensamos que modificando el estilo de trabajo del abogado, introduciendo la colaboración psicológica y cambiando la opinión que estos profesionales del derecho tienen, de la vía amistosa, y de los problemas de pareja en sí, conseguiríamos un mayor número de procedimientos amistosos así como un menor nivel de incumplimientos. Para este fin presentamos un modelo interdisciplinar de actuación que es novedoso en España y que supone el primer acercamiento de los conocimientos psicológicos al mundo del derecho.

Finalmente, basado en el modelo de trabajo conjunto descrito, se presenta un perfeccionamiento del mismo, colocando al psicólogo en un rol de mediador de los conflictos de pareja, utilizando los conocimientos propios

de su profesión, aquellos que vienen del campo del Derecho de Familia y las técnicas de la negociación como forma de resolver los conflictos de pareja.

En este trabajo final se hipotetiza que la mediación resulta más útil para conseguir tramitar los procedimientos por vía amistosa y que con la mediación se consiguen mantener esos acuerdos, repercutiendo de forma positiva en las personas que han dejado de ser pareja y en sus hijos.

En resumen, pretendemos, no tanto criticar la intervención de abogados y psicólogos en los temas de ruptura marital, sino más bien modificar ambas intervenciones y reorientarlas para un trabajo conjunto que colabore a resolver esta problemática.

II. MARCO TEORICO

1.- RUPTURA MARITAL E INTERVENCION LEGAL

- 1.1 Introducción
- 1.2 El Convenio Regulador
- 1.3 Análisis del contenido del Convenio Regulador
- 1.4 Procedimientos matrimoniales

1.- RUPTURA MARITAL E INTERVENCION LEGAL

Introducción

Las situaciones conflictivas de la pareja, pueden dar lugar a tres maneras legales de disolver la relación: separación, divorcio y nulidad. Estas tres fórmulas legales, son procedimientos técnicos distintos, y obedecen a distintas razones como figuras jurídicas, aunque en realidad, sirven para lo mismo: resolver legalmente el conflicto marital. Aquí sólo nos vamos a referir a los dos primeros, ya que la nulidad es muy poco utilizada en el ordenamiento civil, acudiendo, en la mayoría de estos casos, al eclesiástico.

En la separación, el vínculo matrimonial permanece, lo que impide volver a contraer matrimonio, pero suspende la vida en común. Si falta este propósito, de poner fin a la vida en común, no hay separación en sentido de situación final del régimen conyugal, y en este sentido dispone el párrafo 2º del artículo 87 del Código Civil, que "la interrupción de la convivencia no implicará el cese efectivo de la misma, si obedece a motivos laborales, profesionales, o a cualquier otros de naturaleza análoga". El origen de este tipo de medida, se encuentra en la doctrina de la Iglesia, que mientras sostenía que el matrimonio era insoluble, se veía forzada a permitir que los esposos vivieran separados cuando su vida en común se había hecho insoportable (López Alarcón, 1983).

La separación se ha mantenido en Códigos de Europa Occidental por la necesidad de dar una solución para las

parejas con problemas cuando éstos tienen escrúpulos de conciencia de utilizar el divorcio pero no existe en la Unión Soviética, donde su ordenamiento admite sólo el divorcio vincular (Fosar Benlloch, 1982).

En nuestro actual sistema legal, existen dos formas de separación conyugal: judicial, y de hecho, aunque como dice O'Callaghan (1983) sólo cabe, a efectos legales, la separación judicial, constituida por sentencia. La separación de hecho la realizan los cónyuges sin necesidad de sentencia, aunque con una serie de consecuencias legales, y también reconocida como uno de los requisitos para la separación judicial y para la petición del divorcio. El Código Civil en su artículo 81, contempla estos dos tipos de separación judicial: la consensual, o por mutuo acuerdo pedida por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro; y la causal, cuando ambos discrepan en cuanto a la petición y la pide un miembro de la pareja aduciendo que el otro ha incurrido en una de las causas contempladas por la ley para pedir la separación.

La separación consensual se puede pedir una vez transcurrido el primer año de matrimonio, sin necesidad de alegar causa alguna. La decisión de ambos se basa en su voluntad y no necesitan acudir a otra causa especificada por la Ley (Díez-Picazo y Gullón, 1982). La separación consensual existe en un buen número de sistemas legales ya que resulta ventajosa y expeditiva. Las ventajas son fundamentalmente dos: es un procedimiento más rápido y económico al no tener que probarse causa alguna legal de separación, y en segundo lugar, no hace pública la causa de separación, evitando el enfrentamiento entre los cónyuges y favoreciendo el diálogo.

En la separación consensual, el acuerdo entre ambos da lugar al Convenio Regulador, documento que se aporta a la petición de separación y donde los cónyuges dan pactados y resueltos los llamados efectos secundarios de la separación (hijos, aspectos económicos y patrimoniales, vivienda familiar y ajuar) quedando limitadas las funciones del Juez, que se reducen a constatar si se dan los requisitos para la separación, y si el Convenio Regulador protege adecuadamente a todo el núcleo familiar. Para pedir este tipo de separación, el acuerdo debe ser en un 100% de los puntos que contiene el convenio mencionado anteriormente, lo cual presenta un gran inconveniente, ya que si en un punto no se está de acuerdo, los cónyuges deben acudir al otro tipo de petición causal.

Tradicionalmente, la separación venía siendo regulada como una sanción impuesta a la parte culpable de infringir algún deber fundamental entre los cónyuges. Si la convivencia marchaba mal era porque uno de los dos miembros había provocado dicha situación por lo que merecía que se le inculpara y castigara apartándolo de los hijos y del otro cónyuge. El Código Civil español, siguiendo las corrientes imperantes estableció causas típicas de separación, basadas en la culpa de uno de los cónyuges por lo que sólo el cónyuge inocente podía pedir la separación (art. 106). La reforma de 1981 introduce una serie de modificaciones, como es la separación entre culpables e inocentes. Las causas de separación se reúnen en el artículo 82 y se independizan de la relación mantenida con cada una de las partes. Se pretende desconocer la presencia de la culpa en la separación judicial, aunque ésta no ha podido desterrarse completamente y reaparece en alguna de las causas previstas en el artículo 82 para solicitar la separación:

1. El abandono injustificado del hogar, la infidelidad conyugal, la conducta injuriosa o vejatoria y cualquier otra violación grave o reiterada de los deberes conyugales.
2. Cualquier violación grave y reiterada de los deberes respecto de los hijos comunes o respecto de lo de cualquiera de los cónyuges que convivan en el hogar familiar.
3. La condena a pena de privación de libertad por tiempo superior a seis años.
4. El alcoholismo, la toxicomania o las perturbaciones mentales.
5. El cese efectivo de la convivencia conyugal durante seis meses, libremente consentido.
6. El cese efectivo de la convivencia conyugal durante el plazo de tres años.
7. Cualquiera de las causas del divorcio (art. 86, 3°, 4° y 5°).

El divorcio tiene los mismos efectos legales que la separación. Lo único que la diferencia es que el vínculo matrimonial, se rompe con el divorcio y en la separación no.

En nuestro sistema legal rige el principio del divorcio judicial. Sólo el Juez puede divorciar si se reúnen los requisitos y por el procedimiento judicial

adecuado. Los cónyuges no pueden hacerlo ni de forma privada ni ante cualquier autoridad pública. Esto quiere decir que en España no existe el divorcio consensual, por mutuo acuerdo. Se puede utilizar una vía rápida y solicitarlo conjuntamente las dos partes pero esto no significa que el divorcio sea consensual. Las causas de divorcio estan recogidas en el artículo 86 del Código Civil y en ellas se puede apreciar un sistema híbrido que recoge los tres sistemas judiciales de divorcio existentes en el Derecho Comparado: divorcio-sanción, divorcio por ruptura y el divorcio por mutuo acuerdo (Pons González y del Arco Torres, 1985).

Con el divorcio se disuelve la relación jurídica matrimonial pudiendo contraer matrimonio otra vez. Existen dos grupos de causas de divorcio en España, entre los primeros está el que uno de los cónyuges atente contra la vida del otro, de sus descendientes o de sus ascendentes. El otro grupo de causas de divorcio está constituido por el transcurso de un periodo de tiempo de ruptura de la convivencia matrimonial. En definitiva, separación, divorcio y nulidad tienen unas características legales que las distinguen pero las tres consiguen romper la convivencia conflictiva.

El Convenio Regulador

Es un documento presentado por las partes, de común acuerdo, junto con el escrito de petición de la separación o del divorcio. Comprende una serie de apartados relativos a la relación con los hijos, la distribución de los bienes, el domicilio conyugal, las pensiones etc .. Entrena Klett (1982) lo define como "el acuerdo o propuesta de acuerdo,

concertado por los consortes en crisis u ofrecido por uno al otro, tendente a regular todas las cuestiones matrimoniales periféricas a los puros deberes y derechos conyugales". Todos los apartados del Convenio deben puntualizarse de tal manera que se ofrezca al juez una muestra de claridad y equidad sobre la distribución de lo material y, sobre todo, un acuerdo sobre quién va a tener consigo a los hijos y cómo, cuando y de qué manera los podrá ver el otro padre y tenerlos consigo. Generalmente, el juez, accede a lo que la pareja ha establecido en el convenio, a menos que resulte evidente el perjuicio para los menores o para alguna de las partes. Se reconoce así un ámbito de actuación a la autonomía privada de los cónyuges en el establecimiento de las medias que pueden adoptarse y de los efectos que la sentencia pueda producir.

Cuando el acuerdo total no es posible, invalida los acuerdos parciales conseguidos por la pareja, ya que tienen que seguir el procedimiento contencioso y es el juez el que se encarga de dictaminar sobre cada uno de los puntos del Convenio, tal y como se desprende del artículo 91 del Código Civil "El Juez llevará a cabo las determinaciones exigidas por la ley y adoptará las medidas necesarias, en defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del mismo". Según el artículo 90 del Código Civil, el proyecto de Convenio Regulador deberá referirse a los siguientes puntos:

- La determinación de la persona a cuyo cuidado hayan de quedar los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, el ejercicio de ésta y el régimen de visitas, comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva con ellos.

- La atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar.
- La contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, así como sus bases de actualización y garantías en su caso.
- La liquidación, cuando proceda, del régimen económico del matrimonio.
- La pensión que conforme al artículo 97 del Código Civil correspondiera satisfacer a uno de los cónyuges.

Análisis del contenido del Convenio Regulador:

La patria potestad es el poder global que la ley otorga a los padres sobre los hijos, es decir, el conjunto de derechos y deberes que tienen los padres sobre los hijos menores de edad no emancipados o incapacitados.

La ley del 81 reguló el Código Civil, y el carácter actual de la patria potestad la ejercen conjuntamente el padre y la madre en base al principio de igualdad. Aunque hay una serie de causas por lo que uno o ambos pueden ser privados de la patria potestad, en general, el art. 154 dispone que "los hijos están bajo la potestad del padre y de la madre" y el art. 156 que "la patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores".

La guarda y custodia de los hijos es una de las facultades implícitas en la patria potestad. En los casos en que la pareja rompe su relación, ambas figuras se distancian y el padre o la madre a cuyo cuidado queden los

hijos tendrá la guarda y custodia que es, en definitiva, el ejercicio de la Patria Potestad que comprende los deberes y facultades atribuidas en el art. 154. Esto quiere decir que ambos padres mantendrán la patria potestad de los hijos menores o incapacitados aunque se ejercerá por aquel con quien los hijos convivan. La decisión de quién se hará cargo del cuidado de los hijos es difícil y tiene que ver según Vázquez Iruzubieta (1982) con la situación de los padres en cuanto al trabajo, tiempo libre y mejor disposición para llevar a cabo esta atención.

Siguiendo lo expuesto en el art. 90 del Código Civil en el Convenio Regulador se debe "determinar la persona a cuyo cuidado hayan de quedar los hijos sujetos a la patria potestad de ambos..." Esto quiere decir que se pueden presentar diversas opciones a la hora de determinar la guarda y custodia, es decir, los hijos pueden quedar con el padre, con la madre, con los dos, con otros familiares o institución, repartidos los hermanos, etc. Existen, pues, distintos tipos de custodia aunque la más utilizada en nuestro sistema legal español es la custodia exclusiva, en la que el padre o la madre ejercen ese derecho dando al padre o madre que no vive con los hijos el derecho de visitarlos, comunicarse con ellos y tenerlos en su compañía. En este tipo de custodia, la responsabilidad y la toma de decisiones recae sobre el padre custodio aunque el otro padre debe intervenir en las decisiones importantes.

Otro tipo de custodia es la partida, aunque la ley aconseja no separar a los hermanos, a veces se concede la custodia de uno o más hijos al padre o a la madre y a los demás al otro. La separación de los hermanos debe estar fundamentada sólidamente barajándose varios argumentos

tales como imposibilidad material o de otro tipo de hacerse cargo de todos los hijos, fuerte enfrentamiento entre hermanos o consolidación de una situación ya establecida cuando ya llevaban viviendo separados los hermanos.

La custodia repartida, posibilita un reparto entre los padres de los hijos que se aproxime a un 50%, bien durante parte del año o en años alternativos, concediendo el derecho de visitas recíprocas y ejerciendo la guarda y custodia durante el tiempo en el que los hijos estén con cada uno de los padres.

La custodia conjunta. En este tipo de custodia ambos padres tienen la responsabilidad legal y la autoridad en relación a la atención y cuidado que el niño requiere. Todo sigue igual que antes de separarse en lo que atañe a los hijos. Según Folberg (1984 a) el padre o la madre con el que el niño esté viviendo en cada etapa, debe tomar las decisiones sobre su vida diaria en todos los aspectos.

El Convenio debe estar inspirado en el mejor interés de los hijos y no cabe duda de que los padres pueden saber mejor que nadie ese "mejor interés". Cabe pensar que los cónyuges puedan pactar que la guarda y custodia sea compartida, aunque las relaciones de ambos miembros de la pareja en estos momentos de ruptura suponga un gran problema el ponerse de acuerdo con dicho ejercicio (Fosar Benlloch, 1982).

El régimen de visitas, queda expresado en el art. 90 del Código Civil y configurado en el 94 como un derecho del padre que no conviva con sus hijos, a tenerlos en su compañía, y a mantener los lazos que entre ellos existen.

Asimismo, posibilita que el padre o madre que se le asigne este régimen de visitas pueda cumplir con los derechos-deberes que le incumben de forma eficaz al tiempo que resguarda el derecho que todo hijo tiene, de relacionarse con ambos padres. Entrena Klet (1983) insiste en sostener que, cuanto más exácto y preciso sea el convenio regulador en este punto, menor posibilidad habrá de controversias o fricciones futuras. Esto quiere decir que debe determinarse el tiempo, modo y lugar del ejercicio de este derecho aplicado al caso concreto de que se trate, ateniéndose al lugar de residencia de ambos progenitores; régimen laboral del que ejerza este derecho; régimen escolar de los hijos, etc.

Vivienda y ajuar familiar.- En este punto del Convenio se trata de atribuir el uso del domicilio conyugal así como de los enseres de uso doméstico a uno de los dos miembros de la pareja, atendiendo al interés familiar y a quienes necesiten más protección. El término atribución, indica que se crea un título jurídico que atribuye la posesión y el disfrute de la vivienda y del ajuar doméstico (art. 96, Código Civil). Este es un punto conflictivo, regulado en el art. 90 del Código Civil, por medio del cual, se insta a uno de la pareja a buscarse otro sitio para vivir, abandonando su domicilio, aunque siga siendo de su propiedad en un 50%. En general, el piso es algo que se ha conseguido después de varios años de esfuerzo por parte de ambos y que, además, desata ligazones emocionales difíciles de cambiar. Atribuir el piso a uno suele vivirse como un castigo para el otro, además de una carga, ya que, a veces, se encuentra con la obligación de continuar los pagos del piso más el alquiler de su nueva vivienda.

La ley da preferentemente el uso a los hijos y al progenitor que queda con su guarda y custodia, por lo que el padre o madre que se tenga que ir de la casa, también se encuentra sin la convivencia con sus hijos, convirtiéndose así este punto del convenio en la "manzana de crisis de pareja" (Entrena Klett, 1982). El uso de la vivienda familiar es independiente de la titularidad y puede darse el caso que, siendo propietario exclusivo un miembro de la pareja, se le atribuya el uso al otro, que no tiene derecho alguno sobre la propiedad (Díez-Picazo y Gullón, 1982).

Prestación de alimentos.- El concepto legal de alimentos es amplio; incluye todo aquello que resulta indispensable para el sustento, habitación, vestido y atención médica (art. 142 Código Civil) además de la educación y enseñanza dirigidas a la formación de los menores (art. 154 Código Civil). No existe nada fijo regulado al respecto; como un tanto por ciento del sueldo; la cuantía de esta asignación está en relación a las posibilidades de quien la da y a las necesidades de quien las recibe (art. 146 Código Civil). La ley pide que quede fijada esta asignación para cada uno de los hijos, mencionando también las bases de actualización de la misma, que será acordada por los cónyuges o, en su defecto, fijada por el juez. Esta asignación, toma la forma de una prestación monetaria con carácter periódico, para el padre o la madre que no conviva con los hijos, aclarando la forma en que se efectuará dicho pago, con el fin de garantizar su cumplimiento.

Pensión por desequilibrio económico.- No tiene como fin cubrir las necesidades alimenticias, tiene un sentido más amplio, y es el de compensar, el desequilibrio económi-

co, que la separación o el divorcio produce en un miembro, con respecto al estatus tenido en su matrimonio. Este concepto queda establecido en el art. 97 del Código Civil: "El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca desequilibrio económico, en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tiene derecho a una pensión...". Así mismo se establece, al igual que en la asignación de alimentos, las bases de actualización de esta pensión así como las garantías para su cumplimiento, regulado en el art. 97 del Código Civil. Este tipo de pensión es vitalicia, en principio, pero se puede extinguir, cuando desaparezca el desequilibrio económico que la causó, o cuando el que la recibe contrae nuevo matrimonio, o convive maritalmente con otra persona. Sin embargo esta pensión, no se extingue por la muerte del que la paga, sino que sus obligaciones se trasladan a sus herederos.

Procedimientos matrimoniales

Los dos procedimientos principales para resolver legalmente los temas matrimoniales están descritos en la disposición adicional 5ª y 6ª de la ley de 7 de Julio de 1981.

La disposición adicional 5ª canaliza las demandas de separación o divorcio contenciosos o litigiosos y los casos de nulidad. Este tipo de procedimiento supone un no acuerdo de las partes, por lo que cada una debe ser representada por un abogado y procurador. Los pasos que comprende este procedimiento son:

1. Presentación de la demanda por una de las partes.
Esta se redacta en forma ordinaria (encabezamiento, hechos fundamentales de derecho y súplica), acompañada de los documentos en que se funda su petición, pidiendo la separación, divorcio o nulidad por las causas que contempla la ley y solicitando los efectos que se desean sobre las medidas provisionales, para que en la sentencia puedan concederse.

2. Contestación a la demanda.
El plazo para comparecer y contestar la otra parte a la demanda es de 20 días, ajustándose a la estructura de la demanda. En ello, el demandado, podrá oponerse a lo que estime conveniente asimismo, el demandado, puede formular reconvencción, es decir, se opone a la demanda y a su vez pide la separación o el divorcio por otra causa legal distinta a la expuesta en la demanda, convirtiéndose el demandado en demandante. Si se da reconvencción, se dará traslado a la otra parte para que conteste en el plazo de 10 días.

3. Fase de prueba.
El período de prueba es de treinta días, pudiendo renunciar las partes si lo estiman oportuno. Las distintas clases de prueba que se pueden utilizar son:
 - Prueba documental, encaminada a demostrar la legitimidad de las partes.
 - Prueba de presunciones, para probar hechos que se aducen, como el cese de la convivencia o el adulterio.
 - Prueba testifical, lista de testigos que ambas partes aportaran y a lo que se les hará ciertas preguntas.

- Exploración de los hijos menores, en aquellos casos que se debata la guarda y custodia y patria potestad de los hijos, el juez podrá oír a los menores "si tuvieran suficiente juicio y siempre a los mayores de 12 años" (art. 92). En general, esto no ocurre así, ya que el juez "explora" a los niños de cualquier edad, y la exploración consiste en preguntar con quién quiere irse a vivir.
- Fase de conclusiones. Cuando acaba la fase de prueba, y sin que lo soliciten las partes, el juez dictará providencia ordenando que se unan a los autos las pruebas practicadas, y se traigan a la vista para sentencia, con citación de las partes. El juez dictará sentencia dentro del 5º día, aunque en la realidad esto no ocurre así. Antes de dictar sentencia, y con suspensión del plazo, al juez se le permite para mejor proveer, la práctica de cualquier prueba (aquí es donde el juez puede pedir el informe pericial).

Recursos. La sentencia será apelable en ambos efectos, es decir, del fallo sobre la petición de separación, divorcio o nulidad y del fallo relativo a las medidas provisionales, de su cumplimiento y de su modificación.

Un rápido vistazo a este tipo de procedimiento nos muestra tres pleitos distintos ante un mismo juez: las medidas provisionales, la oposición a las medidas provisionales y el pleito principal, donde se van a resolver los temas relativos a la separación o divorcio. Pero puede ocurrir que en este pleito principal sólo se concluya sobre la concesión de la separación o divorcio y se deje para más

tarde la determinación de los efectos de la misma relativas a los hijos, domicilio, economía, teniendo, de esta forma, cuatro pleitos. Además, los efectos acordados por el juez pueden ser modificados si se alteran las circunstancias determinantes de su procedencia, pueden haber incumplimientos, etc... multiplicándose los litigios. Con este tipo de procedimiento se facilita a los abogados hábiles, la utilización de los recursos legales, alargando estos casos, incluso, hasta años.

La disposición adicional 6ª de la ley de Julio de 1981 se encarga de canalizar las peticiones de separación o divorcio presentados de común acuerdo por ambos cónyuges o por uno con consentimiento del otro. El mutuo acuerdo es el primer presupuesto legal del procedimiento, que se acorta sensiblemente con respecto del anterior.

El procedimiento comienza con un ESCRITO DE PETICION, que no es otra cosa que una demanda, procesalmente hablando. Aunque esta petición debe estar formalizada por un abogado y procurador, las partes pueden optar por tener los mismos representantes, con lo que la oposición no existe. El escrito de petición irá acompañado de los documentos pertinentes y de la propuesta de Convenio Regulador. Una vez presentado el escrito, el juez dictará providencia en el plazo de tres días, para que en el mismo plazo, las partes se ratifiquen de su petición. En un plazo, no superior a 10 días los cónyuges pueden incluir los documentos que no presentaron en su día con el escrito de petición y/o completar el Convenio Regulador. El plazo siguiente consiste en admitir el juzgado la solicitud, que sólo se les negará si no se han ratificado o no han cumplimentado toda la documentación.

En este procedimiento también se permite al juez, para mejor proveer, acordar cualquier medio de prueba, cuando se le ofrezcan dudas sobre la concurrencia de las circunstancias exigidas por el Código Civil para decretar la separación o el divorcio. Por último, en el plazo de cinco días, el juez dictará sentencia sobre la separación o divorcio solicitado y sobre la propuesta de convenio.

Cuando hay hijos menores o incapacitados se da audiencia al Ministerio Fiscal y a los hijos que tengan suficiente juicio y siempre cuando sean mayores de 12 años. En el plazo de cinco días el Fiscal emitirá su informe y los hijos pueden hacer las manifestaciones que estimen. Una vez finalizado el plazo, el juez apreciará si el Convenio protege suficientemente a los hijos y en caso afirmativo dictará sentencia.

La simplicidad de este procedimiento viene dada por el acuerdo previo entre las partes que posibilita el uso de este procedimiento consensuado, acortando el tiempo de resolución y disminuyendo el coste del mismo.

2.- RUPTURA MARITAL E INTERVENCION PSICOLOGICA

- 2.1 Introducción
- 2.2 Intervención pericial
- 2.3 El informe pericial psicológico
- 2.4 Metodología del peritaje psicológico
- 2.5 Proceso de evaluación familiar
- 2.6 Dificultades para la evaluación en los casos de ruptura marital.

2.- RUPTURA MARITAL E INTERVENCION PSICOLOGICA

Introducción

Desde 1950 los psicólogos comienzan a ser llamados como peritos en los juicios y es en los 60 cuando su rol se difunde por los principales países occidentales. Las primeras revisiones sobre este particular son los de Blau (1959) y Louisell (1955). Posteriormente destacan los de Blau (1984), Cooke (1980), Green y Schaefer (1984), Sales (1977a, 1977b), y Sales y Elwork (1980) en EEUU; Gudjonsson (1984) y Haward (1981) en el Reino Unido; Angeli (1980), Bisio (1975), Canepa (1983), Gullota (1979), y Hesnard (1966) en Italia; Arntzen (1970, 1980, 1983), Liebel y Uslar (1975), Sarton (1983) y Wegener (1981) en Alemania; Webster et al. colaboradores (1983) en Canadá, y Brown (1981), Sturgess y Roberston (1981) y Thomson (1983) en Australia.

La irrupción del psicólogo como profesional en España está basada en dos hechos no muy lejanos: la creación de la especialidad de Psicología como carrera universitaria y la creación del Colegio Oficial de Psicólogos (Diciembre de 1979). Esto pone de manifiesto la juventud de esta disciplina en España y justifica el retraso en la práctica psicológica y más aún en su aplicación al mundo del Derecho, precisamente por su falta de consolidación como disciplina propia (Bernal, 1987).

Aunque cada vez más se recurre al psicólogo para temas relacionados con el Derecho, la poca presencia que ha tenido en las manifestaciones de la praxis forense,

descansa en razones extralegales, que según Munné (1986) son:

- Desfase entre las pautas forenses y la realidad social.
- Escasa o nula información de los avances de la psicología como ciencia y su aplicación probatoria a los estudiantes de Derecho.
- El olvido que la psicología científica ha dispensado al mundo jurídico como posible área de aplicación.
- La existencia por parte de los profesionales juristas de una "autosuficiencia psicológica" en virtud de la cual se piensa que las leyes de la Psicología son reglas del "sentido común" que todo jurista se encuentra en condiciones de dominar.

En nuestro país existen contribuciones teóricas importantes como la clásica obra de Mira y López (1932), y más recientemente la de Garzón (1989); Jiménez Burillo y Clemente (1986) y la de Muñoz Sabaté, Bayés y Munné (1980).

En un plano administrativo, en 1980 se crea en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, la subcomisión de Pareja, Familia, Separación y Divorcio con el objeto de estudiar el rol del psicólogo como perito y divulgar su imagen. En 1987 se crea la Sección de Psicología Jurídica compuesta por profesionales de distintos campos de aplicación de la Psicología al mundo del Derecho y que sigue funcionando en la actualidad.

La reforma en el Derecho de Familia tuvo su expresión más clara en las leyes de 13 de Mayo y 7 de Julio de 1981, repercutiendo en el Real Decreto Familiar 1.322/1981 de 3

de Julio creador de los Juzgados de Familia. El establecimiento de estos Juzgados, integrados en la Jurisdicción Ordinaria y competentes para resolver aquellos supuestos legales relativos al matrimonio y a las relaciones entre los cónyuges, y aquellos otros relativos a decisiones sobre custodia, filiación y tutela, ha posibilitado la inclusión de la figura del psicólogo (Diciembre 83) en la resolución de los conflictos de Familia. La importancia que está adquiriendo la prueba pericial psicológica hace que vaya creciendo la demanda del profesional psicólogo como interviniente en los procesos jurídicos, aunque, como Rosenhan (1982) ha indicado, no sin ciertas dificultades a la hora de actuar como psicólogo forense, ya que este rol se diferencia claramente del de clínico al tener que poner sus conocimientos al servicio de las necesidades legales.

Intervención Pericial

La base para la intervención del psicólogo como perito tiene un fundamento jurídico tanto en los procedimientos generales, como en los especiales tramitados en aplicación al Derecho de Familia. El artículo 92 del Código Civil, al referirse a las causas de separación, divorcio y nulidad determina que el Juez, de oficio o a petición de los interesados, podrá recabar el dictamen de especialistas. Como base jurídica del peritaje, también podemos referirnos al artículo 340 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) que faculta al Juez a practicar "cualquier reconocimiento o evaluación" como diligencia para mejor proveer. Igualmente el artículo 610 de la LEC, cuando habla de la prueba pericial dice que "podrá emplearse prueba de peritos cuando para conocer o apreciar algún hecho de influencia en el

pleito sean necesarios o convenientes conocimientos científicos, artísticos o prácticos"

La ley 7 de Julio de 1981 (30/81) no contiene ninguna forma especial donde aparezca la figura del perito psicólogo, pero de forma general, en las disposiciones adicionales 5ª y 6ª, al tratar de los hijos menores y del convenio relativo a los mismos, se establece que una vez practicada la prueba, en el plazo de 10 días se podrá acordar la práctica de cualquier otra que considere necesaria.

La presencia de los psicólogos en los Juzgados de Familia tiene lugar en Diciembre del 83 con la creación por parte del Ministerio de Justicia de 19 puestos de psicólogos para toda España. Constituyendo la base de la intervención psicológica de forma oficial. Con anterioridad a esta fecha, la colaboración del psicólogo con los jueces de familia o de 1ª Instancia, se llevaba a cabo de forma esporádica, y sólo a iniciativa de algunos jueces que así lo consideraban, recurriendo a los profesionales que de forma directa o indirecta se dedicaban a temas de pareja o familia, y a la lista de profesionales constituida en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid a iniciativa de algunos de los profesionales que ya venían trabajando en dicho Colegio desde el 80.

El procedimiento que sigue la actuación del psicólogo como perito, ya sea desde el propio Juzgado o desde fuera del mismo es el siguiente:

1.- Nominación.- Se comunica al interesado el nombramiento para que acepte y jure desempeñarlo imparcialmente. Cuando

el psicólogo está adscrito al Juzgado de Familia esta nominación es automática.

2.- Estudio de los autos.- Se revisa el expediente para extraer la siguiente información:

- Análisis de la trayectoria del proceso.
- Anamnesis y datos generales de localización.
- Estudio de otros informes.

3.- Evaluación psicológica.- Encaminada a realizar la exploración del grupo familiar con cuyos resultados se redactará el informe solicitado.

4.- Emisión del informe.- Aunque cabe la posibilidad de que sea oral, lo más común es que se haga por escrito, enviándolo a la persona que lo solicitó.

5.- Ratificación.- Es un acto preceptivo. Se trata de estar presente en una sesión con el juez y los representantes legales de las partes para aclarar posibles dudas sobre el resultado del informe y defender la metodología utilizada en él. Según el art. 627 y siguiente de la LEC "las partes o sus defensores podrán solicitar que el juez exija del perito las explicaciones oportunas para el esclarecimiento de los hechos".

Otra forma de intervenir el psicólogo en los temas de Familia es en colaboración con el abogado, bien mediante una actuación puntual, como en el caso de la realización de un informe psicológico de su cliente o para remediar su situación de inestabilidad emocional del mismo; bien mediante un trabajo interdisciplinar, donde los dos

profesionales: abogado-psicólogo trabajan conjuntamente en todas las fases del procedimiento matrimonial (Bernal, 1990). Desde el punto de vista de la práctica privada, y con fecha anterior a la llamada ley del divorcio (30/81), esta colaboración entre psicólogo y abogado se materializa con la creación del DESPACHO-ESTUDIO, primer despacho interdisciplinar en Madrid (Martín y Bernal, 1989). con temas de Derecho Penal y Civil, centrándose más tarde en los problemas de Familia.

El informe pericial psicológico

La intervención del psicólogo en los temas de Derecho de Familia comprende la elaboración de informes ante supuestos legales variados entre los que destacan los relativos al matrimonio y las relaciones entre los cónyuges, enfocados a probar alguno de los supuestos alegados por uno de ellos para conseguir la separación, el divorcio o la nulidad, y aquellos otros informes relativos a decisiones sobre custodia, filiación y tutela, encaminados a probar la competencia del padre, la madre o un tercero para obtenerla.

El informe pericial es solicitado por el juez de Familia a instancia personal o por petición de las partes y en general la temática más solicitada trata de relaciones con los hijos, pidiéndose la opinión de un experto sobre qué medida será la mejor para un niño en caso de separarse los padres. Se trata en definitiva de valorar la idoneidad de los padres para seguir ocupándose de su hijo cuando las relaciones de pareja han concluido.

El informe es la expresión concreta de la evaluación psicológica. Supone un documento escrito donde se presentan los resultados de las exploraciones efectuadas encaminadas a contestar a los objetivos planteados. Según Grant y Maletzky (1972) el informe es importante porque:

- Supone un testimonio archivable de la evaluación efectuada.
- Proporciona información útil para contrastar las hipótesis formuladas.
- Es necesario para comunicar los resultados de la Evaluación.
- Es un documento legal que proporciona información de unas personas en un momento concreto y en el que pueden apoyarse decisiones jurídicas.
- Es importante para el rastro de conducta.

Las características que debe reunir un informe (Fernández Ballesteros, 1984) son:

- a) Documento científico, es decir, tiene que estar ajustado a normas obteniendo unos resultados de los que se derivan acciones que deben dar respuesta a los objetivos previamente formulados.
- b) Vehículo de comunicación por lo que el juez debe entender los resultados emitidos de la evaluación. Pelechano (1976) considera que las características que un informe psicológico debería presentar para hacerlo comprensible a la persona a la que va dirigido serían las siguientes:

- Equilibrio entre los datos y las abstracciones teóricas.
 - Utilización de una modulación de los resultados aplicados a cada situación personal en concreto.
 - Ser asertivo o modesto, en función de los datos.
 - Utilización de ilustraciones directas (conductas hechas por el examinado).
 - Discutir las partes en los que se divide el informe.
 - Facilitar la toma de decisión.
- c) Ser útil para el juez que lo solicita contestando aquello que motivó la petición del informe. En el peritaje judicial, no existe una norma en cuanto a la estructura que debe presentar, desde el punto de vista legal, pero se aconseja para su utilidad (Mauleón, 1984) lo siguiente:
- Preámbulo: Nombre del perito. Juez que lo designa. Objeto que se le pide. Fecha y mención del juramento.
 - Parte histórica. Formulación breve y sencilla de los hechos, indicando el procedimiento a seguir.
 - Discusión razonada.
 - Conclusiones.

En 1983, el C.O.P. realizó un estudio destinado a establecer unos criterios que orientaran y sirvieran de coordenadas a la hora de realizar o hacer un informe psicológico. Los siguientes criterios son el resultado de dicho estudio, constituyendo los requisitos que debe cumplir todo informe:

- 1.- Garantizar la máxima neutralidad, evitando el psicólogo la implicación personal o de intereses y también las presiones externas que sesgarían sus objetivos.
- 2.- Garantizar la máxima objetividad, obteniendo datos del sujeto, de su entorno y de las variables que definen la interacción entre ambos.
- 3.- Seguir una metodología definible y definida, guiándose por unos principios teóricos y metodologías concretas para la evaluación, usar una terminología coherente, elegir unos instrumentos de evaluación acordes con esos principios teóricos y planificar la evaluación con objetivos claros y derivados de esa metodología.
- 4.- Los instrumentos que se utilizan deben garantizar la fiabilidad y la validez. Esto implica:
 - Utilizar más de una prueba.
 - Instrumentos de medida que, siendo diferentes, hayan sido diseñados para evaluar un mismo aspecto.
 - Elección de pruebas de probada eficacia científica.
 - Pruebas pasadas en diferentes momentos para evitar sesgos situacionales.
- 5.- El informe debe tener un carácter descriptivo tanto desde el punto de vista diagnóstico, terapéutico como de pronóstico.
- 6.- Consideraciones éticas:

- Título.
- Dejar el informe sólo a quienes corresponde y siempre con el consentimiento del sujeto evaluado.
- Cuidar la forma de expresión para que no afecte a la persona de quien se trate ni a su entorno.
- Verificar la exactitud de los datos ante de expresarlos y ver el uso que se puede sacar de estos datos.

Metodología del Peritaje psicológico

Son numerosas las aproximaciones efectuadas a fin de establecer una metodología de elaboración del Peritaje psicológico. Hay que destacar las obras de Andry (1984), Cooke (1980), Paul (1984), Sadoff (1980) y Ziskin (1980). Sin embargo, una de las propuestas más sistemáticas es el modelo propuesto por Blau (1984) que consta de los siguientes pasos:

1.- Iniciación del caso.

Para comenzar en una peritación, el primer contacto se tiene con el abogado que ha solicitado el servicio, si se trata de la petición por una de las partes. Si es el propio cliente el que demanda el servicio también hay que contactar con su representante legal. El perito también puede ser designado directamente por el juez en el ejercicio de su facultad de libre designación o recurriendo a la lista del Colegio Oficial de Psicólogos, solicitud elaborada para este fin y, eligiendo, mediante esaculación uno de los tres peritos. En los Juzgados de Familia existe un psicólogo adjunto por lo que en este caso el juez acudirá a dicho

profesional para que realice el peritaje. Sea el abogado o el juez el que demande el peritaje, y con ciertas diferencias, el contacto tiene como fin recoger las siguientes informaciones:

- a) Los hechos del caso, se trata de ver los principales hechos que comprenden el caso y el por qué y para qué se pide la intervención pericial. Tener acceso al sumario proporciona una visión de conjunto de cómo se ha desarrollado el caso, en qué momento está y la finalidad del peritaje.
- b) Situar la fecha en la que se realizará la audiencia y programar adecuadamente la evaluación de los sujetos, revisar la literatura sobre el tema y controlar el tiempo que llevará la redacción del informe.
- c) Preparar adecuadamente las supuestas preguntas que tendrá que responder como perito puesto que es ellos sobre los que girará la actividad pericial.
- d) Informarse sobre la disponibilidad de las personas que tienen que ser evaluadas, en qué contexto concreto se llevará a cabo la evaluación y si es adecuado o no, de tal forma que el perito se haga una idea de la conveniencia o no de llevar a cabo la peritación.
- e) Evitar leer otros informes ya realizados a los sujetos objeto de la peritación para proteger su independencia de criterio y que sus hipótesis descriptivas y explicativas se vean contaminadas por las emitidas con anterioridad por otros peritos o profesionales.

- f) Una vez configurada la panorámica general de lo que tiene que realizar, elaborará un presupuesto de los honorarios de la peritación, teniendo en cuenta los pasos a realizar: exploración, revisión de la bibliografía adecuada, elaboración del informe, desplazamientos, contactos previstos a la vista, asistencia a la vista, gasto de material, etc... La propuesta económica se hará por escrito fijando el plazo en el que se abonarán los honorarios. Así mismo parece conveniente que se conteste por escrito sobre la conformidad de dicha propuesta económica.

2.- Preparación del expediente

El dictamen pericial suele ser bastante complejo y no tiene semejanza ni con el clínico ni con el psicopedagógico por lo que es conveniente organizar todo el material por apartados de tal forma que esto suponga una ayuda a la hora de preparar la redacción del dictamen. Los apartados son:

- a) Valoración de las pruebas o procedimiento utilizado de tal forma que responda a las preguntas formuladas.
- b) Los documentos que correspondan al caso y que son: ficha de datos, extracto del sumario, correspondencia del abogado demandante, etc...
- c) Otros informes realizados sobre el mismo caso.
- d) Notas tomadas en las entrevistas realizadas con abogados, juez y sujetos evaluados.
- e) Cronología del caso.

f) Hoja registro de honorarios

g) Asuntos varios.

3.- Recogida de datos

El peritaje es un proceso de investigación en el que es muy importante contar con una buena metodología encaminada a dar respuesta a las preguntas formuladas. La recogida de datos debe orientarse a dichas preguntas pero no ceñirse exclusivamente a estas ya que el perito deberá responder a elementos de detalle que completen o den otra versión a las preguntas centrales.

La elección de los métodos y técnicas de evaluación debe basarse en la fiabilidad y validez de los instrumentos así como ajustarse al proceso científico de elaboración, discusión e integración de hipótesis.

4.- Evaluación de necesidades

Aquí el psicólogo forense evalúa si los datos que ha extraído se adecuan o no a las hipótesis que ha formulado y actúan en consecuencia con la confirmación o no.

5.- Selección de estrategias

En esta etapa el perito debe comprobar que las técnicas utilizadas han respondido a las demandas solicitadas y si es conveniente ampliarlas con otras más que aclaren o completen los datos ya obtenidos, adecuando la peritación al caso concreto de que se trate.

Otras estrategias que el perito debe preparar, se refieren a la preparación de su intervención en la audiencia, cuando tenga que justificar las pruebas utilizadas, la metodología propuesta y las conclusiones emitidas.

6.- Informe pericial

En general, el resultado de la evaluación realizada por el perito se presenta por escrito aunque también puede ser oral. El esquema básico consta de:

Introducción
Procedimiento utilizado
Conclusiones
Discusión

Proceso de Evaluación Familiar

El objetivo de la evaluación, es el estudio científico del comportamiento del grupo familiar. El proceso de evaluación se realiza en varias fases que, en general, son las mismas que se utilizan en cualquier estudio científico (Fernández Ballesteros, 1980). Siguiendo el modelo, de esta autora en los temas de Familia, se siguen estos pasos para evaluar a la pareja y a los hijos (Bernal, 1988).

1. Observación y primeras entrevistas de información

En esta fase se recogen todos aquellos datos que permitan establecer una serie de inferencias sobre las relaciones del grupo familiar y que estén relacionadas con la idoneidad de los padres para atender a sus hijos. Para ello se realizan una serie de entrevistas:

- a) Entrevista a los padres sobre historia y comportamiento del niño/a.
- b) Entrevista a los padres sobre su historia y etapas de conflicto.
- c) Entrevista a los hijos.
- d) Entrevista con el profesor y/o personas allegadas al menor.

Toda esta primera información se complementará con las observaciones no sistemáticas realizadas durante la interacción mantenida entre el evaluador y las personas entrevistadas.

2. Formulación de hipótesis

De la información-observación anterior se sacan una serie de hipótesis que deberán ser contrastables y estar basadas en datos empíricos debidamente comprobados. Llegado este punto el evaluador debe hacerse una serie de preguntas que basadas en las primeras informaciones sirvan para responder a las preguntas formuladas en la petición del informe y por lo que se ha planteado la evaluación.

3. Deducción de conclusiones

En este momento, el psicólogo debe plantearse qué variables va a analizar y que están implicadas en los supuestos que ha formulado y también debe planificar el caso, eligiendo las técnicas que considere apropiadas y el procedimiento que va a seguir en la verificación.

En los temas de familia, como lo que se trata es de evaluar la competencia para ejercer la Guarda y Custodia de los menores, habría que delimitar qué variables psicológicas la constituyen. Para ello es necesario establecer, primeramente los criterios de referencia, que aunque puedan venir formuladas en la ley, necesitan quedar muy especificados para así extraer las variables psicológicas y sociales que deban ser consideradas. Clausen (1968) desarrolló la siguiente lista de comportamientos parentales ideales para cubrir las necesidades de los hijos:

- 1.- Proporcionarles cuidados físicos y de crianza.
- 2.- Acompañarles en la adquisición de habilidades asociadas a las necesidades fisiológicas básicas.
- 3.- Enseñarles a un autocuidado que les garantice una seguridad.
- 4.- Orientarles hacia su mundo inmediato (parientes, vecinos, comunidad y sociedad) así como hacia sus propios sentimientos.
- 5.- Transmitirles valores y objetivos culturales motivándoles a su aceptación.
- 6.- Motivarlos hacia habilidades interpersonales y modos de sentir y desenvolverse en relación con los demás.
- 7.- Guiarlos, corregirlos y ayudarlos a formular sus propios objetivos y plantear sus propias actividades (Clausen, 1968).

Desde esta perspectiva las unidades de análisis que deben ser consideradas son:

- Aspectos procesuales del comportamiento interpersonal de todo el grupo familiar.

- Habilidades y actitudes competentes respecto a la Guarda y Custodia.
- Necesidades psicológicas y sociales de los menores.

En España no existen instrumentos de evaluación que se hayan elaborado concretamente para estos temas, así es que se usan pruebas clásicas que cuidan el factor intelectual, de personalidad y de adaptación, usándolas de forma semejante a la evaluación clínica (Avila, 1986), aunque este tipo de evaluación difiere del modelo clínico.

Un intento de usar técnicas construidas para el caso en concreto es la utilización de la observación sistemática por dos observadores preparados y la entrevista semiestructurada durante todo el proceso de evaluación, diseñando cada entrevista en función del resultado de la anterior y de los nuevos acontecimientos que se producen en todo el proceso (Bernal, 1988).

4. Verificación

La aplicación de las técnicas y la elaboración de los resultados para comprobar las hipótesis formuladas es lo que comprende esta fase. Si no se confirman las hipótesis debe volverse a plantear nuevas hipótesis.

5. Descripción, clasificación, predicción y toma de decisiones

Las conclusiones a las que se llegue deben ser establecidas en base a los objetivos formulados inicialmente.

Dificultades para la evaluación en los casos de ruptura marital.

La evaluación, como hemos señalado anteriormente, tiene como objetivo dar respuesta a aquello que se pregunta. La pregunta más usual que se le hace a un perito en los temas de familia es que determine sobre la idoneidad de las partes para ostentar la guarda y custodia de los hijos. Como la evaluación debe organizarse en base al objetivo formulado, en estos casos, es informar sobre la competencia-idoneidad del padre y de la madre concluyendo a favor de uno de ellos como más idóneo o menos perjudicial para ocuparse de los hijos (Bernal, 1990).

Con independencia de la orientación del perito y de su pertenencia o no a un equipo psicosocial de los Juzgados de Familia, el planteamiento de base para la intervención psicológica es compartido: evaluación y emisión de un informe donde se recogen los resultados de ésta evaluación, y con un mismo objetivo a la hora de realizarlo: qué padre es el mejor o presenta menos elementos psicopatológicos en su exploración. Lo difícil es delimitar, los criterios psicológicos que están en la base de "buen padre o buena madre" además de tener en cuenta una serie de elementos que dificultan la evaluación de estos criterios.

En general, los sujetos presentan una gran carga emocional, fruto de las disputas mantenidas por la pareja antes de la ruptura. Este desborde emocional ocasiona comportamientos inadecuados en ambas partes, que se agudizan por la utilización del procedimiento contencioso para resolver legalmente su situación. Este modelo legal de controversia, acrecienta las desavenencias de la pareja por medio de sus abogados respectivos que actúan como defensores (ABA, 1981; Smart, 1982), convirtiendo al otro miembro en contrincante al que hay que vencer. Los sentimientos negativos unidos al hecho de separarse (Bernal, 1986), los ataques legales continuados, y la utilización de los hijos en esta batalla, repercute negativamente sobre el núcleo familiar y sus miembros presentan comportamientos negativos exagerados y alteraciones emocionales propios de la situación que están atravesando. (Benians, 1980; James y Wilson, 1986).

Cuando se demanda un peritaje, el proceso legal ya está avanzado y el psicólogo se encuentra con un grupo objeto de la evaluación donde los criterios de idoneidad-competencia como padres están enmascarados con aspectos que podrían tomarse como psicopatológicos si no se considerara la situación altamente estresante en la que se encuentra la familia (Grisso, 1986).

La decisión de romper, en general, es tomada por uno solo de la pareja, por lo que la situación se complica al presentarse una actitud de oposición por parte del miembro que no quiere separarse, añadiendo una nueva dificultad en el momento de la evaluación (Díaz Usandivaras, 1986).

El miembro de la pareja que se siente víctima incluye a sus hijos en este papel, procurando formar una alianza que le permita luchar contra el que intenta deshacer la familia, ya que los sentimientos de abandono los generaliza a los hijos. De esta manera se presenta ante el evaluador como la persona encargada de defender a los menores de un padre o una madre culpable de todo lo ocurrido y con influencia negativa para los hijos. La persona que se siente atacada, responde de la misma forma y ambos intentan probar al evaluador que es mejor padre/madre para ocuparse de sus hijos, utilizando para ello el desprestigio del otro. Estas peleas por la custodia de los hijos, aumenta la hostilidad entre las partes y proporciona un mayor daño a los menores (Bienenfeld, 1983; Grisso, 1986; Shapiro y Caplan 1986).

Las distintas emociones del que toma la decisión y del que se siente obligado a separarse plantean expresiones emocionales que interesa conocer para encuadrarlas adecuadamente en el proceso de evaluación, así como la forma de impactar la ruptura en ambos sexos (Jacobson and Jacobson, 1987). Hay estudios que indican que las mujeres experimentan más estrés antes de la separación y los hombres después de ésta (Caldwell, Bloom y Hodges, 1984).

De igual manera, los niños de distintas edades plantean emociones distintas que están en relación a su desarrollo cognitivo y a cómo se comportan sus padres ante la ruptura (Jacobson y Jacobson, 1987; Wallerstein y Kelly, 1980).

Otra dificultad para la evaluación es la concepción del psicólogo de lo que implica buena madre/buen padre, y

si se corresponde con los roles tradicionales asignados a cada sexo. Si la madre o el padre evaluados no se atienen al modelo del perito, se considerará no adecuado y las preferencias irán hacia el otro padre.

Girdner (1985) dice que así como la mujer ha sido discriminada, y lo sigue siendo, en el trabajo, el hombre lo es en cuanto al tema de la familia ya que se asigna la guarda y custodia a la madre, en general, aunque ya hay cada vez más padres que la reclaman, y aquí vuelve a discriminarse a la mujer, ya que cuando los dos quieren tener a los hijos, las mismas actuaciones son juzgadas de forma distinta, según sea el padre o la madre quien las haga.

Estas dificultades nos inducen a pensar el plantear una forma alternativa de intervención psicológica en terrenos donde entra en juego la regulación de las relaciones interpersonales (Duquette, 1978). Esta alternativa no tiene su base en la evaluación, sino que su principal objetivo es la negociación y resolución de los problemas, dando a las partes las habilidades mínimas requeridas, para poder dialogar, y así poder plantear soluciones alternativas a sus desacuerdos, equipándolas de aquellos conocimientos que les permitan decidir más adecuadamente, teniendo en cuenta a todos los integrantes del grupo familiar (Vives Biel, 1983). Aquí el psicólogo tiene un rol distinto al de evaluador, actuando como negociador emocional, planteando la conveniencia del mutuo acuerdo, la participación de la familia en todo el proceso y el derecho de los menores de no ver privados de ninguno de los dos padres, ni física ni psíquicamente (Bernal, 1987, 1990).

3.- INTERVENCION PSICOLOGICA Y JURIDICA EN LOS PROCESOS MATRIMONIALES

3.1 Introducción

3.2 Diseño del trabajo interdisciplinar: Primera entrevista, estudio conjunto, información, estudio psicológico y jurídico, fase educativa y resolución.

3.- INTERVENCION PSICOLOGICA Y JURIDICA EN LOS PROCESOS MATRIMONIALES

Introducción

El esquema de trabajo presentado a continuación es una aportación novedosa de los conocimientos psicológicos al procedimiento legal utilizado para resolver los problemas de pareja. En esta experiencia, la primera que se ha llevado a cabo en España, (Martín y Bernal, 1989) la figura del psicólogo no es la de mero colaborador del abogado sino un profesional que trabaja a la par con él en cada una de las etapas del procedimiento matrimonial y que pone sus conocimientos psicológicos al servicio de un mejor conocimiento de la actividad humana (López Valadez, 1980).

La emoción, tema clave de la Psicología aparece con toda intensidad en el despacho del abogado. En general, la persona que requiere los servicios de un abogado se encuentra ante una situación problemática que conlleva angustia, confusión, desesperanza (Kelly, 1982) en unos casos, y resentimiento e irritación ante lo que cree injusto, en otros. Este estado emocional se agrava por la inseguridad del sujeto ante el desconocimiento de las posibles vías legales que mejor sirvan para la resolución de su problema (Bernal, 1990; Price y Mc Creary, 1976).

Las dificultades emocionales ante problemas concretos como los relacionados con la herencia (Bernstein, 1977; Sprott, 1973); aquellos que tienen que ver con procedimientos de divorcio (Emerson y Messinger, 1977; Sabalis y Ayers, 1977), diferentes ataques físicos como violación y

asalto (McCombie, 1980); violencia doméstica (Belsky, 1980; Brown, 1979; Warner, 1981), nos indican cómo los sujetos se encuentran cuando están recibiendo consejo legal. En todos estos casos el abogado se ocupa de encontrar la vía legal más idónea para la resolución del problema presentado pero la fuerte carga emocional de los clientes dificulta dicha labor, ya que transforma detalles que en otros momentos serían insignificantes, en verdaderas tragedias, donde los deseos se convierten en exigencias, planteándose una batalla abierta a la cólera, la amargura, el resentimiento y la desesperación, destruyendo, a veces, el trabajo realizado por el abogado (Schoenfield y Shoenfield, 1981).

Otra consecuencia emocional de estos sujetos, se puede observar, en la dificultad que tienen al intentar explicar el motivo por el que han acudido a un abogado. El relato de los hechos, está interrumpido con frases de irritación, lloros, verbalizaciones incoherentes, historia personal, juicios de valor, injurias a la otra parte que le ha infringido el daño, etc. Los hechos presentados se confunden, se distorsiona la realidad y esto es un exponente de esta elevada tasa emocional que acompaña a los sujetos en la primera entrevista con el abogado (Bernal, 1990). Esta carga emocional va a hacer, a su vez, que los sujetos no presten la atención debida a las explicaciones e instrucciones que sus abogados les proporcionan, modificando algo de lo escuchado, olvidando parte y no captando alguna información. Las personas que rompen su relación dicen encontrarse desajustados y con dificultad para controlar la situación de ruptura (Bernal, 1986). Incluso si la relación no era muy gratificante (Berscheid, 1982).

Los clientes que acuden al abogado por un problema matrimonial, exhiben, en general, un comportamiento no muy estable y que, en ocasiones, induce a pensar que se trata de comportamientos patológicos, pero la generalización de estos comportamientos exagerados ante la ruptura y los estudios sobre la reacción emocional ante la misma (Berscheid, 1982) apoyan más la idea de una reacción lógica ante un acontecimiento doloroso (Girdner, 1985).

El procedimiento contencioso, el más comunmente usado por las parejas, ayuda a elevar la intensidad emocional que estos sujetos manifiestan, ya que, tal y como explicábamos al principio de este escrito, contribuye a que la lucha entre las partes se haga más encarnizada. Los abogados defensores recogen todos los detalles que sus clientes les dan del otro, lo adornan y lo mandan como dardos al contrario que servirán como acicate para continuar la pelea. Este tipo de procedimiento no es adecuado para resolver las disputas familiares, sino que empeora las relaciones al no abrir una vía posible para el consejo y la negociación (Grossman, 1985; Irving, 1980; Ryan, 1985).

La ley 30/81 de 7 de julio, introdujo una alternativa al procedimiento contencioso, el consensual o de mutuo acuerdo. Este tipo de procedimiento reduce el número de profesionales intervinientes, pudiendo las dos partes, servirse de un sólo abogado y procurador, reduciéndose así el costo del mismo. La posibilidad de que ambas partes tengan una misma representación legal, repercute positivamente en los sujetos, ya que elimina la figura de adversario, por lo que la pareja se sirve de los consejos de un mismo profesional que a la vez se ocupa de los intereses de los dos y no del de uno de ellos en contra de los del otro.

Este procedimiento elimina el ataque frontal entre los dos componentes de la pareja, reduciendo así el tiempo que se utiliza en la tramitación legal y el coste emocional (Bernal y Martín, 1991; Grossman, 1985).

La situación emocional manifestada por estos clientes retrasa la gestión del problema legal y los abogados se encuentran con un tema difícil que intentan solucionar de formas distintas (Bernal, 1990):

- . Unos sirven de apoyo emocional convirtiéndose en defensores incondicionales del cliente, retoman los ataques y críticas contra la otra parte, agudizando el dramatismo se solidarizan con el sujeto asombrándose de su aguante. Estos profesionales animan al cliente a la lucha sin cuartel, teniendo como bandera la victoria.
- . Otros escuchan sin interés el relato vivo del cliente cortando secamente cualquier comentario que no tenga que ver con el tema central. Este tipo de abogados piensan que su rol es el de experto en temas legales y que no están para oír historietas ni enjugar las lágrimas a nadie.
- . Los hay que disfrutan con los largos relatos haciendo de "psicólogo" sin serlo, aconsejando qué deben hacer en todo momento, pero experimentando un cierto temor al fracaso en esta ayuda psicológica y que puede, a su vez, representar una amenaza a su competencia legal.

La vía para la resolución del problema que el cliente plantea, generalmente en materia civil, tiene dos alterna-

tivas posibles: una, mediante un procedimiento litigioso, que como su nombre indica, consiste en un modelo de trabajo basado en la controversia, en el ataque frontal con la otra parte, que se convierte en el adversario, declarándose una lucha por conseguir el triunfo sin importar, muchas veces, a quién hay que pisar para conseguirlo. Dentro de este Sistema de Justicia de confrontación, el abogado de cada parte, está obligado a proteger los intereses de su "cliente", realizando una búsqueda y una presentación completa y parcial de los hechos, con la creencia de que el otro defensor actuará de igual manera (Dillehay y Nietzel, 1986). Este tipo de procedimiento, el más utilizado en nuestro sistema, contribuye a fomentar el incremento emocional de los sujetos, desatándose la agresividad de las partes por el propio ataque, por la instigación de los defensores respectivos, por los amigos y familiares de cada oponente, por el sistema de justicia basado en la verdad, equidad y bondad, pero que puede ser mal interpretado en función de la competencia o habilidad del abogado, y por la propia sociedad que asocia al vencedor con el bueno, apoyado por la justicia, y al perdedor, como el malo, el indeseable, el que no lleva razón. El acicate final está en que, en general, el vencedor se suele llevar un premio económico, y el perdedor queda con la vergüenza de la derrota (Grossman, 1985).

Los pasos que comprende el procedimiento contencioso los lleva a cabo el técnico en estos temas, el abogado, no permitiendo, en general, la participación del cliente en la toma de decisiones relativas al caso, pese a que existe información sobre el efecto positivo de la intervención de los clientes en esta toma de decisiones (Rosenthal, 1974; Shaffer, 1976).

Los trámites legales se inician, y el cliente se encuentra en un tipo de procedimiento que no entiende, que no elige y del que desconoce sus consecuencias y si existe otra forma de llevarlo a cabo. El abogado es el técnico, el cliente un lego en la materia, y todo lo que el entendido diga el cliente lo realizará sin preguntar, pero con la inseguridad que produce ir conduciendo por un sitio desconocido mientras otro te va diciendo por donde tienes que doblar (Clemente, Bernal y otros, 1990).

Al poco tiempo empiezan a llegar contestaciones de la otra parte, que a su vez tiene un asesor legal y que sigue el esquema "la defensa de su cliente". Estas contestaciones incluyen informaciones exageradas por el sujeto y por su defensor y que consiste en oponerse a lo que el otro dice y atacar al contrario.

La lucha entre las partes sigue incrementando la tasa emocional añadiéndose a esto el temor al juicio que se avecina y que representa un peldaño más en la escala emocional (Irving, 1980 y Ryan, 1985).

Este tipo de procedimiento supone no sólo un elevado coste emocional para el cliente, sino que además resulta encarecido por la cantidad de gestiones que el abogado tiene que hacer, las demandas y contrademandas que se interponen y la cantidad de tiempo que se invierte, lo que justifica la larga duración de estos procedimientos.

La otra alternativa posible para la tramitación legal del asunto planteado por el cliente es la vía consensual, o el procedimiento de mutuo acuerdo que, como su nombre indica, supone una forma de resolver los problemas inten-

tando llegar a un acuerdo entre las partes, de tal manera que ambos cedan y puedan acortar la distancia que les separa. Este tipo de procedimiento ayuda a limar asperezas y los abogados respectivos se encargan de la negociación que permita a sus respectivos clientes ganar una cosa y renunciar a otra (Schelling, 1960).

Este procedimiento amistoso constituye, en sí mismo, una forma más civilizada de llevar a cabo una disputa, ocasiona menos problemas emocionales a los clientes, ya que descarta la lucha encarnizada que ocasiona el procedimiento litigioso, desaparece la dicotomía vencedor-perdedor y el costo de este tipo de procedimiento es mucho menor a la vez que decrece el tiempo invertido para su resolución (Grossman, 1985). Sin embargo, el cliente tampoco asume un papel principal en esta negociación y su papel consiste en poco más que en plasmar su firma donde el abogado le diga (Clemente, Bernal y otros, 1990).

Si tenemos en cuenta el panorama antes expuesto podemos observar varios aspectos:

En la descripción expuesta nos encontramos, en primer lugar, con la situación emocional de las personas que acuden al abogado a plantear su ruptura (Clemente, Bernal y otros, 1990) así como una falta de información sobre cómo resolver su problema, tanto en el plano de la tarea como con respecto al plano emocional. En segundo lugar, la preparación del propio abogado en estos temas desde una perspectiva exclusivamente legal le hace poco hábil para manejar las emociones de sus clientes (Emerson y Messinger, 1977; Sabalis y Ayers, 1977) así como nada inclinado a informarles y a dejar que participen en la toma de decisión

y en sugerencias de cómo orientar su propio procedimiento, pese a que una mayor participación de éstos es positiva (Rosenthal, 1974). En tercer lugar, el propio sistema de Justicia basado en la confrontación, que impulsa a los miembros a llevar sus luchas personales al terreno legal (Girdner, 1985), contribuyendo a un incremento de los problemas emocionales existentes (Irving, 1980 y Ryan, 1985), no sólo no es el mejor, sino que es el peor entre las posibles alternativas para resolver los problemas de familia (Association of Family and Conciliation Courts, 1984; Girdner, 1985).

Estos tres aspectos descritos y la experiencia profesional con parejas donde se observa una separación menos conflictiva en aquellas parejas que han realizado terapia de aquellas que no lo han hecho, sirven de base para el diseño de un modelo de trabajo que trata de explicar las interconexiones entre el proceso legal y familiar (Bernal y Martín, 1989).

TRABAJO INTERDISCIPLINAR

I. OBJETIVOS

MUTUO ACUERDO

A PAREJA COMO SUJETO ACTIVO DE SU
PROCEDIMIENTO

II. METODOLOGIA DE TRABAJO

A) Entrevista conjunta.

B) Información PSICOLOGICA y JURIDICA

Efectos emocionales de la
ruptura en la pareja
en los hijos

Regulación legal

Procedimientos a
seguir y duración

Explicar la reciprocidad

Coste económico de
ambos procedimientos

Implicación de los padres
en la vida del niño

Consecuencias
jurídicas

Conservar la buena imagen
de los padres

C) Modelo Educativo

- Habilidades sociales y de comunicación.
- Técnicas de resolución de problemas.
- Técnicas de control del estrés
- Habilidades de gestión y negociación

D) Resolución del conflicto: Inicio del procedimiento.

Objetivos.- Uno de los objetivos planteados en este trabajo es conseguir que la pareja pueda tramitar su procedimiento por vía consensual o de mutuo acuerdo, ya que los trámites se simplifican, no necesitan alegar ninguna causa contra el otro para solicitar la separación o el divorcio, no tienen que continuar la pelea en el campo legal, resuelven su situación en un menor tiempo y los costes se ven reducidos considerablemente, redundando positivamente en la situación emocional de todo el núcleo familiar (Goldberg et al, 1985; Kaslow and Schwartz, 1987; Pruitt and Rubin, 1986). Otro objetivo que se juzgó interesante es hacer que la pareja participe en su propio procedimiento. La elaboración del Convenio Regulador, donde tiene que regularse puntos tan importantes como la relación con los hijos, reparto de bienes, uso del domicilio, etc... no puede quedar en manos del abogado, primero, y después en los del juez, sino que los propios interesados deben colaborar en esa elaboración haciendo las propuestas que crean oportunas, participando así en la regulación de su vida futura.

La Metodología de trabajo para alcanzar estos objetivos comprende los siguientes pasos (Bernal y Martín, 1991):

1. Primera Entrevista.

Ante la dificultad del abogado para manejar las emociones elevadas que presentan las personas que demandan "asesoramiento jurídico" en casos de ruptura de pareja, la primera entrevista se hace estando presente el psicólogo. Este puede enfocar las emociones distinguiéndolas de los hechos objetivos, brindando ayuda, tanto al abogado en la toma de datos necesarios para orientar el caso, como al cliente en unos momentos en que se encuentra incapaz de

manejar adecuadamente los acontecimientos abrumantes del momento (Lazarus, 1980). Tener un buen contacto con el cliente en estos primeros momentos es muy beneficioso ya que se le da la oportunidad de exponer sus emociones sin temor, sintiéndose comprendido y tranquilizado al ver que sus expresiones exageradas no son consideradas anormales, que no obtiene una desaprobación sino que se le explica las razones que las justifican.

Al relatar el cliente el acontecimiento que le movió a la consulta se debe estar atento a cómo éste ha influido en la vida del sujeto (Levinson, 1978), es decir, qué significa para él el divorcio, cómo lo interpreta y qué consecuencias prevee que tendrá sobre él y sobre los demás (mujer, hijos, padres, amigos).

En esta primera entrevista, se le indica el sistema de trabajo conjunto, la utilidad de los servicios legales y psicológicos que hacen que la persona no se encuentre sólo con sus preocupaciones excesivas, unas orientaciones mínimas, tanto en el terreno jurídico como en el psicológico, conducentes a un descenso de la carga emocional del sujeto y la conveniencia de ponernos en contacto con la otra parte, para intentar gestionar el acuerdo, explicándole las ventajas del procedimiento consensual sobre el litigioso, de forma breve (Bernal y Martín, 1991).

2. Estudio conjunto.

Los datos recogidos por ambos profesionales se cotejan, para enfocar el tema de la mejor manera posible. Se estudian las distintas formas legales de actuar, relacionándolas con la situación concreta del cliente,

anticipando las consecuencias de todo tipo (emocionales, económicas, etc.) en cada una de las alternativas legales propuestas. Se realiza un listado de documentos y gestiones necesarias para comenzar los trámites, personas con las que convendría hablar, duración previsible de cada una de las alternativas posibles y coste de las mismas.

El psicólogo aporta sus conclusiones sobre el sujeto, relacionando la situación personal, familiar, social, etc., muestra las posibles consecuencias emocionales ante las distintas soluciones legales, la forma en que se debe preparar el terreno para que el sujeto vea la conveniencia del acuerdo. Los pasos adecuados en caso de que no se consiga éste, así como la preparación del cliente para afrontar cada una de las fases del procedimiento.

3. Información psicológica y jurídica

Una vez realizado el estudio conjunto del caso, se pasa a informar al sujeto de los resultados del mismo, mostrándole al cliente las posibles alternativas legales, sus consecuencias, su coste y duración, implicaciones emocionales para el sujeto, para la otra parte, familiares, etc., no sólo a corto plazo sino también a medio y largo plazo. Se describe al sujeto cada una de las fases por donde tendrá que pasar según se siga uno u otro procedimiento, acompañándolas con las reacciones emocionales más usuales. Con esto se pretende que el cliente sepa en todo momento que opciones tiene, que efecto puede causar cada una de ellas, y disponga de la información adecuada para que pueda decidir con mayor seguridad la opción más correcta, o por lo menos, la menos mala.

Se exploran con el sujeto las ganancias y pérdidas de cada una de las alternativas y se adecuan a las necesidades del sujeto. Esta exploración se realiza preguntándole cómo piensa que puede beneficiarle o perjudicarlo cada una de las soluciones presentadas. De esta manera, se consigue que la persona empiece a tomar medidas apropiadas hacia el enfrentamiento de su problema.

Los puntos teóricos que sirven de base a la INFORMACION PSICOLOGICA son:

Los efectos emocionales de la ruptura en la pareja y en los hijos.- No todas las personas experimentan el mismo impacto emocional ante la ruptura. La intensidad emocional es distinta en función de una serie de variables como la edad, el sexo, el papel desempeñado en la ruptura -el que deja y el que es dejado-, el factor económico, la calidad y duración de la relación mantenida, la existencia de alternativas externas, el apoyo familiar en la decisión de ruptura, etc. (Weiss, 1985).

En cuanto a los hijos, ocurre otro tanto; no todos los niños viven igual la separación de sus padres; depende de variables como la edad del niño, la interacción mantenida con los padres, el comportamiento de éstos, etc. (Magid, 1980).

Estas informaciones generales se adecúan al caso en concreto, tanto a la pareja como al momento evolutivo de los hijos de que se trate, explicando a los padres las reacciones más probables de éstos ante la situación conflictiva, así como la forma, el contenido y el momento de comunicarles la ruptura de la manera más adecuada.

Reciprocidad.- La información a la pareja de que no se puede entender el comportamiento de uno de ellos sin tener en cuenta el del otro, elimina la asignación de los roles de víctima-culpable, repartándose las responsabilidades en lo referente a los problemas que han llevado a la situación de ruptura.

La implicación de los padres en la vida del niño.- Esta información se plantea como una necesidad que los niños tienen de saber que ambos padres, pese a su ruptura, siguen ocupándose de él, preocupándose por su bienestar, y que podrá contar con ellos en cualquier momento. (Association of Family & Conciliation Courts, 1984; Bienenfeld, 1983; Chase, 1983; Saposnek, 1983; Wallerstein y Kelly, 1980; Ware, 1982). Se anima a los padres a que ambos intervengan en la vida del niño, haciendo complementarios los roles de padre custodio-no custodio (Abelsohn, 1983; Compennolle, 1982).

La **INFORMACION JURIDICA** comprende los siguientes puntos:

Regulación legal.- Se informa a los clientes de las causas que contempla la Ley para poder solicitar la separación o el divorcio, explicándoles con detalle las que más directamente afecten a su supuesto concreto, así como de los requisitos y documentación necesarios para el inicio del proceso. Se les indica la forma de conseguir los documentos y demás medios probatorios precisos para lograr el fin que se persigue. Y por último, se les hace ver que si se tramita el procedimiento por mutuo acuerdo, en el supuesto de la separación matrimonial, no es necesario

alegar ni probar causa alguna, sino que el acuerdo es suficiente.

Procedimientos a seguir y duración de cada uno.- A continuación se describen las dos formas de regular legalmente los problemas de relación: el procedimiento por mutuo acuerdo o consensual y el contencioso.

Se expone brevemente a los clientes la tramitación de cada uno de ellos, destacando la simplificación del que se sigue por mutuo acuerdo entre los cónyuges, que si no hay hijos, se limita a una ratificación de los mismos ante el Juez, y si hay hijos, se añade como trámite el traslado obligatorio del Convenio Regulador al Ministerio Fiscal, prescindiéndose de la prueba testifical, pericial y de exploración de los hijos menores, quedando reducida la prueba a la documental. Ello implica un menor tiempo de duración del procedimiento que se sigue por mutuo acuerdo. Se informa también, basado en nuestra experiencia, del plazo mínimo y máximo de duración, tanto del procedimiento por mutuo acuerdo, como del contencioso o sin acuerdo de los cónyuges.

Coste económico.- Un punto que las personas se muestran siempre deseosas de conocer lógicamente, es el económico. Quieren saber desde el principio cuanto les costará exactamente el procedimiento. Por ello intentamos hacer cuanto antes un estudio económico, en función de si se tramitará o no con acuerdo de los cónyuges. Y una vez hecho el estudio, se da a los clientes un presupuesto, y se les informa de la manera en que podrán abonarlo, si sus posibilidades económicas no les permiten hacerlo en un solo pago.

Consecuencias jurídicas.- Finalmente se les explican los efectos que produce la Sentencia de Separación y Divorcio, y fundamentalmente los relativos a los hijos, la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, las posibles pensiones por alimentos y por desequilibrio económico y la disolución del régimen económico matrimonial. Es importante mostrar la correspondencia entre los efectos que produce una Sentencia de Separación o Divorcio en el proceso contencioso, con los mismos puntos que comprende el Convenio Regulador que negocian los cónyuges en el proceso por mutuo acuerdo.

4. Estudio psicológico y jurídico de la problemática planteada.

El paso siguiente a la información consiste en un análisis psicológico de la situación familiar de forma global, para partir de una realidad que nos ayude a concretar la alternativa más viable y menos perjudicial para todos los miembros. El objetivo de esta evaluación psicológica está en las necesidades de los hijos, según su momento evolutivo, y relacionarlas con la disponibilidad afectiva y económica de los padres.

Tras la discusión conjunta del estudio y de las distintas posibilidades legales, procedemos a transmitir a la pareja los resultados de nuestro trabajo, escuchamos sus opiniones y les planteamos la conveniencia del acuerdo, y de un enfoque adecuado a la resolución de su problema, contando con sus aportaciones personales.

5. Fase educativa.

Los aspectos que componen esta fase se refieren a enseñar al cliente una serie de destrezas que le ayuden a enfrentarse al problema de forma más eficiente. En general, es útil, sea cual sea el caso, enseñar al cliente habilidades de comunicación, que le ayuden a poder escuchar al otro en las entrevistas conjuntas, a procesar dicha información y a saber cuándo y cómo responder (Liberman et al. 1987); también las técnicas de solución de problemas (D'Zurilla y Goldfried, 1971), y las técnicas de manejo del estrés son muy útiles en estos casos ya que se enseña al cliente a identificar al agente provocador del estrés, a saberlo afrontar y a valorarlo adecuadamente (Meichenbaum, 1977; Wolpe, 1969). Todas estas técnicas tienen como objetivo conseguir que el sujeto se encuentre más hábil para intervenir en su propio procedimiento (Martín y Bernal, 1989) consiguiendo también reducir la intensidad emocional que hemos descrito en estos clientes al principio del texto.

Además de las técnicas descritas, en esta fase también se utiliza la desensibilización sistemática (Wolpe, 1958) para adiestrar a los sujetos a enfrentarse al juicio, en el caso de no ser posible el procedimiento consensual. Esta preparación consiste en ir viendo los pasos que debe recorrer el sujeto, desde la contestación a las posibles preguntas, escuchar las respuestas de la otra parte a las preguntas formuladas por nuestra parte, aireaciones de temas delicados, ataques dolorosos, etc., hasta la preparación para los días anteriores al juicio, la sala donde se celebre, la citación, la espera en el juzgado, el encuentro con la otra parte.

6. Fase de Resolución del conflicto e inicio del procedimiento.

Cuando se ha conseguido el acuerdo en cada uno de los puntos del Convenio Regulador se redacta dicho convenio con la pareja, iniciando la tramitación legal previa información a los sujetos de los pasos y plazos previstos hasta la recepción de la sentencia judicial así como los efectos legales de la separación.

4.- LA MEDIACION FAMILIAR : UN NUEVO CAMPO DE ESTUDIO

- 4.1 Introducción
- 4.2 La Mediación y los conflictos familiares
- 4.3 Variables que justifican el uso de la Mediación
- 4.4 La intervención del psicólogo como mediador
- 4.5 Experiencias de Mediación Familiar.

4.- LA MEDIACION FAMILIAR: UN NUEVO CAMPO DE ESTUDIO.

Introducción

La situación que da lugar al procedimiento de mediación es el conflicto. Este tiene elementos positivos y negativos y su energía puede ser aprovechada como actividad para resolver problemas (Deutsch, 1973). Hay mediación porque ocurre un enfrentamiento entre dos o más partes. Este enfrentamiento se produce porque ambos pueden querer metas opuestas, afirmar valores antagónicos tener intereses divergentes o perseguir simultánea o competitivamente la misma meta (Touzard, 1981). El conflicto termina con la eliminación de una parte o porque el coste subjetivo del conflicto es superior al que se estima produce la detención del mismo (Touzard, 1981). Descartando la primera opción, de eliminar al contrario, los modos que suelen usarse para resolver los conflictos son: la negociación, la mediación y el arbitraje (Druckman y Harris, 1990; Folberg y Taylor, 1984; Pruitt, 1990).

La negociación es un proceso de discusión que se realiza por las partes enfrentadas, por medio de sus representantes oficiales y cuyo objetivo es llegar a un acuerdo (Gulliver, 1979; Kremenjuk, 1991).

El arbitraje es un proceso de negociación donde el árbitro tiene poder para tomar una decisión y las partes se someten a ella, aceptando su juicio (Colosi y Berkeley, 1989). Esto significa que las condiciones de aplicación del arbitraje las fija la ley, por lo que su estudio nos

resulta menos interesante desde una perspectiva psicosocial (Touzard, 1981).

La mediación es un tipo de negociación, donde las partes enfrentadas cuentan con una tercera persona neutral que les facilita la búsqueda de una solución para el conflicto mantenido (Cormick, 1981). El mediador no tiene, como el árbitro, poder para imponer soluciones, sirve de catalizador para que las partes lo hagan por sí mismas (Simkim, 1971).

Existe también una diferencia entre Conciliación y Mediación. La primera supone una función menos activa del tercero neutral, intentando que las partes tengan unas condiciones buenas para que discutan sus desavenencias, facilitando las relaciones y la comunicación entre las partes. La mediación también tiene esta función pero supone una mayor participación del mediador: interviene en la discusión, hace sugerencias e incluso formula recomendaciones con vistas a un acuerdo (Maggiolo, 1971; Peters, 1952 y Simkim, 1971).

En los temas laborales, la mediación se suele pedir cuando la negociación se encuentra en un callejón sin salida, interviniendo en un momento de crisis para todos los puntos en desacuerdo o para alguno de ellos. El mediador está al servicio de ambas partes y debe ser imparcial. Sirve también para facilitar la comunicación, entre las partes, ya sea en las reuniones conjuntas, actuando de organizador de la reunión así como de animador de la discusión, como en las reuniones por separado con cada una de las partes. Estas reuniones tienen como objetivo preparar a cada uno a entender las propuestas

nuevas, evaluar las alternativas distintas y ventilar sentimientos personales. Es importante lograr que las partes se comuniquen, porque es el requisito para conseguir los acuerdos (Bornstein et al. 1989).

La mediación, es una clase de negociación, que incluye al mediador. Ann Douglas (1962), distingue tres fases en el proceso de negociación: 1) enumerar los puntos en litigio, 2) explorar las posibilidades de negociación y 3) el desenlace. Estas fases tienen cierta semejanza, con las fases del modelo descriptivo de Mediación, propuesto por Pruitt (1989), donde se observa una primera fase introductoria, donde se aclaran las reglas de actuación y se da información; una intermedia, donde se exponen los problemas y se generan alternativas; y una fase final, encaminada a conseguir acuerdos. Un modelo similar, fue propuesto con anterioridad (Landsberger, 1955 a y b; Saw et al, 1973) y recientemente, se han publicado estudios que confirman la efectividad de estos modelos (Carnevale y Conlon, 1988) y también en la mediación judicial (Wall y Rude, 1991).

Estas reglas no tienen un reconocimiento universal. Se pueden considerar como costumbres con una tendencia a cumplirlas pero que nada asegura su cumplimiento. Iklé, (1964) señala una serie de reglas que rigen el desarrollo de las negociaciones.

Negociación de buena fe. Esta es la más difícil de definir. Significa evitar de forma sistemática una posición inaceptable para el otro. En el fondo, no negociar de buena fe es ir a la negociación con un objetivo muy distinto de conseguir el acuerdo.

Hacer honor a los acuerdos parciales. Se refiere a que una vez puestos de acuerdo en uno de los puntos no se debe volver a cuestionarlo por la discusión del punto siguiente. Esto no siempre se respeta. Esta regla cumple una función instrumental al evitar que la negociación se convierta en una tarea sin fin que se construye y destruye.

Dar muestras de flexibilidad. Es claro que esta manera es indispensable para el éxito de cualquier negociación y está relacionada con la de buena fe. Cualquiera de las formas de mostrar flexibilidad es un buen pronóstico para el avance en la negociación ya que el cerramiento en la postura propia puede considerarse como una situación precedente a la lucha.

La reciprocidad de las concesiones. Es también consecuencia de la buena fe y de la flexibilidad y significa conceder concesiones en pago de otras realidades.

Evitar la hostilidad y la agresividad personales. El enfrentamiento entre las partes es inevitable pero sin embargo si puede evitarse el comportamiento agresivo contra el otro. Los procedimientos utilizados por las partes en el proceso de la negociación se asemeja a las estrategias de poder descritas por French y Raven (1959), ya que ambos litigantes tratan de influir sobre el otro con el fin de obtener las mayores ventajas posibles, pero, a diferencia del conflicto, en la negociación, las partes deben tener un cierto nivel de igualdad.

La Mediación y los conflictos familiares.

El uso de la mediación como estrategia para resolver conflictos interpersonales en las relaciones de pareja es reciente (Coogler, 1978; Folberg, 1984b; Haynes, 1981; Irving, 1980) pero su uso tiene una larga tradición como técnica para resolver conflictos laborales tanto en el campo del Derecho como en el de la Psicología. En el primero a través del Instituto de Mediación, arbitraje y Conciliación (IMEC) donde se intenta llegar a un acuerdo entre las partes litigantes para evitar un juicio que alargaría la resolución y ocasionaría pérdidas económicas considerables. En el campo de la Psicología también ha sido usada para resolver conflictos en el mundo laboral (Brett y Goldberg, 1983; Douglas, 1962; Kerr, 1954; Kochan and Jick, 1978; Kolb, 1983; Kressel, 1972; Landsberger, 1955 a y b; Maggiolo, 1985; Peters, 1952, 1955; Rehmus, 1965; Stevens, 1963; Walton, 1969) y para resolver conflictos internacionales (Burton, 1969; Campbell, 1976; Doob, 1970; Edmead 1971; Fisher y Ury, 1978; Frei, 1976; Gulliver, 1977, 1979; Hill, 1982; Rubin, 1981; Touval y Zartman, 1985). En los últimos diez años, las investigaciones sobre Mediación han ido incrementándose, como ejemplo de la rápida expansión de la mediación en la práctica. En estos momentos, la mediación se utiliza para resolver conflictos diversos como en comunidades de vecinos (Duffy et al., 1991; McGillis, 1981), en el procedimiento criminal (Folberg y Taylor, 1984; Wall y Rude, 1985, 1987, 1991), en Intervención policial (Palenski, 1984), disputas familiares y divorcio (Donohue, 1991; Emery y Wyer, 1987; Rubin, 1985), conflictos públicos (Susskind y Cruikshank, 1987; Susskind y Ozawa, 1985) y toma de decisiones en organiza-

ciones (Karambayya y Brett, 1989; Kolb, 1986; Sheppard, 1984; Thomas, 1982).

El conflicto interpersonal que ocurre en la ruptura de pareja, presenta, como todo tipo de conflicto, un coste económico, elevándose conforme se alarga el procedimiento legal; y un coste psicológico porque todo conflicto exige que los sujetos pongan en acción sus energías para alcanzar la meta fijada (Touzard, 1981). El objetivo de las partes en litigio es ganar el procedimiento, lo cual significa vencer al contrario sin reparar, a veces, en los medios utilizados y dejando en segundo término las necesidades de los hijos, amparándose en "la justicia legal" (Saposnek, 1983). Ganar el procedimiento no significa resolver el conflicto, ya que las luchas entre ambas partes continúan y el coste psicológico sigue produciendo daño a ambas partes y a los hijos (Golberg et al., 1985; Krantzler, 1973; Pruitt y Rubin, 1986). Otras formas de resolver los conflictos menos dañina que el vencimiento del adversario son la negociación y la mediación (Duquette, 1978; Touzard, 1981).

En la negociación ambas partes deben tratar, mediante sucesivas conversaciones, llegar a un acuerdo aceptable para ambos (Hynes, 1978; 1983). La pareja que gestiona su negociación se encuentra sometida a una serie de fenómenos de coerción, girando la negociación sobre sí misma y sin muchas posibilidades de salir, por ella misma, del conflicto.

La negociación es utilizada por algunos abogados que intentan conseguir que su cliente acuda a la vía amistosa, y la manera más usual es ponerse en contacto con el abogado

contrario, para que ambos abogados representen a las partes y negocien los puntos en litigio. Aquí las partes no son las autoras de la negociación, aunque son informadas por sus representantes respectivos sobre la aceptación o no de las propuestas planteadas por la otra parte y de las que su representante legal va a proponer (Grossman, 1985).

Una manera de resolver el enfrentamiento es utilizar el procedimiento de negociación, estando presente una persona neutral que haga posible cierto acercamiento entre los puntos discordantes. El procedimiento de mediación ayuda a toda la familia a realizar la ruptura de la manera menos traumática y hace posible que los interesados intervengan en su propio procedimiento (Martín y Bernal, 1989). Esta forma de trabajar incita a las partes a que decidan cómo quieren regular su vida futura, teniendo en cuenta al otro y los intereses del niño. De esta manera se evita que estos temas, tan importantes para ellos, sean tratados por los abogados primero, y luego que los jueces decidan sobre dichos temas. La mediación es un buen método para resolver las disputas planteadas en la separación y el divorcio. El propósito de la mediación no es cambiar la decisión de separarse o divorciarse, pero da la oportunidad a la pareja de hacerlo de forma menos conflictiva (Salts y Zonakes, 1983; Hauser, 1985).

La mediación en materia familiar aparece primero en EEUU (Coogler, 1978; Folberg, 1984b; Haynes, 1981; Saposnek, 1985) y después en Canadá (Irving, 1980) como una alternativa al proceso litigioso, tratando de resolver los conflictos que la ruptura familiar conlleva, aunando criterios y procurando llegar a discusiones satisfactorias para todos sus miembros, o menos dañinas, lo que significa

consolidar un entendimiento familiar después del divorcio. Más tardíamente la mediación surge en Inglaterra como un servicio claramente distinto al terapéutico y al consultor, centrado en el proceso de negociación entre las partes enfrentadas, con estructura y reglas propias que tienen una base histórica en los métodos pacíficos de resolver problemas de algunas viejas culturas (Roberts, 1979; Rwezaura, 1984).

La mediación como alternativa al modelo de controversia, es definida por Folberg (1983a) como un proceso no terapéutico, por medio de cual las partes con la asistencia de una persona o personas neutrales, intentan aislar de forma sistemática los puntos de acuerdo y desacuerdo, exploran alternativas y consideran compromisos, con el fin de alcanzar un acuerdo consensuado sobre los distintos aspectos de su divorcio o separación. Jessica Pearson y Nancy Thoennes plantean estas mismas acciones que Folberg pero ponen el énfasis en la carencia de aspectos formales de las sesiones, en una comunicación abierta y en la evitación de los reproches y culpabilidades de las partes (Pearson y Thoennes, 1982). El objetivo principal del proceso de Mediación es conseguir un acuerdo en cada uno de los puntos del convenio regulador y que trata temas como son: reparto de bienes, pensiones, uso del domicilio, custodia de los hijos, régimen de visitas para el padre no custodio, etc., de tal manera que las partes pueden utilizar un mismo representante legal, agilizando el procedimiento y con un mínimo de antagonismo (Wishik, 1984).

Si se consiguen acuerdos mediados, la pareja puede tramitar su procedimiento legal por vía consensual. Este

procedimiento tiene la ventaja de que pueden utilizar unos mismos representantes legales, abogado y procurador, lo cual abarata el coste considerablemente, elimina la figura del adversario, y a la petición de separación o divorcio se acompaña el convenio regulador que ambos han elaborado conjuntamente. Esto significa que la duración del procedimiento es mucho menor, al llevarlo todo acordado ya que el juez ratifica dicho convenio (Goldberg et al., 1985).

La mediación es una técnica mediante la cual se intenta que las parejas negocien un acuerdo de los temas conflictivos surgidos ante la ruptura de sus relaciones maritales y se muestren interesadas en participar en la regulación de su propia vida, repercutiendo de forma beneficiosa sobre ellos y sus hijos, evitando agresividad y represalias tan comunes en estas situaciones conflictivas (Elkin, 1984; Kessler y Bostwick, 1977; Wallerstein y Kelly, 1980) y enseñando a aceptar el divorcio y a negociar sus puntos discrepantes, aumentando la autosuficiencia de la pareja (Folberg, 1983 b; Goldberg et al., 1985; Kaslow, 1986; Neville, 1984; Pruitt y Rubin, 1986).

La mediación es una especialidad nueva que requiere los conocimientos de una persona experta en relaciones interpersonales, manejo del conflicto, habilidades de negociación y conocimientos de la ley de Familia (Haynes, 1982). El trabajo interprofesional de un psicólogo y un abogado conjuga bien estos conocimientos (Bernal, 1990; Parkinson, 1988).

Variables que justifican el uso de la Mediación.

a) **Situación emocional de los que rompen.** La ruptura de pareja se caracteriza por una situación de tensión y ansiedad que se produce al romperse las conexiones entrelazadas de ambos miembros de la pareja y que habían acomodado a lo largo de su vida de relación (Berscheid, 1982). El resultado es un alto tono emocional y el sujeto experimenta un desequilibrio que afecta a diversos aspectos de su vida: sentimientos, pensamientos, conductas, relaciones familiares, sociales (Halpern, 1973). Las personas interpretan la ruptura, en general, como una situación traumática que conduce a un estado de estrés, aislamiento, desesperanza; algo que interrumpe el logro de sus metas y ante la que no pueden reaccionar (Bernal, 1986). Esta forma de percibir la ruptura disminuye las posibilidades del sujeto de enfrentarse al problema (Lazarus, 1980). Hay evidencia de que la ruptura es uno de los mayores estresores en la vida de la gente (Bloom et al., 1978).

La ruptura no se suele producir en un momento determinado, sino que es un proceso que conlleva varias etapas (Kaslow, 1984) presidida cada una de ellas por emociones concretas que se precisa conocer para interpretarlas adecuadamente. El proceso de ruptura tiene un ciclo de vida familiar distinto al de las familias intactas (Beal, 1980; Whiteside, 1982) y lo que hace es ampliar y complicar el sistema familiar, pero teniendo en cuenta que esta complejización no tiene por qué implicar una situación disfuncional o patológica (Goldsmith, 1982).

Aunque la ruptura de la pareja es por sí misma un acontecimiento negativo (Holmes y Rahe, 1967), la manera de

reaccionar ante ella no es la misma para todos aquellos que la experimentan. La distinta respuesta emocional está en función, además de la interpretación cognitiva, de una serie de variables tales como:

- Tomar la decisión o someterse a la decisión del otro. No es lo mismo dejar que ser dejado. La persona que es "abandonada" se siente rechazada, despreciada, devaluada y duda de todos sus atributos; si es mujer, desde sus cualidades físicas hasta las de buena madre y esposa. Si es hombre, sus sentimientos varoniles quedan mermados. Aceptar que la relación de pareja ha terminado es difícil pero aún lo es más aceptar la propia responsabilidad y participación en el fracaso del matrimonio (Beal, 1980), por lo que la persona que no toma la decisión de separarse, ve en el otro al culpable del desastre familiar y de todos los males que puedan ocurrirles a los hijos, a modo de profecía autocumplida (Watzlawick, 1984). La persona dejada manifiesta un resentimiento generalizado que le hace comportarse de forma totalmente desadaptativa y castigadora, expresando al otro exigencias de todo tipo: económicas, referente a los hijos, reparto de bienes, etc. La persona que deja, se siente culpable por su decisión y en un principio accede a las exigencias del otro, intentando así amortiguar los sentimientos de culpa.
- El sexo es otra variable a tener en cuenta, ya que el distinto aprendizaje emocional impartido a uno y otro sexo proporciona una mayor indefensión a la mujer ante la posibilidad de perder el principal apoyo, hijos y marido, encontrándose deprimida y sin objetivo vital.

Los estudios de Caldwell, Bloom y Hodges (1984) indican que aunque las mujeres experimentan mayor estrés antes de la separación, los hombres lo hacen después de ésta.

- La variable edad es también un aspecto a tener en cuenta, ya que las personas de mayor edad contemplan la ruptura con más desesperanza que las que tienen menos edad (Uhlenberg, Cooney y Boyd, 1990). Si combinamos ambas variables, sexo y edad, se pueden apreciar diferencias ya que no es lo mismo los 45 años de un hombre o de una mujer. La mujer, condicionada socialmente a mantener su físico contra el paso del tiempo, cree que si su ruptura se produce a cierta edad ya no es tiempo de rehacer su vida y más si la ruptura se ha producido porque el marido se ha marchado con otra mujer más joven (Silverstein, 1988; Cain, 1988). El hombre, sin embargo, con esa misma edad se encuentra en plena forma para iniciar otra relación emocional.
- Otra variable que incide en la intensidad de la respuesta ante la separación es el contar con una alternativa emocional real o imaginaria. El contar con dicha alternativa supone que la persona tiene, o piensa que puede tener cubierto el vacío emocional producido al romperse los lazos que le unían a su pareja (Lewis y Spanier, 1979).
- La cantidad y calidad de la relación anterior también influye en la intensidad emocional experimentada en momento de la separación. Cuanto más haya sido su duración y más íntima su relación mayor será el coste

emocional experimentado. Las parejas que han convivido durante largo tiempo y han constituido interrelaciones fuertes de tal manera que parte de las acciones de uno están completadas por las del otro, experimentan un gran vacío al producirse la ruptura de estas interrelaciones (Berscheid, 1982).

- La variable económica es, igualmente, necesaria tenerla en cuenta a la hora de comprender la respuesta emocional de los miembros de la pareja ante la separación. Esta variable alivia o agudiza dicha respuesta. La pareja que rompe su convivencia ve duplicados sus gastos y lo que antes servía para mantener una casa y una familia, ahora debe servir para mantener a dos. La situación económica afecta a ambas partes y a los hijos. El viejo refrán de las penas con dinero son menos penas es una realidad en estos temas, o por lo menos se agudizan los problemas ante la insuficiencia económica.
- Por último, una variable que también se debe tener en cuenta es la influencia de la familia y de los amigos de ambos apoyando o contradiciendo la decisión de la separación. Generalmente tomar la decisión de separarse ya es de por sí complicada, si se le añade la no aceptación de los que rodean a la pareja, instándoles en todo momento a reconsiderar la situación por el bien de todos, la reacción emocional será mucho mayor que si apoyan su decisión de romper la relación (Giusti, 1987).

Los comentarios presentados anteriormente nos indican que la respuesta emocional que los individuos muestran

ante la separación o el divorcio está en función de lo que los sujetos piensen de la situación y de las variables antes mencionadas.

b) El impacto de la ruptura en los niños. El informe de Weitzman (1985) de que un 60% de los niños nacidos experimentarían una ruptura del matrimonio de sus padres y el aumento creciente de parejas con hijos que rompen en España (Martín y Bernal, 1989) nos hace pensar que podemos, en poco tiempo, situarnos en este panorama estadounidense.

Los estudios realizados con distintos grupos de edad indican una serie de reacciones emocionales comunes en niños de igual edad. Wallerstein y Kelly observaron que la respuesta más común entre los niños de preescolar tenía que ver con conductas no adaptativas cuando ya las habían realizado adecuadamente, como el control de esfínteres, hábitos alimenticios, etc. Los niños de edad escolar suelen reaccionar con miedos y un gran sentimiento de tristeza e inseguridad en contraste con los preadolescentes que lo hacen con una fuerte irritación y sentimientos de inconformidad. Los adolescentes, entienden mejor esta situación y aunque sufren con la ruptura de sus padres, esta puede no perturbarles seriamente.

En general la mayoría de los niños interpretan la ruptura de sus padres como un acontecimiento altamente estresante. La edad marca diferencias en habilidades cognitivas para elaborar un juicio de lo que es conveniente para sus vidas, influyendo en la manera de responder emocionalmente ante este acontecimiento (Hodges and Bloom, 1986). Aunque el momento evolutivo del niño modela el tipo de respuesta a la ruptura, la conducta interpersonal de

los padres y el mantenimiento de un contacto adecuado del niño con ambos padres después del divorcio, determina la intensidad y duración de tal respuesta (Giusti, 1987; Mitchell, 1985; Bahr et al., 1987).

El tema relacionado con los hijos es, después del económico el más conflictivo (Martín y Bernal, 1989). Ambos han estado relacionados desde siempre como dos fuentes de poder representados por ambos sexos. El padre es el dueño del dinero y la madre de los hijos (Díaz Usandivaras, 1986). Si la una impide o dificulta la relación del padre con los hijos, el otro responde no pagando lo pactado, o viceversa. Los cambios experimentados por la incorporación de la mujer al mundo del trabajo y la aplicación del principio de no discriminación por razón de sexo han hecho tambalear tal distribución del poder y esto hace que la lucha por los hijos sea ahora más encarnizada.

La decisión de la guarda y custodia es problemática, (Johnston et al., 1985, 1987; Emery y Wyer, 1987; Hauser, 1985; Milne, 1979) ya que muchas veces el tener a los hijos representa, principalmente, el que el otro no los tenga, o la búsqueda de triunfo social sobre el otro, dejando claro quién es "el mejor" padre. Una vez obtenida la victoria, el problema que surge es el ejercicio del derecho del padre no custodio de ver a su hijo y tenerlo en su compañía. Mientras este padre exige el máximo de días para poder disfrutar de él, el otro regatea los días y emplea el argumento de no fiarse del trato que reciba el niño. Cuando pasa un tiempo, el padre que anhelaba tener a su hijo todos los fines de semana, empieza a no poder hacerlo por múltiples problemas laborales, y el padre

custodio se queja del gran peso que ha recaído sobre él y la poca responsabilidad que tiene el otro padre.

Los niños tienen el derecho y la necesidad de contar con ambos padres aunque ellos hayan roto como pareja legal (Bienenfeld, 1983 y 1985 Chase, 1983; Saposnek, 1983; Wallerstein y Kelly, 1980; Ware, 1982), por eso es necesario que los adultos sepan ejercer los roles de padre custodio y no custodio, complementándose y esforzándose en que el niño mantenga la relación con los dos, beneficiándose de tal cooperación.

c) El procedimiento legal. Las disputas familiares, en general, se resuelven legalmente siguiendo un procedimiento contencioso o de adversario (Grossman, 1985), que si bien puede ser bueno para resolver conflictos referidos a las disputas sobre la propiedad o cuestiones criminales, de ninguna forma es útil para aquellos que tienen que ver con las relaciones familiares, donde los componentes afectivos y emocionales son centrales (Duquette, 1978). Este tipo de procedimiento agudiza el enfrentamiento entre las partes, ya que conlleva la necesidad de contar con un abogado y procurador, representantes legales de cada parte quienes inician una serie de intercambios, de demandas y contrademandas con el fin de sacar el máximo de ganancia para sus clientes sin tener en cuenta la repercusión de sus acciones en los demás miembros de la familia (Auerbach, 1983; Etizen, 1985; Irving, 1980; Kressel et al., 1980, 1985; Ryan, 1985; Pearson y Thoennes, 1982, 1984, 1985, 1986).

El procedimiento contencioso incita a una lucha entre ambas partes (Dingwall y Eekelaar, 1988; Girdner, 1985; Trombetta, 1982), que si bien ya estaba iniciada antes de

emprender la vía legal, ahora se convierte en un duelo a muerte. La historia íntima de la pareja sale a la luz, se revelan secretos mantenidos ocultos durante mucho tiempo, adornados por la pluma del abogado que los utiliza para agredir a la otra parte. Esto provoca una réplica en los mismos tonos por parte de la representación legal del otro miembro de la pareja, agudizando las desavenencias existentes, elevando la intensidad emocional y contribuyendo a que uno o los dos miembros de la pareja exhiban comportamientos negativos no usuales que dañan al otro y a los hijos.

En realidad, las personas que inician este tipo de procedimiento no tienen una idea clara de en qué consiste, cuáles son sus pasos y qué consecuencias pueden tener sobre ellos y los niños. Nadie les explica el largo tiempo de tramitación; los ataques y las agresiones que se van a intercambiar; el daño que esto le produce a los hijos, y que se añade al de la propia ruptura; las preguntas que deben contestar en el juzgado ante la otra parte; lo que tienen que escuchar del otro; la exploración del niño y de ellos mismos, etc...; como tampoco se les explica, que después de la larga batalla, al seguir en desacuerdo, será el juez el que decida con quién va a vivir el niño, cómo, cuándo y dónde lo visitará el otro padre, quién se quedará en el domicilio conyugal y en resumen, cómo tienen que funcionar en el futuro (Bernal, 1990).

Esta "solución" legal, no consigue disminuir los problemas existentes, más bien consigue aumentarlos, ya que, en general, ninguno queda de acuerdo con un resultado en el que no han tomado parte, se lo han impuesto y además, como dice Saposnek (1983), nuestros procedimientos de

justicia legal no concuerdan con la justicia psicológica en el tema de la custodia de hijos.

La intervención del psicólogo como Mediador.

Los cambios experimentados en el derecho de familia, con la introducción del divorcio en nuestro ordenamiento jurídico, así como las novedades en materia de filiación, muestran un nuevo concepto de familia. Estas modificaciones en la normativa legal es fruto de los cambios sociales que en el transcurso de poco tiempo han incidido en la mentalidad de la sociedad sobre la temática de la separación y el divorcio (Alberdi, 1987).

Mientras la familia era tenida como la célula primera de la sociedad, todo lo que atentara contra su unidad se consideraba como malo y destructivo, por lo que el divorcio se concebía como su mayor amenaza y por tanto se interpretaba como una patología (Levèsque, 1987). Siguiendo este orden de cosas la intervención profesional estaba dirigida a mantener la unidad familiar, volcando todo su esfuerzo en un intento de reconciliar a las parejas que tenían dificultades recurriendo, incluso, a la resignación, como pago de su equivocación al elegir la pareja.

El desarrollo industrial, la urbanización creciente con el cambio que supone en las actitudes y en el comportamiento, la incorporación de la mujer al mundo laboral, etc... han hecho perder terreno a la forma de familia patriarcal para dejar paso a un modelo familiar, donde los roles se hacen más flexibles e intercambiables, modificándose la filosofía de vida (González, 1979). El individuo busca la felicidad y ese derecho a la

felicidad permite tener unas ideas más abiertas ante conceptos como matrimonio, relación, separación, divorcio, aborto... (Ellis et al, 1981).

La sociedad marca lo que el individuo debe pensar sobre lo que le rodea y esos pensamientos condicionan su sentir sobre ellos (Bernal, 1986). El divorcio ya empieza a percibirse como parte de la realidad social, entendiéndolo como el resultado y no la causa de los conflictos familiares por lo que los profesionales deben plantearse nuevas formas de intervención que respeten la decisión de los sujetos y les ayuden a llevarlo a cabo de la mejor manera posible (Levésque, 1987).

Al entender la separación o el divorcio, no como lo peor que le puede ocurrir a uno, sino como una forma de solucionar sus problemas de relación, se le enseña a la pareja a entender la ruptura de otra forma menos dramática. Aquí la mediación adquiere sentido como un nuevo campo de práctica, que tiene como objetivo humanizar el proceso de separación o divorcio, disminuyendo las repercusiones negativas de los que atraviesan esa experiencia (Davidson et al. 1982; Elkin, 1984; Levèsque, 1987).

El psicólogo interviene como mediador cuando las partes en conflicto no encuentran la forma de llegar a un acuerdo. Acuden a él como persona imparcial y que pueda posibilitarles la comunicación (Maggiolo, 1971). El mediador tiene dos funciones diferentes (Roberts, 1988): Una facilitar la comunicación y el aprendizaje entre las partes, posibilitando una interacción y una paralización de las posibles agresiones (Coogler, 1978), así como una conducción hacia la cooperación (Kressel, 1985; Stulberg,

1981). Otra función del mediador es la de instruir a las partes en las normas y métodos de la negociación mediante una información detallada de los puntos conflictivos (Davis and Roberts, 1988).

La propia presencia del mediador da lugar a una interacción de las partes que no podría haber ocurrido si ellos no hubieran acudido a una tercera persona (Haynes, 1980). Esta presencia pone freno a las agresiones habituales (Coogler, 1978; Kressel, 1985; Roberts, 1983) ya que la pareja guarda las formas delante de un tercero, utilizando al mediador como vehículo de comunicación para hacerse entender por el otro y consiguiendo mantener unos niveles aceptables de comunicación (Sturberg, 1981). Al mismo tiempo, el mediador tranquiliza a las partes dejándoles claro que es comprensible el odio que sienten por el otro pero que este no sirve para resolver el conflicto que presenta y que intentar un acuerdo es un signo de querer ayudar a los hijos en base al afecto que sin ninguna duda ambos les profesan (Folberg, 1984a).

Las sesiones de negociación tienen como fin conseguir acuerdos en los puntos del Convenio Regulador que comprende temas como el reparto de bienes, el uso del domicilio, la guarda y custodia de los hijos, el régimen de visitas, etc. de tal forma que, previa información de cada uno de ellos y cómo se contemplan en la Ley, se van tratando uno por uno, ordenándolos de menor a mayor complejidad, en base a una serie de fases similar a una estrategia de solución de problemas. Cada problema se define como el fracaso para encontrar una respuesta eficaz por lo que ninguna situación es intrínsecamente problemática. Es la inadecuación de la respuesta lo que la hace problemática (D'Zurilla y Gold-

fried, 1971). Siguiendo a estos autores, los pasos que se siguen para resolver el problema son:

- Definirlo claramente, que en el caso en cuestión se trataría de que ambas partes expusieran el problema de forma que no comunicaran culpa o juicio. Se trata de definirlo en términos de necesidades conflictivas y no de soluciones competitivas (Gordon, 1988).

- Generar soluciones alternativas. Esta es la parte creativa en la resolución de problemas, evitando mostrarse crítico o valorativo con las propuestas del otro. En esta fase se trata de exponer cuantas alternativas puedan ocurrirsele a ambas partes sin entrar en la valoración o viabilidad de ellas, combinando las alternativas enunciadas para formar nuevas ideas. En esta fase, el mediador debe estimular a las partes a que propongan alternativas, pero sin mostrarse impositivo, ya que puede percibirse como una ostentación de poder (Idaszak y Carnevale, 1989).

- Ver las consecuencias significa en primer lugar deshechar aquellas ideas que no son muy aceptadas y quedarse con aquellas que pueden presentar ciertas ventajas. Una vez reducido el número de estrategias hay que ver las consecuencias positivas y negativas que crean ambas partes, anticipándose a la forma en que afectaría a cada miembro de la pareja y a los hijos a corto, medio y largo plazo. Finalmente conviene analizar cual es la probabilidad de que suceda cada una de las consecuencias previstas y elegir aquella estrategia que obtenga más consecuencias positivas.

- Evaluar los resultados. Consiste en poner en práctica la estrategia elegida y observar las consecuencias para ver si

se corresponde con lo previsto. Hay que tener presente que algunas estrategias elegidas no resultan ser las mejores y deberán ser reelaboradas.

El mediador interviene en cada una de estas fases ayudando a las partes a:

- 1.- Definir el problema de forma operativa, pero teniendo en cuenta las necesidades del núcleo familiar. Esto quiere decir que el mediador debe facilitar el que los padres asuman el papel de protectores de los intereses del hijo, papel que les corresponde a ellos y no al mediador (Folberg, 1984 d).
- 2.- Reforzar las sugerencias expuestas por las partes generando nuevas y variadas combinaciones tomando ideas de ambos miembros de la pareja, evitando interpretaciones sobre las alternativas planteadas y mostrando una postura imparcial aunque algunas sugerencias no coincidan con su punto de vista (McGrory, 1985, 1988).
- 3.- Desechar aquellas alternativas que una o ambas partes consideren extremas o perjudiciales y de las opciones restantes analizar las ventajas e inconvenientes que pueden tener a corto y medio plazo para cada uno de los integrantes del núcleo familiar (Hetherington et al. 1977).
- 4.- Evaluar los resultados de la puesta en acción de la estrategia elegida, anticipando que cualquier posible cambio de lo acordado, debe realizarse de forma conjunta y no unilateralmente (Gordon, 1988).

Con anterioridad a estas fases, el mediador tiene con las partes una sesión introductoria donde se le inicia en el proceso de Mediación de forma asequible a la pareja distinguiéndola de la terapia y de la consulta, ya que aunque existe algún solapamiento entre estos tres procesos también hay importantes diferencias (Parkinson, 1986, 1987). La Mediación incluye a ambas partes en conflicto y a los hijos y otros familiares cercanos (si la pareja lo permite). El objetivo principal de la Mediación es ayudar a las parejas a tomar decisiones consensuadas en el arreglo futuro de sus vidas y que, generalmente, tienen consecuencias emocionales y legales para toda la familia. La mediación no va buscando explorar los sentimientos ni la historia pasada como la terapia y la consulta, se basa en el presente. La mediación se caracteriza por su brevedad a diferencia de la terapia que suele implicar un tiempo mayor (Parkinson, 1986, 1987). Otra información que debe quedar clara ante la pareja, es la imparcialidad del mediador y el acceso voluntario de ambas partes a la Mediación (Haynes, 1985).

Una vez concluido este primer acercamiento, las fases descritas anteriormente comienzan, aunque suele programarse reuniones por separado para dar la oportunidad a cada miembro de la pareja a exponer su punto de vista al mediador y a la vez este poder comprender mejor cómo ven ambos los puntos en desacuerdo y modificar posibles ideas inadecuadas que mantienen posiciones extremas y que dificultan la negociación (Kressel, 1985; Stulberg, 1981).

Experiencias de Mediación Familiar.

La Mediación en Canada y Québec. Los primeros servicios públicos de Mediación aparecen en 1981 en Québec (Richardson, 1988). Más tarde se llega a un concierto entre el Centro de Servicios Sociales de Montreal y la Corte Superior de Québec, estableciendo procedimientos específicos para la Mediación. Ante el éxito de este proyecto, varios organismos como la Corte Superior, el Ministerio de Justicia, el de Asuntos Sociales y otros más se han unido para implantar un Servicio de Mediación Familiar permanente (SMF). Este servicio es gratuito y tienen prioridad las parejas con hijos. El principal objetivo es ayudar a las parejas a evitar una ruptura conflictiva y minimizar los efectos negativos de la misma, así como conseguir acuerdos en los temas de hijos y reparto de bienes. Es un servicio voluntario y la comunicación es confidencial ya que ésta no puede utilizarse en los juzgados, durante el procedimiento legal. Este servicio es un modelo de Mediación Global (Lévesque, 1987) ya que incluye la negociación de todos los aspectos del Convenio y no sólo los relacionados con los hijos. El equipo consta de seis mediadores, un coordinador, un abogado, un recepcionista y dos secretarias, atendiendo a más de 500 parejas al año.

Además de este servicio de SMF de Montreal, existe un Servicio de Mediación en Québec, implantado después del 84, dependiendo de los Servicios Sociales Centrales. Se diferencia del de Montreal en que éste sólo se ocupa de los temas de guarda y custodia de los hijos, dejando los asuntos económicos a los abogados.

A partir de estos servicios públicos de Québec y Montreal, comienzan a funcionar Servicios de Mediación Familiar privados y poco a poco se extiende al ámbito universitario con cursos de formación de postgrado en diversas universidades, como la de McGill, Montreal y Laval.

Otra experiencia en el campo de la Mediación es la efectuada en cuatro ciudades canadienses (St. John, Saskatoon, Winnipeg y Montreal) cuyos resultados avalan la efectividad de la Mediación durante el periodo de funcionamiento (Junio de 1985 a Junio de 1987). Estos resultados son lo siguientes:

- Los acuerdos alcanzados utilizando la Mediación son más satisfactorios, mostrando una mejor comunicación los interesados.
- El 85% de las parejas que pasan por el Servicio de Mediación consideran que ha sido muy satisfactorio y que en ningún momento se han visto presionados. El resto, 15%, muestra una cierta satisfacción con el servicio y algo presionados para conseguir acuerdos.
- El 64% de las parejas no habían pensado en ir de acuerdo, sin embargo el 75% alcanza el acuerdo total y no existe evaluación de los acuerdos parciales conseguidos en el 25% restante.
- En el 97% las pensiones alimenticias son pagadas usando los servicios de Mediación y sólo en un 66% cuando no se usa la Mediación.

- En el 85.6% de los casos la guarda y custodia la obtiene la madre, en el sistema tradicional. En la actualidad la custodia conjunta se obtiene en el 5% de los casos sin Mediación y en el 47% de los casos con Mediación.

La Mediación en Inglaterra. Mientras el ámbito de interés, en la Mediación americana, está puesto en la resolución de la propiedad y en los conflictos económicos (Coogler, 1978; Haynes, 1981) el ámbito de interés británico lo está, aunque no exclusivamente, en los conflictos de guarda y custodia y régimen de visitas, ya que una gran parte de los mediadores tienen experiencia profesional como psicoterapeutas familiares (Saposnek, 1983).

En Inglaterra, en la actualidad, funcionan más de 50 servicios que ofrecen una Mediación Familiar independiente, financiados principalmente por organizaciones no gubernamentales y operando fuera de los Juzgados. Una gran mayoría están sostenidos por asociaciones de caridad y tienen muchas dificultades para mantenerse financieramente. Esta variedad de Programas de Mediación, con diversas ideologías y multiplicidad en las prácticas caracteriza la ambigüedad y confusión de la Mediación británica (Walker, 1987).

La Mediación en los Países Bajos. En Holanda, en 1982 se implanta el Instituto para el divorcio porque la ayuda a las parejas que quieren divorciarse está muy dispersa y corre a cargo de instituciones de carácter social e Institutos de Salud Mental pobremente equipados. El objetivo de este Instituto es ofrecer a los separados y a sus hijos una forma de ayuda coordinada y completa con

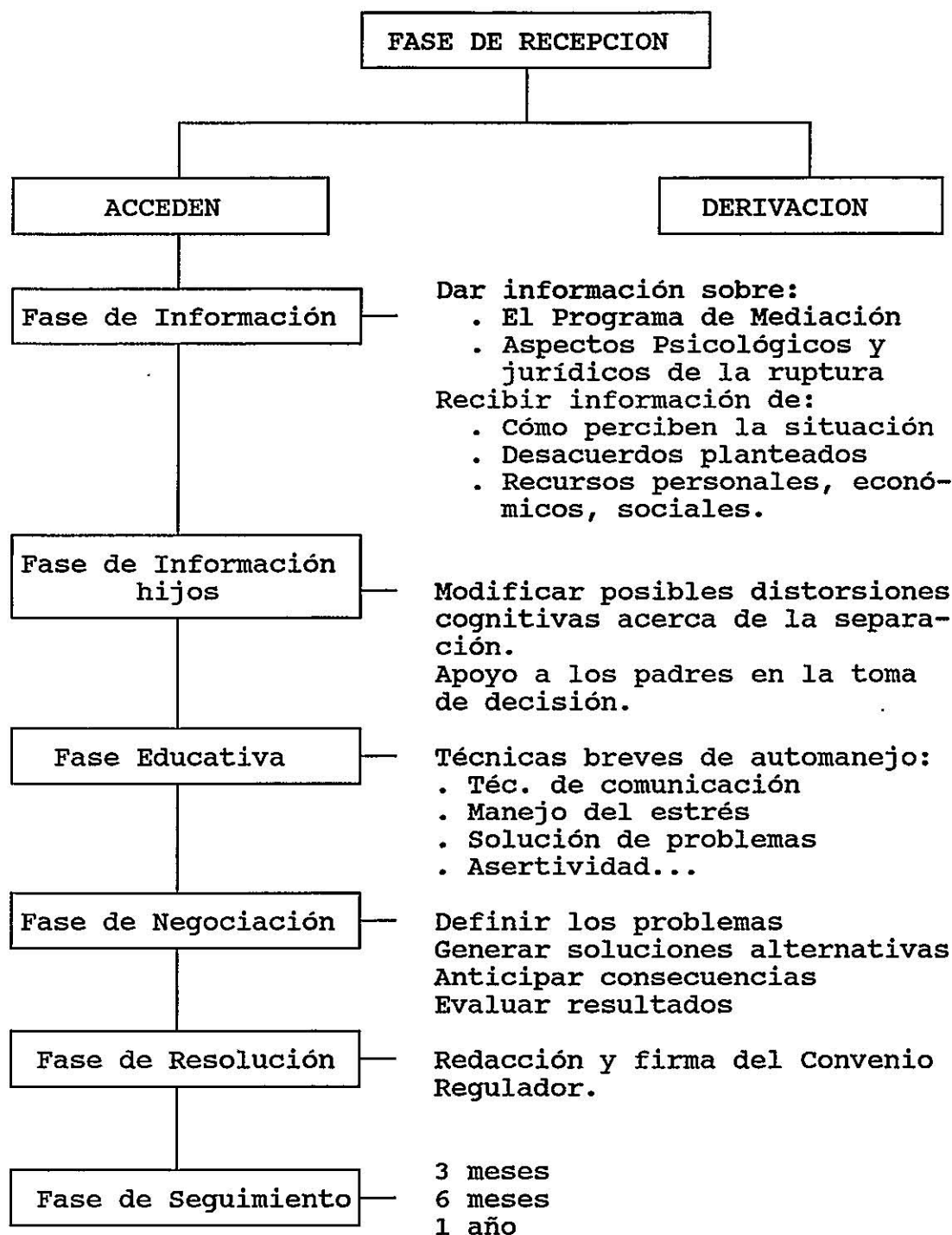
equipo de abogados y psicólogos. Ha funcionado durante cuatro años y medio, atendiendo a unos 3.200 divorciados con una media de 2.5 consultas por cliente. Este Instituto financiado por el Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio de Justicia ha sido cerrado por cuestiones políticas (Mac Gillavry, 1988).

En Bélgica diversos Servicios de Mediación funcionan desde 1986. Entre ellos figuran "La Asociación de Padres para siempre" y "La Asociación para la Mediación Familiar" donde se alterna la atención a las parejas que quieren separarse y la formación de mediadores. Además de estos servicios de mediación, han creado uno de terapia para el divorcio, que pretende cubrir los problemas emocionales que no son tratados en un programa de mediación.

La experiencia de la Mediación en España. Los antecedentes de la Mediación en España se sitúan en el trabajo llevado a cabo por la psicóloga Trinidad Bernal Samper y la abogada Gloria Martín Francisco con la puesta en marcha del primer despacho psicológico-jurídico interviniendo en temas que hasta el momento habían sido de índole exclusivamente legal. Se habla de antecedentes de la Mediación porque si bien en algunos casos se pudo llevar a los dos miembros de la pareja, en muchas ocasiones un miembro ya contaba con representación legal y sólo podíamos acceder a uno sólo de la pareja por lo que la base misma de la mediación fallaba al no poder negociar con las dos partes. Sin embargo, en los casos en donde se realizó el trabajo con la pareja se observan elementos básicos de la mediación, como es el compromiso de intentar el acuerdo en los puntos conflictivos y de tener en cuenta los intereses de todo el núcleo familiar y no exclusivamente el de una parte. Así mismo, en

este trabajo conjunto, se puso especial atención en preparar a los usuarios para que fueran sujetos activos de su propio procedimiento. (Martín y Bernal, 1989). Otro elemento importante del trabajo conjunto mencionado, y que supone un buen soporte para el éxito en la Mediación, es la sensibilización del abogado hacia temas psicológicos y la preparación en derecho de Familia del psicólogo. (Bernal, 1990; Parkinson, 1987). Esta conjunción de ambos profesionales posibilitó el diseño de trabajo expuesto con anterioridad y que representa un claro precedente del que ha servido como modelo para el primer servicio de Mediación que se ha puesto en marcha en España (Bernal y Andrés, 1991).

En septiembre de 1990, el Ministerio de Asuntos Sociales, desde la Dirección General de Protección Jurídica del Menor aprueba un proyecto presentado por la Fundación Familia, Ocio y Naturaleza (FONAT) y diseñado por Trinidad Bernal Samper para la puesta en marcha de un Programa de Mediación para los temas de Separación y Divorcio. Tras un tiempo de trabajo preparatorio, el programa se implanta en Madrid en el Centro de Psicología Apside, en Febrero de 1991. El equipo está formado por tres mediadores (psicólogos y abogados), dos secretarías y una directora del Programa (psicóloga) (Bernal y Andrés, 1991). El Programa está constituido por una serie de fases (tabla I) que conducen a la pareja a una negociación de los puntos comprendidos en el convenio regulador, con el fin de conseguir acuerdos consensuados. El desarrollo de este Modelo está descrito en la metodología del estudio y de esta tesis.



En este programa, la Mediación se entiende como una técnica de negociación estando presente la figura del mediador, que se encarga de canalizar la información de ambas partes; ofrece información psicológica y legal a los dos miembros de la pareja por igual, y orienta las sesiones de negociación hacia acuerdos consensuados. Así mismo entendemos la mediación, como un proceso preventivo que conduce a mantener los acuerdos después de realizada la separación o el divorcio. Este programa se caracteriza por entender la mediación de manera global, negociando todos los puntos del Convenio regulador, y no únicamente el relacionado con los hijos. Otra característica es que, la figura del abogado-consultor, que aparece en los programas de mediación de otros países, aquí toma la figura del mediador, que junto al psicólogo, informa y negocia de forma interdisciplinaria. (Bernal y Andrés, 1981).

El programa ha tenido un gran impacto en el público en general, en los medios de comunicación y en el ámbito profesional y académico. Así mismo, el éxito alcanzado en los objetivos propuestos es comparable al conseguido en otros países con más experiencia divorcista (Levèsque, 1987).

III. ESTUDIOS EMPIRICOS

ESTUDIO 1: Intervención Legal

Introducción

Método

Resultados

Resumen y Conclusiones

ESTUDIO 1: Intervención Legal

INTRODUCCION

El primer objetivo de este estudio, realizado con un grupo de abogados que ejercen en derecho matrimonial, es la descripción del estilo de trabajo de estos profesionales así como la constatación de una sospecha que se han ido desarrollando en nuestro trabajo con ellos: que su trabajo está basado en una serie de supuestos mantenidos por ellos en torno a los conflictos de pareja, de los que se sigue el uso del procedimiento legal para resolverlos, así como acerca del rol que el psicólogo juega en este contexto social.

El abogado está adiestrado para resolver las diferencias por vía judicial, y no sólo como forma de ganarse la vida, sino como óptica a través de la cuál contempla el mundo (McCormack, 1988). En el enfrentamiento entre dos partes, el abogado actúa a favor de una de ellas y está obligado a proteger los derechos e intereses de su cliente, dentro del marco de referencia que la ley proporciona. La conducta del abogado no puede explicarse sin hacer referencia a las características del procedimiento en el que actúa. Si se trata de un procedimiento contencioso, los abogados de ambas partes investigan y preparan el caso para que su cliente lleve la mejor parte y a la vez pueda defenderse de los ataques del otro. El objetivo principal en estos pleitos es hacer lo que la ley permita para vencer al contrario (Dillehay, 1989).

Un repaso a la casuística de separaciones y divorcios nos indica que, en general, los conflictos familiares se

ESTUDIO 1: Intervención Legal

INTRODUCCION

El primer objetivo de este estudio, realizado con un grupo de abogados que ejercen en derecho matrimonial, es la descripción del estilo de trabajo de estos profesionales así como la constatación de una sospecha que se han ido desarrollando en nuestro trabajo con ellos: que su trabajo está basado en una serie de supuestos mantenidos por ellos en torno a los conflictos de pareja, de los que se sigue el uso del procedimiento legal para resolverlos, así como acerca del rol que el psicólogo juega en este contexto social.

El abogado está adiestrado para resolver las diferencias por vía judicial, y no sólo como forma de ganarse la vida, sino como óptica a través de la cuál contempla el mundo (McCormack, 1988). En el enfrentamiento entre dos partes, el abogado actúa a favor de una de ellas y está obligado a proteger los derechos e intereses de su cliente, dentro del marco de referencia que la ley proporciona. La conducta del abogado no puede explicarse sin hacer referencia a las características del procedimiento en el que actúa. Si se trata de un procedimiento contencioso, los abogados de ambas partes investigan y preparan el caso para que su cliente lleve la mejor parte y a la vez pueda defenderse de los ataques del otro. El objetivo principal en estos pleitos es hacer lo que la ley permita para vencer al contrario (Dillehay, 1989).

Un repaso a la casuística de separaciones y divorcios nos indica que, en general, los conflictos familiares se

canalizan hacia un contexto legal contencioso (Grossman, 1985) que, si bien puede ser un buen método para dilucidar conflictos sobre la propiedad o cuestiones criminales, no lo es para resolver los conflictos familiares, donde los componentes afectivos y emocionales son centrales y movilizan las relaciones interpersonales (Duquette, 1978).

El procedimiento contencioso incita a la lucha entre ambas partes (Girdner, 1985; Trombetta, 1982) y no consigue solucionar los problemas que las parejas tienen planteados, repercutiendo de forma negativa en todos los miembros del núcleo familiar (Eitzen, 1985; Irving, 1980; Kressel et al., 1980, 1985; Ryan, 1985).

La formación del abogado está orientada a defender a ultranza a su cliente, incitándole a que luche por sus intereses sin tener en cuenta que el contrincante es la pareja y que los hijos ocupan una posición delicada entre ambas partes y que pueden resultar dañados en este enfrentamiento. Enfocar los conflictos de intereses desde una posición de no enfrentamiento, sino desde la posibilidad de una negociación, es otra forma en la que pueden actuar los abogados, conduciendo a los clientes hacia una opción mutuamente aceptable (Pruitt et al., 1983) y posibilitando así la vía amistosa (Dillehay, 1989).

El conocimiento que el psicólogo tiene sobre el proceso de negociación como medio para reducir o eliminar el conflicto interpersonal (Rubin y Brown, 1975) puede ayudar a resolver estos problemas de pareja, colaborando con el abogado en todo el desarrollo del procedimiento legal.

Este primer objetivo de describir la forma de trabajar del abogado nos abre el camino para plantear el segundo objetivo de este estudio, que es encontrar apoyo empírico a las siguientes hipótesis:

- 1.- El procedimiento contencioso es el más usado por los abogados para solucionar los problemas de ruptura.
- 2.- El uso del procedimiento consensual es más ventajoso que el uso del procedimiento contencioso, puesto que es más breve, menos costoso, y da lugar a menos incumplimientos.
- 3.- Las experiencias del abogado, su actitud positiva hacia el uso de la vía amistosa y hacia la colaboración con el psicólogo, ayudan a conseguir más tramitaciones consensuadas y menos incumplimientos.

METODO

1.- Selección de la Muestra.

La muestra final está compuesta por 56 despachos de abogados que ejercen en Derecho Matrimonial. El número de profesionales de estos despachos que colaboraron en este estudio son 71, están incluidos en la lista del Colegio Oficial de Abogados ejercientes en Madrid y presentan 1009 casos de separaciones y divorcios llevados durante un año.

A continuación describimos el proceso seguido para llegar a la delimitación de la muestra final, previa la administración de los cuestionarios elaborados para este fin, a 5 abogados, para así comprobar su viabilidad.

En primer lugar, se recurre a la Guía de Abogados Colegiados de Madrid, por orden alfabético de sus apellidos, y se intenta contactar telefónicamente con ellos. Como las llamadas se realizaron a lo largo de todo el día, muchas de ellas no fueron contestadas, respondiendo el contestador e informando de que el horario de trabajo era por la tarde. Otras llamadas resultaron no ser un despacho profesional sino el domicilio particular del profesional, siendo colegiados que no tenían despacho y que, o bien no ejercían, aunque estaban en la lista de ejercientes o bien llevaban algún caso suelto en su propia casa. Algunos de los teléfonos de la guía correspondían a Colegiados de Madrid pero que tenían sus despachos en otras ciudades distintas. En otros casos las llamadas realizadas a profesionales distintos, se referían al mismo despacho profesional que era compartido por más de un abogado.

Para paliar estos inconvenientes se siguieron los siguientes pasos:

1. Se averiguó que muchos abogados tienen las consultas por las tardes, utilizando las mañanas para acudir a juicios y demás ocupaciones. Unos empezaban a las 4, otros a las 5 y otras a las 6, y la finalización de la consulta era a las 7, 8 ó 9. Por ello se fijó un horario medio para las llamadas, de 5 a 8 de la tarde.
2. De la lista de Colegiados se señalaron todos aquellos profesionales que tenían una "D" después del nombre y que significaba "Despacho profesional", para garantizar que se llamaba a la consulta y que por lo tanto ejercían.
3. Se eliminaron a todos aquellos profesionales que tuvieran "D" pero que el despacho correspondía a otra ciudad o a la provincia de Madrid, quedándonos sólo con los de Madrid capital. Siendo el número total de estos despachos de 3.401.
4. Se introdujeron en el ordenador todos los nombres de los profesionales con despacho en Madrid capital, detectando mediante las direcciones aquellos que se referían a un mismo despacho, eliminando las repeticiones y evitando así llamar más de una vez al mismo despacho; quedaron 2.181 despachos.

Las llamadas se realizaron siguiendo la lista de colegiados, con las salvedades antes mencionadas y saltándose las que comunicaban. Cuando se terminaba con una letra alfabética se repetía la llamada en aquellos que estaban

comunicando, aunque no se insistía si en esta segunda ocasión seguía comunicando.

La llamada telefónica consistía en:

- 1.- Preguntar por el profesional que figuraba en la guía.
- 2.- Pasar, a través de la secretaria, a conversar con el profesional en cuestión.
- 3.- Informar al profesional sobre:
 - a) La persona que habla, datos de identificación, profesional ...
 - b) El objeto de la llamada de forma breve.
 - c) Preguntar si llevan o no temas matrimoniales.

Si la respuesta es no, la conversación se da por finalizada, agradeciéndose la atención dispensada. Si la respuesta es de que sí llevan asuntos matrimoniales en el despacho, se añade la siguiente información: "para llevar a cabo la investigación mencionada necesitaríamos la colaboración de profesionales como Vd. que se dediquen a estos temas y puedan contestar un cuestionario anónimo sobre los casos llevados en un periodo de un año en su despacho, así como otro cuestionario para cada uno de los profesionales que trabajan en el despacho estos temas". Se le indica que se les mandará por correo y se agradece su participación y la importancia de la misma.

La llamada, tal y como se ha relatado, oscilaba entre 5 y 20 minutos. A veces se prolongaba la duración de la misma si el abogado pedía explicaciones sobre el trabajo en cuestión, o incluso enlazaba con temas de su trabajo o problemáticas en las que se ha encontrado. A continuación

se tomaba nota sobre si colaboraban o no y el número de profesionales que trabajaban en el tema.

De las 1.100 despachos, en 310 no contestan, 180 no pasaron de la secretaria, 95 ya no ejercían, 105 no quisieron colaborar y 250 no llevaban asuntos matrimoniales. Los restantes 160 despachos (el 14,55% de los entrevistados) llevaban asuntos matrimoniales y se mostraron dispuestos a colaborar en el estudio. Estos contribuyeron a la muestra inicial.

Para enviar los cuestionarios a los 160 despachos que accedieron a colaborar se redactó una carta de presentación, en papel con membrete de la U.A.M. (ver anexo).

En dicha carta se adjuntó un cuestionario de recogida de datos de los casos llevados en el despacho y otro cuestionario de opinión para cada uno de los abogados que trabajaran en dicho despacho en temas matrimoniales.

De las 160 cartas enviadas sólo se recibieron 61 contestaciones de despachos, de las cuales 45 estaban realizadas correctamente. De las 16 restantes, 6 se devolvían sin contestar y con una carta de disculpa por no tener tiempo para rellenar lo indicado, y dando unas generalidades por toda respuesta.

Después de un tiempo se insistió telefónicamente a los 99 despachos que no habían contestado, recibándose diversas explicaciones telefónicas:

- . 12 abogados presentaron disculpas personalmente por estar muy ocupados.
- . 24 presentaron sus disculpas a través de la secretaria.
- . 63 profesionales sugirieron un nuevo envío por pérdida de la anterior documentación

Una vez realizado el nuevo envío, se recibieron 29 contestaciones más, de las que 18 se desestimaron por no estar cumplimentadas correctamente y las 11 restantes se incorporaron a las 45 anteriores, ampliándose el total de 56 respuestas correctas de otros tantos despachos, y 71 cuestionarios de abogados.

2.- Descripción de los instrumentos.

a.- Elaboración de los cuestionarios.

Se confeccionaron dos cuestionarios con objeto de obtener información de abogados que trabajaban en temas matrimoniales, entre otros. En el primer cuestionario (apéndice n° 1) se recoge la siguiente información:

- a) N° de Separaciones y Divorcios tramitados durante el año 87.
- b) Datos sociológicos de las personas que acuden a separarse o divorciarse (años de matrimonio, edad de las parejas, n° de hijos, clase social, etc...)

c) Datos relativos al procedimiento con el objetivo de ofrecer una descripción sobre la forma usual que tienen las parejas de plantear su ruptura y cómo se resuelven legalmente:

- **Quién requirió los servicios del abogado**

Se trata de ver el sexo del demandante y si acude uno sólo de la pareja o los dos, ya que el acudir juntos supondría, de entrada, una posibilidad mayor de conseguir acuerdos.

- **Acuerdo inicial de las parejas**

Este acuerdo se refiere al intento, por parte de ambos miembros, de iniciar unas conversaciones para ver si consiguen entenderse en aquellos puntos discrepantes, y así poder tramitar el procedimiento por vía amistosa.

- **Acuerdo final**

Se refiere al acuerdo real conseguido y que tiene como resultado el que la pareja recurra a la vía amistosa para tramitar su procedimiento.

- **Asignación de la guarda y custodia**

Se trata de averiguar, de los casos tramitados por los abogados, y que se supone han pasado por todos los juzgados de Familia de Madrid, si existe diferencia en cuanto a la tendencia de los jueces a asignar la guarda y custodia de los hijos al padre o la madre.

- **Incumplimientos**

Los incumplimientos pueden ser de dos tipos, los que se realizan habiendo tramitado el procedimiento por vía amistosa, es decir, la violación de algún punto del

convenio regulador que ambos cónyuges habían pactado de común acuerdo, y los que se realizan habiendo tramitado el procedimiento por vía contenciosa, y que tienen que ver con incumplimientos de la sentencia judicial, es decir no cumplir lo que el juez ha decretado. Estos dos tipos de incumplimientos se entienden como tales cuando un miembro acude a la vía judicial para demandar al otro por incumplimiento de lo acordado por ellos o de lo establecido por el juez.

- Duración y coste

Hace referencia al tiempo que lleva tramitar el procedimiento amistoso y el contencioso con el fin de poder comparar ambos tipos de procedimiento. En cuanto al coste, ocurre otro tanto, se trata de conocer la diferencia económica entre los dos procedimientos.

En el segundo cuestionario (n° 2) se recoge la siguiente información:

- a) Datos sociológicos del abogado que ha llevado los casos (sexo y edad, si trabaja otros asuntos además de los matrimoniales, años de ejercicio como abogado y como matrimonialista).
- b) Datos sobre el sistema de trabajo: tácticas usadas mediante las cuales ha conseguido que se tramitara el procedimiento por vía amistosa pese a existir un desacuerdo inicial. Entre éstas tácticas tenemos:

1.- Ponerse en contacto con el abogado de la otra parte.- Táctica usual entre los abogados cuando quieren que se resuelva el caso de forma rápida. Consiste en hablar telefónicamente con el abogado que representa a la otra parte y sondear un posible acuerdo. Las peticiones en un principio son más elevadas para ir disminuyendo paulatinamente y dar la impresión de que se cede, aunque de antemano se tiene establecido el límite que no perjudique a su cliente. Generalmente esta táctica se utiliza cuando los abogados piensan que la resolución judicial puede no ser beneficiosa para su cliente o existen ciertas dudas al respecto.

2.- Ponerse en contacto con la otra parte.- En general lo utilizan los abogados cuando la pareja de su cliente no ha ido a ningún abogado. Consiste en el envío de una carta donde se le comunica que representa a su pareja, que ésta solicita la Separación y/o el divorcio y que le invita a un posible acuerdo para lo cual le envía una cita. En general, al recibir la carta la otra parte, se pone en contacto con otro abogado que la represente. Si acude al despacho del abogado se iniciaría la táctica siguiente.

3.- Poner de acuerdo a los interesados.- Esto ocurre cuando ambos van a un mismo abogado y, aunque presenten desacuerdos, éste intenta negociar con la pareja o les da los puntos del convenio para que ellos se pongan de acuerdo y vuelvan cuando lo hayan conseguido.

4.- Esperar a que la otra parte tome la iniciativa.- Algunos abogados creen que si ellos esperan a que el abogado contrario inicie los contactos tienen más posibili-

dad de imponer sus condiciones para un acuerdo, por lo que intentan no ser ellos los que inicien los contactos.

c) Datos de opinión sobre:

- . el grado de acuerdo del abogado en que los temas matrimoniales se tramiten por vía amistosa, estableciéndose las siguientes gradaciones:
 - . Desacuerdo.
 - . Neutral.
 - . De acuerdo.
 - . Totalmente de acuerdo.
- . si el psicólogo ayudaría a resolver estos temas y el por qué.

El objetivo de este cuestionario es demostrar que la idea que los abogados tienen sobre cómo resolver legalmente los temas matrimoniales está condicionada por la opinión que estos profesionales tienen sobre la ruptura, y la actuación del psicólogo en estos temas. Pensamos que las opiniones más a favor del uso del procedimiento consensual y de la participación del psicólogo como mediador, así como el contactar con la otra parte como estrategia para conseguir los acuerdos, favorecerían el uso de la vía amistosa y disminuirían los incumplimientos en esta vía.

3.- Tratamiento de los datos.

Las respuestas de los 56 despachos sobre los 1.009 casos llevados (cuestionario n° 1) y las de los 71 abogados en materia de opinión, (Cuestionario 2) fueron analizados con un paquete estadístico (el SPSS/PC+). En primer lugar se procedió a un recuento de frecuencias y porcentajes que

nos servirán para un primer análisis descriptivo de los datos aportados.

En segundo lugar pensamos que los años de ejercicio de la profesión podría ser una variable que indicaría diferencias en cuanto a la forma de trabajar los abogados en los temas matrimoniales, su actitud ante los mismos así como en los resultados obtenidos de su intervención en estos procedimientos. Por ello se fijaron tres grupos de abogados según su experiencia profesional, medida en años de ejercicio de la profesión:

- | | |
|----|----------------|
| 1. | 6 años o menos |
| 2. | 7 - 12 años |
| 3. | 13 o más años |

Se obtuvieron las medias de las variables por grupos y se fueron comparando. Para comprobar si las diferencias eran significativas se aplicaron diferentes técnicas estadísticas que iremos señalando al indicar las variables y los resultados de las comparaciones.

En tercer lugar, también tuvimos en cuenta la experiencia de los profesionales abogados, por el número de casos tramitados en el periodo de un año, pensando, que obtendríamos una medida más fina que la de los años de experiencia profesional. Para ello, obtuvimos la mediana de los casos tramitados en cada uno de los 56 despachos y que se situa en 16, y dividimos a los profesionales en dos grupos:

- a) Expertos, los que han llevado más de 16 casos en el año en que se sitúa el estudio.
- b) Menos expertos, los abogados que han llevado menos de 16 casos en el citado tiempo.

En cuarto lugar, establecimos dos grupos más, en función del acuerdo o desacuerdo mostrado por los abogados, en cuanto a la utilización de la vía consensual como la más adecuada para la resolución de los temas matrimoniales. Para ello dividimos las respuestas de los abogados a la pregunta 4 del cuestionario n° 2, en dos apartados:

- a) Favorable, que comprende las respuestas que indicaban un acuerdo total o parcial con el uso del procedimiento consensual.
- b) Menos favorable, recogiendo aquellas respuestas que indican un ligero y neutral desacuerdo con el uso del citado procedimiento.

En quinto lugar, analizamos una serie de variables en función de la combinación de las dos variables anteriores (3 y 4), obteniendo cuatro grupos de abogados.

1. Abogados expertos que se muestran favorables con la utilización de la vía consensual.
2. Abogados expertos que están menos de acuerdo con el uso de esta vía.
3. Abogados menos expertos favorables a la vía consensual.
4. Abogados menos expertos y menos de acuerdo con el uso de dicha vía legal.

En sexto lugar, consideramos de interés analizar cualitativamente las razones dadas por los abogados, a la pregunta de si consideran que la intervención del psicólogo ayuda a resolver este tipo de asuntos. El objeto de este análisis, es constatar cómo los abogados tienen una serie de creencias respecto al profesional psicólogo, y también sobre los procedimientos usados en estos temas que están, en relación con su forma de actuar en estos asuntos de Familia. Con este fin, y tras una lectura detenida, de las razones dadas por los abogados, para considerar o no la intervención del psicólogo en esta materia, pasamos a codificar, las respuestas afirmativas y negativas, eligiendo como unidad de registro el tema, es decir la significación de las opiniones de los abogados al responder a esta pregunta. Las razones dadas ante la postura a favor a la colaboración del psicólogo en los procedimientos matrimoniales son:

1. El psicólogo hace de medidor, acercando las posturas enfrentadas y orientándolas hacia una vía legal amistosa.
2. El psicólogo ayuda a las parejas a reconsiderar su decisión y consigue reconciliarlas.
3. El psicólogo ayuda a las parejas a resolver sus problemas emocionales y a aceptar su nueva situación
4. El psicólogo ayuda al juez a decidir sobre la Guarda y Custodia y el Régimen de visitas más idóneo.

Las razones dadas sobre la opinión en contra acerca de la colaboración del psicólogo son:

1. Los abogados creen que los procedimientos matrimoniales son competencia exclusiva de los abogados ya que se trata de asuntos legales y/o económicos por lo que la intervención del psicólogo es improcedente.
2. Los abogados creen que el trabajo del psicólogo consiste en reconciliar a la pareja y como en estos casos lo que quieren es separarse, no procede la intervención psicológica.
3. Los abogados creen que sería interesante la intervención del psicólogo pero considera que España está atrasada y que no se cree en los psicólogos.

RESULTADOS

El número de separaciones y divorcios obtenidos en la muestra de los 56 despachos de abogados que se utilizaron para este estudio es de 1009, correspondiendo 614 a separaciones y 395 a divorcios. La pareja prototipo que inicia su ruptura marital sería la siguiente: Llevan entre 5 y 10 años de casados, sus edades están comprendidas entre los 31 y 40 años, tienen dos hijos y pertenecen a una clase media.

	% n=1009
SEPARACIONES	60.9
DIVORCIOS	39.1

N° DE AÑOS DE MATRIMONIO	MENOS DE 5 AÑOS	24.4
	DE 5 A 10 AÑOS	46.4
	DE 11 A 20 AÑOS	23.3
	DE 21 A 30 AÑOS	4.6
	MAS DE 30 AÑOS	1.4

EDAD DE EL	MENOS DE 20 AÑOS	0.2
	DE 21 A 30 AÑOS	25.0
	DE 31 A 40 AÑOS	51.8
	DE 41 A 50 AÑOS	17.6
	MAS DE 50 AÑOS	5.4

		% n=1009
EDAD DE ELLA	MENOS DE 20 AÑOS	2.6
	DE 21 A 30 AÑOS	32.8
	DE 31 A 40 AÑOS	47.1
	DE 41 A 50 AÑOS	13.7
	MAS DE 50 AÑOS	3.8
HIJOS	SIN HIJOS	11.6
	1 HIJO	27.7
	2 HIJOS	40.8
	3 HIJOS	16.3
	4 o MAS HIJOS	3.6
CLASE SOCIAL	BAJA	5.8
	MEDIA BAJA	26.4
	MEDIA	44.4
	MEDIA ALTA	19.8
	ALTA	3.6

Si observamos los datos relacionados con el servicio jurídico consultado, tenemos que en el 57.2% de los casos fue la mujer quien requirió los servicios del abogado para solicitar su separación o divorcio, en el 26% de los casos lo hizo el hombre y en el 16.8% restante lo llevaron a cabo ambos.

		% n=1009
DEMANDANTE DEL SERVICIO	ELLA	57.2
	EL	26
	AMBOS	16.8

Del total de las parejas a las que se hace referencia el 70.4% no están de acuerdo inicialmente en la decisión de separarse. El 29.6% restante sí presenta un acuerdo inicial en esta toma de decisión, lo que posibilita la utilización de la vía consensual o amistosa para resolver su situación legal, siempre y cuando consigan acuerdos en todos los puntos del Convenio Regulador. Sin embargo estos porcentajes mencionados se refieren a la postura de las parejas antes de iniciar el procedimiento legal; ambos porcentajes se modifican cuando el procedimiento está ya iniciado realmente, alcanzando un 42% las parejas que tramitan su procedimiento por vía amistosa y un 58% las que lo inician por vía contenciosa. Concluido el procedimiento, el juez asigna la Guarda y Custodia de los hijos a la madre en un 97.5% de los casos, quedando el 2.5% restante concedida al padre.

	AC. INICIAL	AC. FINAL
	% (n=1009)	% (n=1009)
SI	29.6	42
NO	70.4	58

Gráfica de acuerdos alcanzados por los abogados

% n=1009

ASIGNACION DE LA GUAR- DA Y CUSTODIA POR EL EL JUEZ	MADRE	97.5
	PADRE	2.5

Del total de los casos tramitados por vía consensual o amistosa, el 40,61% incumplieron los acuerdos plasmados en el Convenio Regulador por ellos mismos. Esto nos indica que, aunque algunos abogados consigan poner de acuerdo a la pareja y tramitar el procedimiento por vía amistosa, éstos acuerdos no son reales, ya que no se mantienen y un miembro de la pareja denuncia el incumplimiento del otro. De estos incumplimientos, el 68.2% lo realiza el hombre, mientras que el 18.5% lo hacen las mujeres y el resto (13.3%) ambos miembros de la pareja. Los motivos de incumplimiento más frecuentes son los relacionados con el tema económico (liquidación de los bienes, pensiones, etc. ...) que juntos presentan un 56.8%. Los relacionados con los hijos (Guarda y Custodia y Régimen de visitas) suponen un 28.4%, quedando el 14.9% al tema del uso del domicilio. El sexo del que incumple más y el motivo del incumplimiento están relacionados, ya que los hombres incumplen más aquellos acuerdos relacionados con el tema económico, y esto es así porque son ellos lo que se encargan, en general, de pagar las pensiones.

De los casos que se tramitaron siguiendo una vía legal contenciosa, el 39,62% incumplieron la resolución tomada por el Juez. De este porcentaje de incumplimientos el 74% lo realizaron los hombres, el 18,6% las mujeres y el 7,4%

restante lo incumplieron ambos. Este tipo de incumplimientos nos interesa menos, ya que no se trata de incumplir acuerdos de la pareja, sino decisiones tomadas por el juez.

INCUMPLIMIENTOS	VIA.AMIS	VIA.CONT
	% n=173	% n=231
EL	68.2	74
ELLA	18.5	18.6
AMBOS	13.3	7.4
TOTALES	100	100.0

TIPOS DE INCUMPLIMIENTOS	VIA.AMIS	VIA.CONT
	% n=173	% n=231
GUARDA Y CUSTODIA	16.1	2.6
VISITAS	12.3	30.2
VIVIENDA-AJUAR	14.9	1.7
PENSION ALIMENTOS	11	47.4
LIQUIDACION REG.	15.8	7.8
PENSION	14.2	9.1
LITIS	15.8	1.3

Si ponemos en relación los porcentajes de incumplimientos con acuerdo (40,61%) y sin acuerdo (39,62%) obtenemos una diferencia de proporciones no significativa ($z = 0.32$; $p > 0.05$). Estos datos apoyan la idea de que, el grado de incumplimiento no mejora en la vía amistosa sobre la

contenciosa, y nosotros creemos que la razón es que el acuerdo no es real.

En cuanto a la duración de ambos tipos de procedimiento, los que se llevan por mutuo acuerdo se resuelven en un tiempo que oscila entre 3-4 meses, mientras que aquellos que se tramitan por vía contenciosa tardan entre 21-25 meses en resolver su situación legal. Asimismo, la diferencia en cuanto al coste de ambos tipos de procedimientos es elevada, ya que la media es de 125.000 pts en los que se resolvieron mediante el procedimiento consensual, y de 250.000 pts en aquellos que lo hicieron a través de una vía contenciosa. Si a esto añadimos que este segundo tipo de procedimiento necesita representación legal distinta para cada miembro de la pareja, la cuantía se duplica.

DURACION DEL PROCEDIMIENTO			
VIA AMISTOSA	% n=426	VIA CONTENCIOSA	% n=583
DE 1 A 2 MESES	15	DE 10 A 15 MESES	9.0
DE 3 A 4 MESES	36	DE 16 A 20 MESES	38.1
DE 5 A 7 MESES	38	DE 21 A 25 MESES	33.8
MAS DE 7 MESES	11	MAS DE 25 MESES	19.1

COSTE DEL PROCEDIMIENTO			
VIA AMISTOSA	% n=426	VIA CONTENCIOSA	% n=583
MENOS DE 100.000	25.1	MENOS DE 200.000	28.4
DE 100 A 150.000	55.2	DE 200 A 300.000	52
DE 150 A 200.000	19.3	DE 300 A 400.000	16.6
MAS DE 200.000	0.5	DE 400 A 500.000	2.9

Datos de los abogados que tramitaron los procedimientos. De los 56 despachos de la muestra obtuvimos información de 71 profesionales del Derecho que trabajan en dichos despachos y que colaboraron en este estudio, ofreciendo datos de los casos de separación y divorcio llevados en sus despachos durante un período de un año y que se han descrito anteriormente. Las características de estos profesionales son las siguientes:

CARACTERISTICAS DE LOS ABOGADOS		% n=71
EDAD	MENOS DE 29 AÑOS	23.9
	DE 30 A 34 AÑOS	39.4
	DE 35 A 39 AÑOS	18.3
	DE 40 A 44 AÑOS	5.6
	DE 45 A 49 AÑOS	2.8
	50 AÑOS O MAS	9.9

SEXO	HOMBRE	70.4
	MUJER	29.6

LLEVA OTROS ASUNTOS, ADEMAS DE LOS MATRIMONIALES	SI	98.6
	NO	1.4

EJERCICIO DE LA ABOGACIA	6 AÑOS O MENOS	28.2
	DE 7 A 12 AÑOS	47.9
	13 O MAS AÑOS	23.9

CARACTERISTICAS DE LOS ABOGADOS (cont.)		% n=71
EJERCICIO MATRIMONIAL	6 AÑOS O MENOS	35.2
	DE 7 A 12 AÑOS	52.1
	13 O MAS AÑOS	12.7

ACUERDO EN TRAMITACION POR VIA AMISTOSA	DESACUERDO TOTAL	0
	DESACUERDO	2.8
	NEUTRAL	18.3
	LIG. DE ACUERDO	16.9
	TOTALM.DE ACUERDO	62

La media de edad de estos 71 abogados se situa en 35 años, correspondiendo el 70,4% a hombres y el 29,6% restante a mujeres. La gran mayoría de estos profesionales llevan otros temas legales además de los matrimoniales (97,2%) y la media en años de experiencia como abogado se situa en 11,5 años, mientras que la adquirida como abogado matrimonialista es algo menor, de 9,6 años por término medio. Esto es lógico, ya que los abogados empiezan a trabajar de forma general, y después se van especializando en temáticas concretas. De este grupo de profesionales el 62% muestra un total acuerdo en que estos temas matrimoniales deberían tramitarse por vía consensual o amistosa, mientras que sólo el 2,8% está en desacuerdo.

De entre las estrategias más utilizadas, y que han dado como resultado tramitar el procedimiento por vía consensual, es la de ponerse en contacto con el abogado de la otra parte, siendo usada por el 70,4% de estos profesio-

nales. La segunda estrategia utilizada es la de ponerse en contacto con la otra parte de la pareja, usada por el 53,5% de estos profesionales. La estrategia de poner de acuerdo a los interesados es usada por el 16,9% de los abogados; dejar que la otra parte tenga la iniciativa sólo la utilizan el 7%. Ninguno se sirve del psicólogo para conseguir esta vía amistosa.

ESTRATEGIA USADA POR LOS ABOGADOS PARA LA TRAMITACION AMISTOSA

		% n=71
CONTACTAR CON ABOGADO CONTRARIO	SI	70.4
	NO	29.6
CONTACTO CON LA OTRA PARTE	SI	53.5
	NO	46.5
INICIATIVA DE LA PARTE CONTRARIA	SI	7
	NO	93
POR ACUERDO ENTRE LOS INTERESADOS	SI	16.9
	NO	83
POR INTERVENCION DE UN PSICOLOGO	SI	0
	NO	100

Preguntados los abogados sobre su opinión respecto a la colaboración del psicólogo en la resolución de los procedimientos matrimoniales, las respuestas de los 71 abogados se dividen casi por igual entre lo que tienen opiniones positivas y negativas.

		% n=71
UNA COLABORACION PSICOLOGICA AYUDARIA A RESOLVER ESTOS TEMAS	SI	49.2
	NO	50.7

Entre las razones dadas por los abogados que opinan a favor de la colaboración del psicólogo en los procedimientos matrimoniales, tenemos que el 33% de los abogados piensan que en los temas matrimoniales los problemas emocionales son prioritarios y el psicólogo intervendría para ayudar a resolver estos problemas. Podríamos decir que para ellos el papel asignado al psicólogo es el de psicoterapeuta. El 22% de los abogados también perciben al psicólogo como psicoterapeuta, pero la ayuda que presta es más puntual, y no dirigida a la reconciliación de las parejas. El 26% de los abogados tiene la idea del psicólogo como una persona objetiva que trata de aunar posturas enfrentadas; aquí el papel asignado es más el de mediador. El resto (19%) creen que el psicólogo ayudaría al juez en su toma de decisión sobre el tema de los hijos cuando los padres se separan.

RAZONES A FAVOR DE LA COLABORACION DEL PSICOLOGO

Respuestas:	% (n=36)
1. Los asuntos matrimoniales son prioritariamente problemas emocionales por lo que el psicólogo puede ayudar	33
2. El psicólogo puede hacer que la pareja reconsidere su decisión y se reconcilien .	22
3. El psicólogo acerca posturas enfrentadas y actua con objetividad	26
4. El psicólogo ayuda al Juez a decidir sobre la Guarda y Custodia	19

RAZONES EN CONTRA DE LA COLABORACION DEL PSICOLOGO

Respuestas:	% (n=35)
1. Los procedimientos matrimoniales son asuntos legales y económicos por lo que son competencia exclusiva de los abogados. La intervención del psicólogo es improcedente.	65.6
2. Creen que el trabajo del psicólogo consiste en hacer que la pareja esté junta y como ésta lo que pretende es separarse, no es procedente su intervención	31.6
3. En España no se está tan avanzado como para pensar en el psicólogo	2.8

Las razones dadas por los abogados cuando su respuesta es negativa a la colaboración del psicólogo se presenta en la Tabla siguiente. El 65,6% opina que la intervención del

psicólogo es improcedente ya que la base de estos temas es legal y económica por lo que la competencia es exclusiva de los abogados. El 31,6% cree que el trabajo del psicólogo consiste en hacer que la pareja esté junta por lo que en los asuntos matrimoniales no sería oportuna su intervención al estar encaminados a separarse. El porcentaje restante, que es solamente 1 caso (2.8%) cree que el pensar en la intervención del psicólogo en España es muy avanzado y que no estamos preparados.

Las respuesta n° 2 del grupo de abogados favorables a la colaboración del psicólogo, como las respuestas n° 2 de los desfavorables, indican un mismo concepto del psicólogo: Hacer que la pareja esté junta; lo que les diferencia es que los primeros admiten menos la separación y quieren conceder una nueva oportunidad a la pareja que los segundos.

Las posiciones realmente enfrentadas serían las respuestas 3 y 4 de los que están a favor de la colaboración del psicólogo (la labor del psicólogo interviniendo en el procedimiento) y las respuestas n° 1 de los que opinan que no a la colaboración del psicólogo (Es un tema legal, exclusivamente, y el psicólogo no debe intervenir).

Características de los abogados y resultados de los procedimientos. Al analizar la proporción de acuerdos iniciales en función de los años de ejercicio profesional, a nivel descriptivo observamos, que la proporción media de acuerdos iniciales es menor en el grupo de abogados que lleva menos años de experiencia profesional (ejercicio de la profesión, sin especialización), aumenta con los años de ejercicio profesional y va disminuyendo cuando pasan de los 13 años de ejercicio profesional. La proporción media de

acuerdos finales sigue un cierto aumento gradual a los años de ejercicio de la profesión, aunque si se trata de ejercitar la abogacía en derecho matrimonial, la proporción promedio mayor de acuerdos finales la tiene el segundo grupo de edad (7 - 12 años de ejercicio), disminuyendo en el grupo de más años de ejercicio como abogado matrimonialista.

PROPORCION MEDIAS DE ACUERDOS

	INICIALES AAM	
	\bar{x}	Sx
6 AÑOS O MENOS	.2513	.2070
7 - 12 AÑOS	.3050	.2459
13 AÑOS O MAS	.2632	.2042

FINALES AAM	
\bar{x}	Sx
.3673	.1721
.4474	.2321
.3248	.2117

AAM = Años de experiencia, de los abogados, en derecho Matrimonial

	INICIALES AAB	
	\bar{x}	Sx
6 AÑOS O MENOS	.2540	.2189
7 - 12 AÑOS	.2964	.2227
13 AÑOS O MAS	.2812	.2531

FINALES AAB	
\bar{x}	Sx
.3785	.1850
.4107	.2049
.3941	.2640

AAB = Años de experiencia, de los abogados, en derecho.

En relación a los incumplimientos no se observan diferencias significativas. A nivel descriptivo se puede señalar que la proporción media de incumplimientos realizados cuando el procedimiento es amistoso, es menor, entre los abogados con más experiencia en derecho matrimonial, aunque no parecen ser verdaderos acuerdos.

PROPORCION MEDIAS DE INCUMPLIMIENTOS

	VIA AMIST. AAM		VIA CONT. AAM	
	\bar{x}	Sx	\bar{x}	Sx
6 AÑOS O MENOS	.4582	.3449	.4491	.2804
7 - 12 AÑOS	.4046	.2975	.4182	.3724
13 AÑOS O MAS	.3941	.3687	.3946	.2701

AAM = Años de experiencia, de los abogados, en derecho Matrimonial

	VIA AMIST. AAB		VIA CONT. AAB	
	\bar{x}	Sx	\bar{x}	Sx
6 AÑOS O MENOS	.4528	.3513	.4389	.2786
7 - 12 AÑOS	.3951	.3143	.4397	.3745
13 AÑOS O MAS	.4403	.3089	.3839	.2899

AAB = Años de experiencia, de los abogados, en derecho.

En la duración promedio de ambos tipos de procedimientos no se observa diferencia significativa. Parece pues que la duración de los procedimientos está más en relación, con el tipo de procedimiento y con la dinámica de los propios juzgados, que con la experiencia de los profesionales, ya sea en derecho en general o en matrimonial.

PROPORCION MEDIA DE LA DURACION DEL PROCEDIMIENTO

	VIA AMIST. AAM		VIA CONT. AAM	
	\bar{x}	Sx	\bar{x}	Sx
6 AÑOS O MENOS	4.3539	1.6422	21.0657	4.4235
7 - 12 AÑOS	4.4406	1.6504	20.0196	6.3584
13 AÑOS O MAS	5.1213	2.6422	22.6340	5.0808

AAM = Años de experiencia, de los abogados, en derecho Matrimonial

	VIA AMIST. AAB		VIA CONT. AAB	
	\bar{x}	Sx	\bar{x}	Sx
6 AÑOS O MENOS	4.4049	1.5814	20.8090	4.6901
7 - 12 AÑOS	4.3490	1.6721	20.9750	5.3338
13 AÑOS O MAS	4.8988	2.2267	20.1024	7.1792

AAB = Años de experiencia, de los abogados, en derecho.

En relación con el sexo de los profesionales a nivel descriptivo tenemos que los hombres presentan una proporción más elevada de acuerdos iniciales y finales que las mujeres. La proporción media de incumplimientos realizados por las parejas cuando han llevado el procedimiento por vía consensual es mayor entre los profesionales mujeres que entre los hombres pero cuando los incumplimientos se refieren a aquellos que se tramitan por vía contenciosa, la proporción media de incumplimientos, es mayor para los abogados hombres. Sin embargo, ninguna de las anteriores diferencias resultó estadísticamente significativa.

PROPORCION MEDIA DE ACUERDOS

	INICIAL		FINAL	
	\bar{x}	Sx	\bar{x}	Sx
HOMBRES	.2970	.2320	.4092	.2195
MUJERES	.2422	.2137	.3905	.2005

PROPORCION MEDIA DE INCUMPLIMIENTOS

	VIA AMIST.		VIA CONT.	
	\bar{x}	Sx	\bar{x}	Sx
HOMBRES	.3894	.3402	.4446	.3483
MUJERES	.5003	.2576	.3821	.2724

Con respecto a la opinión, favorable o no, que los abogados tienen de la colaboración del psicólogo en estos temas, tenemos que la proporción media de acuerdos iniciales y finales, es mayor entre los abogados que son favorables a la colaboración del psicólogo. Estos abogados también presentan una proporción media de incumplimientos con acuerdo menor que los abogados con opinión desfavorable a dicha colaboración, siendo esta diferencia estadísticamente significativa [$t(69)=2.55$; $p < .005$]. Esta mayor proporción de acuerdos finales, en el grupo de abogados favorables a la colaboración del psicólogo, junto con una menor proporción de incumplimientos por vía amistosa, nos indica que estos abogados entienden los temas de familia desde una perspectiva no exclusivamente legal, donde el objetivo es ganar el procedimiento, e intentan orientar a sus clientes a la vía amistosa.

PROPORCION MEDIA DE ACUERDOS	INICIAL		FINAL	
	\bar{x}	Sx	\bar{x}	Sx
SI	.3182	.2338	.4380	.2251
NO	.2445	.2164	.3703	.1974

Si= Opinión favorable a la colaboración del psicólogo
 No= Opinión desfavorable a la colaborac.del psicólogo.

No ocurre así cuando los incumplimientos se refieren a los tramitados por vía contenciosa donde la proporción es mayor entre los abogados con opinión favorable a la intervención del psicólogo. Sin embargo, este tipo de incumplimientos tiene poco que ver con los profesionales que los llevan a cabo, ya que el procedimiento contencioso

en sí, provoca incumplimientos al ser resuelto por el juez sin que los implicados hayan opinado, por lo que, en general, los dos miembros de la pareja no están de acuerdo con la resolución judicial o en alguno de sus aspectos.

PROPORCION MEDIA INCUMPLIMIENTOS	VIA AMIST.		VIA CONT.	
	\bar{x}	Sx	\bar{x}	Sx
SI	.3277	.2736	.4665	.3638
NO	.5141	.3388	.3868	.2867

Si= Opinión favorable a la colaboración del Psicólogo.

No= Opinión desfavorable a la colaborac.del Psicólogo.

En cuanto a la duración promedio de los procedimientos tramitados por vía amistosa y por vía contenciosa, ésta es menor entre los profesionales favorables a la colaboración psicológica pero esta diferencia no es estadísticamente significativa.

DURACION PROMEDIO	VIA AMIST.		VIA CONT.	
	\bar{x}	Sx	\bar{x}	Sx
SI	4.1742	1.8508	20.2493	5.8172
NO	4.8096	1.6830	21.1763	5.3981

Si= Opinión favorable a la colaboración del Psicólogo.

No= Opinión desfavorable a la colaborac.del Psicólogo.

Los abogados que presentan un desacuerdo en resolver los temas matrimoniales por la vía amistosa, tienen en

promedio, una proporción de acuerdos iniciales mayor, que los que opinan más a favor de la utilización de dicha vía legal, aunque lo que verdaderamente, importa es la proporción de acuerdos conseguidos finalmente, y esta es mayor, entre los abogados que tienen una opinión más favorable, respecto a la tramitación consensual, como vía para resolver estos temas. El aumento de la proporción media de acuerdos, presentado por el grupo de abogados en desacuerdo con la vía amistosa, es poco relevante, ya que se trata de sólo dos casos.

PROPORCION MEDIA DE ACUERDOS

	INICIALES		FINALES	
	\bar{x}	Sx	\bar{x}	Sx
DESACUERDO (n=2)	.3343	.0909	.5107	.0859
NEUTRAL (n=13)	.2315	.2043	.3556	.1579
DE ACUERDO (n=12)	.3066	.2428	.3801	.1881
TOTALM. DE AC. (n=44)	.2846	.2354	.4195	.2364

Respecto a la proporción media de los incumplimientos, no se observan elementos que resulten interesantes de comentar, ya que la posición favorable o no del abogado a la vía amistosa, no parece tener un mayor o menor nivel de incumplimiento.

PROPORCION MEDIA DE INCUMPLIMIENTOS	VIA AMIST.		VIA CONT.	
	\bar{x}	Sx	\bar{x}	Sx
DESACUERDO (n=2)	.2389	.0550	.2485	.1628
NEUTRAL (n=13)	.5972	.3003	.3081	.2525
DE ACUERDO (n=12)	.3726	.3691	.5579	.2881
TOTALM. DE AC. (n=44)	.3723	.3074	.4331	.3520

DURACION PROMEDIO	VIA AMIST.		VIA CONT.	
	\bar{x}	Sx	\bar{x}	Sx
DESACUERDO (n=2)	6.1681	.0805	16.2689	1.3231
NEUTRAL (n=13)	5.0050	1.1491	21.0859	3.8465
DE ACUERDO (n=12)	4.0436	2.0749	20.9070	4.3233
TOTALM. DE AC. (n=44)	4.3936	1.8533	20.7621	6.3957

La duración promedio de los procedimientos realizados de mutuo acuerdo es menor entre los abogados partidarios de que los temas matrimoniales se lleven por vía amistosa, que

entre aquellos cuya opinión es contraria a esta forma de tramitarlos, esta diferencia resultó estadísticamente significativa mediante la prueba de KRUSKAL-WALLIS ($H = 7.02$; $p < 0.05$). La actitud positiva de los abogados hacia la tramitación amistosa, condiciona el estilo de trabajo de estos profesionales, resolviendo los conflictos con mayor rapidez. Esto no ocurre cuando los procedimientos se tramitan por vía contenciosa, ya que este tipo de procedimiento sigue una dinámica propia, y su duración varía, en función de las demandas y contrademandas que la pareja plantee.

Estrategias utilizadas por los abogados y resultados de los procedimientos. Los abogados que utilizan la táctica de ponerse en contacto con el abogado contrario, presentan una proporción media de acuerdos iniciales menor, que los que no la utilizan. Esto mismo ocurre con la táctica de contactar con la otra parte, mientras que, la táctica de poner de acuerdo a los interesados, presenta una proporción mayor de acuerdos iniciales, quizás porque esta vía es más conciliadora.

PROPORCION ACUERDOS INICIALES

		\bar{x}	Sx	N
1.	SI	.2508	.1945	50
	NO	.3522	.2818	21

2.	SI	.2719	.2352	38
	NO	.2911	.2194	33

3.	SI	.2854	.1571	5
	NO	.2805	.2319	66

4.	SI	.4270	.2089	12
	NO	.2511	.2199	59

- 1.: CONTACTO ABOGADO CONTRARIO
2.: CONTACTO CON LA OTRA PARTE
3.: INICIATIVA PARTE CONTRARIA
4.: PONER DE ACUERDO A LOS INTERESADOS

PROPORCION ACUERDOS FINALES

		\bar{x}	Sx	N
1.	SI	.3794	.1612	50
	NO	.4614	.2997	21

2.	SI	.4199	.2362	38
	NO	.3850	.1840	33

3.	SI	.4108	.1207	5
	NO	.4031	.2188	66

4.	SI	.4868	.1739	12
	NO	.3868	.2172	59

- 1.: CONTACTO ABOGADO CONTRARIO
- 2.: CONTACTO CON LA OTRA PARTE
- 3.: INICIATIVA PARTE CONTRARIA
- 4.: PONER DE ACUERDO A LOS INTERESADOS

Los abogados que utilizan, el ponerse de acuerdo con el abogado contrario, consiguen una media proporcional de acuerdos finales menor, que los que no la utilizan, mientras que, los abogados que utilizan el ponerse en contacto con la otra parte, y los que ponen de acuerdo a los interesados, consiguen una proporción de acuerdos finales mayor, que los abogados que no utilizan estas tácticas.

PROPORCION INCUMPLIMIENTOS POR VIA AMISTOSA

		\bar{x}	Sx	N
1.	SI	.4089	.3215	50
	NO	.4538	.3229	21

2.	SI	.4263	.2864	38
	NO	.4175	.3598	33

3.	SI	.4098	.3885	5
	NO	.4231	.3181	66

4.	SI	.4435	.3229	12
	NO	.4178	.3204	59

- 1.: CONTACTO ABOGADO CONTRARIO
2.: CONTACTO CON LA OTRA PARTE
3.: INICIATIVA PARTE CONTRARIA
4.: PONER DE ACUERDO A LOS INTERESADOS

Los abogados que utilizan el ponerse en contacto con el otro abogado y los que dejan la iniciativa a la parte contraria, presentan una proporción menor de incumplimientos por vía amistosa, mientras que los abogados que utilizan la táctica de poner de acuerdo a los dos miembros de la pareja, presentan una proporción mayor de incumplimientos de los propios acuerdos, una vez que ha concluido el trámite legal. Esto nos indica, que si en un principio, el poner de acuerdo a los interesados aumenta la probabilidad de las tramitaciones amistosas, estas negociaciones, no están realizadas de forma efectiva para que se mantengan los acuerdos.

PROPORCION INCUMPLIMIENTOS POR VIA CONTENCIOSA

		\bar{x}	Sx	N
1.	SI	.4180	.2849	50
	NO	.4455	.4183	21

2.	SI	.3882	.3115	38
	NO	.4698	.3436	33

3.	SI	.4011	.2630	5
	NO	.4280	.3330	66

4.	SI	.5348	.3408	12
	NO	.4040	.3237	59

- 1.: CONTACTO ABOGADO CONTRARIO
2.: CONTACTO CON LA OTRA PARTE
3.: INICIATIVA PARTE CONTRARIA
4.: PONER DE ACUERDO A LOS INTERESADOS

Los abogados que utilizan como tácticas, el ponerse de acuerdo con el abogado contrario, los que se ponen en contacto con la otra parte, y los que dejan que el otro tome la iniciativa, presentan una proporción de incumplimientos menor de las sentencias judiciales, que los abogados que no utilizan estas tácticas, mientras que aquellos abogados que utilizan el poner a los dos miembros de la pareja de acuerdo, presentan una mayor proporción de incumplimientos, aunque ésto, lo único que puede indicar, es que estos abogados no han conseguido poner de acuerdo a los interesados, ya que han tramitado su procedimiento por vía contenciosa y después de la sentencia han incumplido la decisión del juez.

DURACION PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO

		VIA AMISTOSA			VIA CONTENCIOSA		
		\bar{x}	Sx	N	\bar{x}	Sx	N
1.	SI	4.4261	1.3427	50	20.6834	4.0048	50
	NO	4.6637	2.5846	21	20.8049	8.3654	21
2.	SI	4.5634	2.0160	38	20.0020	6.5373	38
	NO	4.4791	1.5003	33	21.5453	4.1559	33
3.	SI	5.7015	1.7549	5	19.2836	4.5294	5
	NO	4.4051	1.7657	66	20.8281	5.6739	66
4.	SI	4.4312	1.9741	12	23.0411	5.0862	12
	NO	4.5096	1.7609	59	20.2471	5.6068	59

- 1.: CONTACTO ABOGADO CONTRARIO
 2.: CONTACTO CON LA OTRA PARTE
 3.: INICIATIVA PARTE CONTRARIA
 4.: PONER DE ACUERDO A LOS INTERESADOS

Los abogados que utilizan como táctica el dejar que la otra parte tenga la iniciativa, presentan una duración media mayor en meses, que los abogados que no utilizan esta táctica. De todas formas, la duración del procedimiento, no parece estar en relación con la táctica utilizada, sino más bien con el tipo de procedimiento empleado.

Experiencia de los abogados y resultados de los procedimientos. En cuanto a la división realizada con el grupo de abogados, en expertos (más de 16 casos al año) y menos expertos (menos de 16 casos al año), tenemos que el

porcentaje de divorcios llevados por ambos grupos de profesionales, expertos (41,4%) y menos expertos (34,5%), indica que los expertos llevan más divorcios que los menos expertos, y esta diferencia de proporciones es estadísticamente significativa, ($z=2.12; p<.05$). También existe diferencia significativa entre ambos grupos de profesionales, en lo que respecta al acuerdo final que muestran las parejas que acuden a separarse o divorciarse [$t(69) = 2.31; p < 0.05$], siendo el grupo de expertos el que presenta un mayor porcentaje de acuerdos finales (45,7% en comparación con el 35,1% de los menos expertos). Este mayor porcentaje de acuerdos finales de los expertos, indica que acuden más a la vía amistosa.

<p style="text-align: center;">DIVORCIOS</p> <p>Ex. 41.4% (288/681)</p> <p>NEx. 34.5% (113/328)</p>

Ex. = Expertos
NEx. = No expertos

TABLA DE PROPORCIONES MEDIAS

AC. INICIAL (SI)		AC.FINAL (acuerdo)	
\bar{X}	Sx	\bar{X}	Sx
.3328	.190	.4612	.199
.2303	.250	.3478	.214

Ex. = Expertos
NEx. = No Expertos

En relación al número de incumplimientos una vez se ha resuelto la vía legal de forma amistosa, el grupo de expertos presenta una proporción media de incumplimientos mayor que

los menos expertos aunque esta diferencia no es significativa [$t(69)=.65$; $p>0.05$]. Las parejas que tramitaron su procedimiento por vía contenciosa, resolviendo el juez sus desacuerdos, presentan una proporción media menor de incumplimientos, cuando la representación legal pertenece al grupo de profesionales expertos que al de menos expertos, y esta diferencia tampoco es significativa [$t(69)=.96$; $p>0.05$].

INCUMPLIMIENTOS				
VIA AMISTOSA			VIA CONTENCIOSA	
	\bar{X}	Sx	\bar{X}	Sx
Ex	.4475	.321	.4637	.350
NEx.	.3976	.323	.3895	.304

Ex. = Expertos

NEx. = No Expertos

Si observamos la duración media del procedimiento por vía consensual, en ambos grupos de profesionales, expertos (x 4.8 meses) y menos expertos (x 4.04 meses) existe diferencia significativa [$t(430)=4.110$; $p<0.001$]. Esto podría explicarse considerando que los abogados expertos dedican más tiempo a los clientes, intentando conseguir acuerdos o, simplemente en la preparación del caso. Cuando el procedimiento se ha tramitado por vía contenciosa, el grupo de Expertos presenta una duración promedio de 21,06 meses, algo mayor que la de 20,6 meses de los menos Expertos, no siendo significativa esta diferencia [$t(584) = 1.25$; $p>.05$]

DURACION DEL PROCEDIMIENTO (en meses)

	VIA AMISTOSA			-VIA CONTENCIOSA		
	X	n	Sx	X	n	Sx
Ex.	4.889	(311)	1.951	21.064	(370)	4.099
NEx.	4.04	(121)	1.941	20.60	(216)	4.570

Ex. = Expertos

NEx. = No Expertos

En lo que respecta al coste del procedimiento por vía amistosa, los profesionales expertos, presentan un coste medio de 124.582 pts, algo mayor que los menos expertos, 123.916 pts, aunque esta diferencia estadísticamente no es significativa [$t(156.54) = 0.15$; $p>.885$]. El promedio del coste solicitado, para la tramitación de los procedimientos por vía contenciosa, entre el grupo de abogados expertos, es de 250.540 pts, y el los abogados menos expertos, de 232.608 pts, siendo esta diferencia estadísticamente significativa

[$t(377)=2.65$; $p<.008$]. El procedimiento contencioso tienen un margen mayor de variación en cuanto al coste del mismo, ya que puede variar su complejidad, y los abogados cobran, también, en función de su prestigio profesional.

COSTE DEL PROCEDIMIENTO

	VIA AMISTOSA		VIA CONTENCIOSA	
	\bar{X}	Sx	\bar{X}	Sx
Ex.	124.582	29.35	250.540	70.61
NEx.	123.916	46.76	232.608	81.77

Ex. = Expertos

NEx. = No Expertos

Los resultados obtenidos, (Tabla 1), al clasificar los sujetos en cuatro grupos de profesionales, expertos-menos expertos, y con actitud favorable-no favorable, en cuanto a la utilización de la vía amistosa para resolver estos temas y compararlos con las tácticas usadas por ellos para conseguir el acuerdo son:

El grupo de profesionales expertos que se muestran de acuerdo con la utilización de la vía consensual utilizan generalmente como táctica el ponerse de acuerdo con el abogado de la otra parte (74,1%), en segundo lugar, utilizan el contactar con la otra parte interesada (55,6%), en tercer lugar ponen, directamente de acuerdo, a los miembros de la pareja (14,8%), y por último, dicen haber conseguido el acuerdo, gracias a la iniciativa de la otra parte (3,7%). En ningún caso, este grupo, se ha servido del psicólogo, para

conseguir el acuerdo, aunque el 55,6% opina que la intervención de este profesional, ayudaría a resolver de forma adecuada estos temas matrimoniales.

Los profesionales expertos pero en desacuerdo con la utilización de la vía amistosa, dicen haber conseguido el acuerdo, mediante el contacto con el otro abogado (87,5%); poniéndose de acuerdo con la otra parte (37,5%), y en un 25%, han conseguido tramitar los procedimientos, por vía consensual, gracias a la iniciativa de la otra parte y el 12,5% de los acuerdos finales, lo consiguieron poniendo a los interesados de acuerdo. En este grupo, tampoco hay ningún abogado que haya utilizado al psicólogo como forma de conseguir acuerdos, aunque un 62,5% considera, que este tipo de intervención psicológica ayudaría a resolver de mejor forma estos temas.

En cuanto al grupo de abogados menos expertos, y con opinión favorable a la utilización de la vía amistosa, para solucionar este tipo de procedimientos, tenemos que el 65,5%, consigue tramitar estos asuntos por vía amistosa, poniéndose de acuerdo con la parte contraria; en segundo lugar, lo consiguen en el 58,6%, contactando con el abogado contrario; en un 24,1%, han puesto a las partes de acuerdo; y sólo en el 6,9% se ha conseguido por iniciativa de la otra parte. Como ocurre en los grupos anteriores, ningún abogado se sirve del psicólogo, para alcanzar los acuerdos, aunque el 51,7% opina, que este tipo de colaboración podría ser útil.

El cuarto, y último grupo de abogados menos expertos y con opinión en desacuerdo, con la utilización de la vía consensual, tenemos que, el 85,7% de los acuerdos lo consiguen al contactar con el abogado contrario; el 14,3% lo

consiguen, contactando con la otra parte, y en ninguna ocasión, ponen de acuerdo a los interesados. De igual manera que en los grupos anteriores, ninguno de estos profesionales han utilizado al psicólogo para poder resolver legalmente el trámite por vía consensual, y esta actuación, se corresponde con su opinión, respecto a la intervención de este profesional, ya que el 100% de los abogados de este grupo opina que no es útil.

GRUPOS ABOGADOS

TABLA I

TACTICAS USADAS	AE/A (n=27)	AE/NA (n=8)	ANE/A (n=29)	ANE/NA (n=7)
1. Ponerse de acuerdo con el abogado contrario	74.1%	87.5%	58.6%	85.7%
2. Ponerse en contacto con la otra parte	55.6%	37.5%	65.5%	14.3%
3. Poner de acuerdo a los interesados	14.8%	12.5%	24.1%	0
4. Iniciativa de la otra parte	3.7%	25%	6.9%	0
5. Intervención de un psicólogo	0	0	0	0

AE/A = Abogado experto favorable a vía amistosa.
 AE/NA = Abogado experto en desacuerdo con la vía amistosa.
 ANE/A = Abogado menos experto favorable a vía amistosa.
 ANE/NA = Abogado menos experto en desacuerdo con la vía amistosa.

De las proporciones medias obtenidas de relacionar los cuatro grupos de abogados anteriores, con las tácticas usadas por ellos, para conseguir tramitar los procedimientos por vía amistosa, podemos destacar, que los abogados

menos expertos, que están en desacuerdo con la vía amistosa, utilizan menos la táctica de comunicarse con la otra parte, que los que están de acuerdo, siendo esta diferencia significativa ($z=2.448283$; $p < .01$). También la utilizan menos, que los expertos que están de acuerdo en la vía amistosa, siendo significativa esta diferencia ($z = 1.949427$; $p < .05$). El grupo de abogados expertos, utiliza menos la táctica de esperar a que la otra parte tenga la iniciativa, cuanto más de acuerdo está en la vía amistosa, siendo esta diferencia significativa ($z = 1.889859$; $p < .05$)

	AE/A	AE/NA	ANE/A	ANE/NA
Colaboración Psicólogo	55.6%	62.5%	51.7%	0

AE/A = Abogado experto favorable a vía amistosa.
 AE/NA = Abogado experto en desacuerdo con la vía amistosa.
 ANE/A = Abogado menos experto favorable a vía amistosa.
 ANE/NA = Abogado menos experto en desacuerdo con la vía amistosa.

En relación a la opinión que los abogados tienen, respecto a la colaboración del psicólogo, tenemos que el grupo de profesionales menos expertos y en desacuerdo con la tramitación amistosa, no consideran útil dicha colaboración, en contraste con el grupo de expertos en desacuerdo con la vía amistosa, siendo esta diferencia significativa ($z = 2.561738$; $p < .01$). Según esto, los abogados que han llevado más casos matrimoniales, aunque no estén a favor de la vía amistosa, consideran la intervención del psicólogo más útil que los abogados que, sin estar tampoco a favor de

la vía amistosa, cuenta con una menor experiencia. Quizás esta diferencia pueda explicarse porque la mayor experiencia con este tipo de problemática les induzca a pensar que podría resultar interesante una colaboración psicológica, aunque no está muy claro a qué tipo de intervención psicológica se refieren.

Entre los abogados menos expertos, los que están a favor de la vía amistosa, presentan una opinión más favorable a la colaboración psicológica que lo que no lo están, resultando esta diferencia significativa ($z = 2.491364$; $p < .01$).

Los abogados expertos a favor de la vía amistosa, también consideran más útil la colaboración del psicólogo, que los abogados menos expertos y en desacuerdo con dicha tramitación amistosa, siendo esta diferencia significativa ($z=2.638004$; $p < .01$).

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Los resultados expuestos, nos muestran, por un lado, la forma de intervenir los abogados en los procedimientos matrimoniales para resolver legalmente los conflictos de pareja, teniendo en cuenta, la experiencia profesional y su actitud ante la forma de resolver estos asuntos y ante la intervención del psicólogo en el mundo legal. Por otro lado, confirman los supuestos planteados con anterioridad.

Respecto a la intervención del abogado para resolver los procedimientos matrimoniales podemos observar, que los abogados tramitan más separaciones que divorcios. Este hecho es lógico con el modelo de divorcio en dos etapas que la reforma de 1981 introduce en el Código Civil. No se puede acudir al divorcio directamente, a menos que se atente contra la vida del otro, primero hay que separarse, lo que retrasa el divorcio e incluso, disuade a muchas parejas a volver a empezar con nuevos papeleos y gastos. Al divorcio, acceden, en general, aquellas parejas que quieren volver a casarse (Alberdi, 1987).

Las características de las parejas que acuden al despacho del abogado tienen edades entre 31-40 años, llevan de 5-10 años casados, una media de dos hijos por pareja y de clase media. La persona que demanda información al abogado es, principalmente, la mujer. Esto no es indicativo de que quiera separarse, sino que, con más frecuencia que los hombres, sienten que sus expectativas de relación no se han cumplido (Peplau y Gordon, 1985).

De este grupo de parejas, más del 70% no estaban de acuerdo a la hora de separarse, lo cual complica la

situación por la asimetría de la relación (Díaz Usandivaras, 1986). Pese a este no acuerdo inicial, los abogados consiguen aumentar el porcentaje de parejas con acuerdo, posibilitando más tramitaciones por vía amistosa. Sin embargo, la diferencia no significativa de los dos tipos de incumplimientos, vía amistosa, vía contenciosa, nos indica que el acuerdo conseguido por el grupo de abogados, no es real. Los incumplimientos de los acuerdos son realizados, preferentemente, por los hombres, siendo los motivos más frecuentes los relacionados con el tema económico (pensión, división de bienes, etc.).

En cuanto a la duración y coste del procedimiento, los datos son claros, el procedimiento por vía amistosa tiene una duración de unos 3-4 meses, mientras que el contencioso puede durar de 21-25 meses. Así mismo el coste del amistoso es de 125.000 pts., mientras que el del contencioso de 250.000 pts. Hay que puntualizar, que en el caso del procedimiento amistoso, se pueden utilizar unos mismos representantes legales, por lo que la cifra de 125.000 pts. sería entre los dos miembros de la pareja, mientras que un procedimiento contencioso, obliga a tener representación legal distinta, por lo que las 250.000 pts. sería para cada miembro de la pareja.

El grupo de abogados que ha tramitado los procedimientos anteriormente citados, presenta una edad media de 35 años, en su mayoría, hombres, y con una experiencia media profesional, en derecho matrimonial de 9,5 años. Más del 60% de estos profesionales está a favor de la utilización de la vía amistosa para resolver mejor estos temas de familia, y utilizan como estrategia principal, para conseguirla, el ponerse en contacto con el abogado de la

otra parte, y en ningún caso lo consiguen mediante la intervención del psicólogo, pese a considerar, el 50% de estos profesionales, que una colaboración psicológica ayudaría a resolver los conflictos planteados por las parejas. Esta diferencia observada, entre la opinión de los abogados con respecto al psicólogo y su no utilización como colaborador, nos muestra que el psicólogo es percibido, por los abogados, como un psicoterapeuta, con funciones tradicionales de ayudar emocionalmente a las parejas, y a conseguir que sigan funcionando como pareja, pero no como colaborador en el mundo jurídico.

Si consideramos la experiencia profesional de los abogados, en función del número de casos tramitados en un año, tenemos que los abogados expertos cuentan con una mayor porcentaje de acuerdos previos y consiguen más acuerdos finales, por lo que tramitan más procedimientos por vía amistosa que los menos expertos, siendo estas diferencias significativas Sin embargo, en relación a los incumplimientos, aunque el grupo de expertos presente un menor porcentaje de incumplimientos que el grupo de menos expertos, esta diferencia no es significativa, por lo que los acuerdos no son reales. Parece que la experiencia profesional favorece el tramitar más procedimientos por vía amistosa. Estos abogados expertos, cobran más que los menos expertos en los procedimientos contenciosos.

Los abogados menos expertos, en desacuerdo con la vía amistosa, utilizan menos la táctica de comunicarse con la otra parte que aquellos no expertos que sí están de acuerdo con la vía amistosa, siendo esta diferencia significativa. Este primer grupo, también la utiliza menos que los expertos que están de acuerdo con la vía amistosa, siendo

esta diferencia, también significativa. El grupo de abogados expertos, utiliza menos la táctica de esperar a que la otra parte tome la iniciativa, cuanto más de acuerdo está en la vía amistosa, siendo esta diferencia significativa. Estos resultados nos indican, que la táctica de comunicarse con la otra parte, que es la forma más lógica de reunir a los interesados y orientar la negociación para un acuerdo, la utilizan más los expertos con opinión favorable a la vía amistosa. Por otra lado coincide con ser, este grupo, el que menos use la táctica de esperar a que la otra parte tome la iniciativa, indicativa de no estar muy dispuesto a orientar al acuerdo.

El grupo de abogados menos expertos, y en desacuerdo con la vía amistosa, considera menos útil la colaboración del psicólogo en los procedimientos matrimoniales, que el grupo de expertos en desacuerdo con la vía amistosa y que el grupo de expertos a favor de dicha vía, siendo ambas diferencias significativas.

Finalmente, los datos del presente estudio, nos indican que:

1. El procedimiento contencioso se usa más que el consensual para resolver conflictos de relación de parejas.
2. El procedimiento amistoso presenta ventajas, respecto al contencioso. Se resuelve legalmente en menos tiempo y su coste es inferior al del procedimiento contencioso. Sin embargo, los acuerdos no se mantienen después de concluido el procedimiento legal, produciéndose incumplimientos a los acuerdos pactados por la pareja y su abogado.

3. La experiencia profesional, la opinión favorables a que los procedimientos familiares, se resuelvan por vía amistosa, y una postura positiva ante la intervención del psicólogo en estos temas, posibilita una mayor tramitación de asuntos por vía consensual. Este aumento de tramitaciones amistosas, ya de por sí, conlleva beneficios para el núcleo familiar, evitando procedimientos contenciosos que agudicen la conflictividad ya existente entre ambos miembros de la pareja.
4. Los incumplimientos realizados por una o ambas partes, una vez tramitado el procedimiento amistoso, nos indica que estos acuerdos son poco sólidos, pudiendo deberse más al convencimiento del abogado experto y no al de la propia pareja.

ESTUDIO 2: Intervención psicológica

Introducción

Método

Resultados

Resumen y Conclusiones

ESTUDIO 2: Intervención psicológica

INTRODUCCION

En este segundo estudio se pretende analizar el trabajo de los psicólogos en los Juzgados de Familia, estudiando los informes periciales solicitados en los procedimientos contenciosos de separación o divorcio, así como las resoluciones judiciales y su relación con dichos informes.

El informe pericial es "la opinión objetiva e imparcial, de un técnico o especialista, con unos específicos conocimientos científicos, artísticos o prácticos, acerca de la existencia de un hecho o la naturaleza del mismo" (Mauleón, 1984). La formación del psicólogo en el área del peritaje en España, es aún precaria y el perito recoge su saber de su experiencia clínica (Bernal, 1990), con la consiguiente dificultad de saber distanciarse del rol de clínico para acercarse a un contexto legal y aportar respuestas concretas (Rosenhan, 1982).

Las dificultades de la evaluación psicológica del núcleo familiar para realizar un peritaje son grandes, ya que no se cuenta con modelos conceptuales que sean alternativos a los modelos clínicos, ni se traducen los conocimientos psicológicos para aplicarlos a los contextos legales, ni se dispone de instrumentos de evaluación psicológica diseñados para su utilización en dichos contextos (Grisso, 1986, 1987). A estas dificultades se le añaden otras relativas al momento en que tiene lugar la evaluación psicológica, momento en que el proceso está muy avanzado y los enfrentamientos de ambas partes las colocan

en una posición nada propicia para que se produzca dicha evaluación (Bernal, 1990) y lo que hace es reforzar su enfrentamiento, al tener que concluir sobre la idoneidad de ambos padres. El psicólogo reproduce, sin proponerselo, la forma de trabajar los abogados en el procedimiento contencioso: división de las partes basada en la existencia de un culpable y un inocente (Grossman, 1985). Finalmente, otro problema en relación a la evaluación psicológica, es la reducción de ésta, en los Juzgados de Familia, a cuestiones relacionadas exclusivamente con los hijos, sin poder tratar otros. El tema económico es el punto más conflictivo y condiciona el acuerdo, en otros temas, como el de las relaciones con los hijos (Martín y Bernal, 1989).

Otro elemento importante en este estudio es la decisión judicial. El Juez actúa como intermediario en la resolución de un conflicto cuando las partes implicadas han agotado sus estrategias y no han conseguido solucionarlo (Aubert, 1967; Garzón, 1988). Los litigantes acuden a la justicia con la creencia de encontrar una solución. En este sentido, Friedman (1972; 1975) señala que "las leyes civiles proporcionan a los ciudadanos una oportunidad para intentar restaurar las injusticias percibidas apelando a sus derechos". Sin embargo, la actuación judicial, a la hora de emitir sentencia, no está sujeta a regulaciones, por lo que ésta queda en manos de la propia racionalidad del juez, produciendo una posible disparidad en las sentencias (Gaudet, 1938; Konecni y Ebbsen, 1982; Saks y Hastie, 1978).

En los casos en donde el juez debe decidir sobre la guarda y custodia, la práctica legal se basa en el principio de "los mejores intereses del niño/a" y la interpreta-

ción de lo que es bueno para los niños, corre a cargo del juez. Sobre este principio se justifica la actuación del psicólogo que gira en torno a la competencia de las partes, acogiéndose el juez, en general, a la opinión psicológica sobre "lo mejor" para el niño para fundamento de su decisión judicial.

La evaluación psicológica, realizada para contestar al objetivo de dicha evaluación, debe estar basada en unos criterios claros de donde aislar las variables psicológicas y sociales que hayan de tomarse en consideración. Estas variables están relacionadas con acciones y tareas parentales necesarias para cubrir las necesidades de los hijos (Clausen, 1968), aunque la autopresentación de los padres ante el evaluador puede dar lugar a malos entendidos, bien por la necesidad de aparecer como idóneas, bien por factores de estrés situacional que los hacen aparecer como poco idóneos (Grisso, 1986).

Estas dificultades planteadas en el proceso de evaluación, tanto por la propia metodología del psicólogo, como por las variables de los propios sujetos evaluados, como por las decisiones judiciales, basadas en dichas evaluaciones, nos han llevado a plantear el presente estudio, con el fin de analizar los siguientes hipótesis:

- 1.- El objetivo que sirve de base al informe, no es adecuado para solucionar los enfrentamientos que tiene la pareja.
- 2.- Las técnicas utilizadas para la elaboración del informe pericial, son pruebas tradicionales, de la práctica clínica, y no adecuadas al contexto legal.

- 3.- Las conclusiones del informe tratan sólo del tema hijos, cuando los conflictos principales están en los temas económicos y su no resolución afecta a los relacionados con los hijos.
- 4.- Las conclusiones a las que llegan los psicólogos de los juzgados de Familia, facilitan de tal forma la toma de decisión del juez, que hacen recaer sobre el psicólogo la competencia del juez, que es la de dictaminar con qué padre deben quedar los hijos.

METODO

Muestra

El grupo de estudio está formado por 85 informes psicológicos realizados por psicólogos adscritos a los Juzgados de Familia de Madrid. Existen 7 Juzgados y cada uno de ellos cuenta con un equipo psicosocial (psicólogo y asistente social) aunque en los informes recogidos sólo se ha contado con 6 juzgados ya que uno no fue posible que colaborara. Estos 85 informes se refieren a aquellos casos de separación o divorcio que por algún motivo se haya solicitado el informe pericial psicológico, y todos ellos han acudido al procedimiento contencioso. Esto significa que las partes no están de acuerdo en alguno, o en todos los puntos del convenio regulador, y el juez de Familia es el competente para decidir por ellos, por lo que se vale del informe, como un elemento más de todo el procedimiento, para que le ayude a esta toma de decisión.

Procedimiento

A.- Elaboración del material para la recogida de datos.
En el Anexo se adjunta una copia de las hojas de recogida de información que comprende:

- Datos sociológicos de las parejas.
- Datos del procedimiento.
- Objetivo del informe.
- Procedimiento a seguir y pruebas utilizadas.
- Resultado del informe.
- Dictamen del juez.

B.- Gestiones realizadas para tener acceso a los Juzgados de Familia y que permitan leer los autos.

Esta es una de las partes más duras del trabajo. Las gestiones duraron dos meses y medio y se desarrollaron de la siguiente manera:

- Primero se procedió a una petición formal siguiendo los cauces establecidos en la Administración de Justicia. Al no tener éxito, se emprendió un camino distinto; a través de un Director General, se llegó al Decano de Jueces, y tras una entrevista donde se le explicó el motivo de la investigación, éste envió una notificación a cada uno de los 7 jueces de Familia, cuyo objetivo era la petición de colaboración en la citada investigación.
- La segunda parte, consistió en ir juzgado por juzgado, y pedir una entrevista con el Juez. Los pasos que se dieron fueron:
 - . Contactar con el Juez. Se consiguió, con cierta dificultad, según el juzgado, ya que el personal de la puerta tiene orden de no molestar al Juez, y no se le pudo convencer con facilidad, necesitando varios días para contactar con cada Juez.
 - . En la entrevista con el Juez se explicó el motivo de la petición y quedamos en que solicitaría una lista de los casos donde se había requerido el informe pericial, en el año 1988, al psicólogo que tenía adscrito a su juzgado.

- . Obtención de la lista. En algunos juzgados se encargó el Juez personalmente y se realizó con agilidad, en otros costó bastante contar con la citada lista y en un juzgado se prescindió por la demora del psicólogo.
- . Entrevista con el Secretario de cada juzgado para que pidiera a los administrativos correspondientes la lista de los casos proporcionada por los psicólogos.

C.- En tercer lugar, se llevó a cabo la recogida de los datos conforme a los puntos señalados en el apartado A. Esta recogida tuvo lugar durante tres meses previa lectura de los autos correspondientes a los informes de los casos pedidos, en el despacho del propio juez, en unos casos, o en la antesala del despacho, en otros.

El diseño de recogida de información sobre el informe psicológico se realizó en función de los siguientes apartados:

1. Objetivos.-

Se establecieron dos categorías:

Idoneidad de las partes.- El informe se planifica, con el objeto de evaluar qué padre es más idóneo, para obtener la guarda y custodia de los hijos. Estos casos se refieren a aquellas parejas que tramitan su separación o divorcio mediante un procedimiento contencioso, sin acuerdo en diversos puntos del Convenio Regulador, siendo uno de ellos

el tema hijos y también los casos en que las medidas adoptadas por el juez no satisfacen a un miembro de la pareja y se apela dichas medidas reclamando la guarda y custodia de los hijos informando de su idoneidad como padre o madre y cuestionando la del otro progenitor.

Régimen de visitas adecuado para las necesidades de los hijos.- Este tipo de informe suele pedirse, o bien por parte del padre o la madre, que tiene a los hijos consigo y quiere que este derecho del otro padre se restrinja, o por parte del progenitor que ostenta este derecho y quiere que se amplie, pidiendo a la vez la guarda y custodia.

2. Procedimiento seguido

El informe comienza, después de describir el objetivo del mismo, con un resumen de los autos, y tras la entrevista al grupo familiar por separado, y en algunos casos de forma conjunta (padre o madre / hijo,a), se procede a evaluar a los integrantes del grupo familiar, mediante una serie de pruebas, generalmente de personalidad y de habilidades pedagógicas, que varían en función de la orientación psicológica de los profesionales. Los resultados de la evaluación sirven para emitir el dictamen pericial sobre la pregunta más frecuente, que se refiere a la competencia de los padres para obtener la guarda y custodia.

En lo que respecta a las técnicas utilizadas, podemos clasificarlas en:

- Cuestionarios.
- Técnicas proyectivas.
- Entrevistas.

- Observación.
- Otro tipo de información.

Esta clasificación se llevó a cabo en función de las pruebas que realmente habían empleado los psicólogos para realizar los informes, estableciendo un recuento de estas pruebas. Describimos brevemente las principales pruebas usadas:

CUESTIONARIOS:

El cuestionario más comunmente utilizado es el 16PF de Cattell, en adaptación española por TEA, Madrid 1975. Este cuestionario tiene como fin ofrecer una visión completa de la personalidad en un corto período de tiempo (Seisdedos, N. 1981). Se diseñó para aplicarse a partir de los 16 años. Los rasgos de personalidad evaluados se encuadran dentro del contexto de una teoría general de la personalidad (Cattell, 1972). La fiabilidad del 16PF es, como la de todo cuestionario, de tipo medio. Para aumentar la fiabilidad se recomienda pasar dos formas paralelas. La validez de hipótesis es más alta cuando se correlacionan las puntuaciones directas de las escalas con los factores puros.

En segundo lugar, es utilizado el TAMAI, test autoevaluativo Multifactorial de adaptación infantil, (TEA Ediciones, S.A. Madrid 1983) de P. Hernández y Hernández. Tiene un ámbito de aplicación a edades comprendidas ente 8 y 18 años.

El TAMAI es un cuestionario de 175 elementos, contruidos por frases a las que hay que dar respuesta afirmativa o negativa. A través de las respuestas podemos saber cuatro tipos de inadaptación: personal, social, familiar y escolar.

El cuestionario investiga, además, el área de las actitudes educadoras de los padres, poniendo de relieve el estilo educativo de los mismos y las discrepancias entre el estilo de ambos (Hernández y Hernández, 1983).

El índice de fiabilidad obtenido utilizando el procedimiento de las dos mitades oscila entre 0.87 a 0.67 (el nivel más bajo corresponde a la muestra del ciclo medio EGB).

En tercer lugar se utiliza el EPQ, de Eysenck (1976) en sus dos versiones, para niños y adultos. Es un cuestionario de personalidad que evalúa las tres dimensiones propuestas por este autor: extraversión, neuroticismo y psicoticismo.

TECNICAS PROYECTIVAS:

A pesar de los amplios antecedentes históricos de estas técnicas en la literatura psicológica, y su difundida utilización (Rabin, 1981), existen serias dudas sobre el valor científico de los datos que a través de ellos se recogen (Fernández Ballesteros, 1980). Los principales problemas que presentan son, por un lado el no cumplir con todos los objetivos que conlleva el estudio científico del comportamiento de

un sujeto (descripción, clasificación y explicación); estas técnicas tan sólo pueden cumplir, si acaso, las de descripción y clasificación y rara vez los de predicción (Ainsworth, 1971; Exner, 1976; Holt, 1970). Por otro lado, el análisis que se realiza de la estructura de la personalidad es en base a una serie de atributos intrapsíquicos, que no han sido validados previamente, y finalmente, otro problema, radica en la propia situación de exploración, ya que no existe tipificación de la consigna que se da al sujeto, resultando altamente sensible estas técnicas, a la experiencia del examinador y a la relación que mantenga con el examinado.

De entre los Test proyectivos más utilizados en estos informes psicológicos, tenemos la técnica de Rorschach, que presenta dificultades al intentar medir la fiabilidad, y los estudios sobre validez son contradictorios (Fernández Ballesteros, 1984).

El TAT, es una prueba de respuestas libres, que presenta una gran dificultad, para aplicar medidas cuantitativas y significativas, y también para determinar, que criterios son lo suficientemente independientes, relevantes y/o útiles para validar sus resultados (Fernández Ballesteros, 1984).

El Test del dibujo de la familia, (Corman, 1967) Versión castellana: I. Acacia Ibañez. Kapelusz. Buenos Aires (1967) presenta una interpretación de la personalidad basado en la interrelación de la forma y el contenido del dibujo, infiriendo sobre el mundo interno del niño (Lluís Font, 1981).

ENTREVISTA

Es la prueba más usada en toda evaluación psicológica. Presenta una gran complejidad que pone de manifiesto las dificultades para un acercamiento científico a esta técnica (Haynes, 1978; Silva, 1981; Silva y Pelechano, 1978). Los datos obtenidos, acerca de la fiabilidad de esta prueba (Sobell y Sobell, 1975; Summers et al., 1970; Wener y Coulter, 1962) son contradictorios, pero cuanto más estructurada es, se cometerán menos errores. Respecto a la validez, no se pueden sacar conclusiones definitivas, ya que las verbalizaciones de los sujetos una veces reflejan su conducta, en la vida real y otras no.

Haynes y Jensen (1979) hacen una serie de recomendaciones que la hacen más válida, como son:

Informar de los elementos cruciales de la entrevista, (contenido de la misma, forma de recoger la información, quién la recoge, etc.).

Determinar la validez criterial de la información, recogida en la entrevista, comparándola con datos obtenidos en otras fuentes.

Evaluar la fiabilidad de la información, por medio de entrevistadores independientes, o por el mismo entrevistador.

No utilizar la entrevista, como única fuente de recogida de información y evaluación.

3. Conclusión del Informe

El psicólogo termina el informe contestando a la pregunta objetivo de dicho informe que, en general, se

refiere, a qué padre es más idóneo para hacerse cargo de los hijos, y de qué manera se establece el régimen de visitas para el otro padre que no tiene a los hijos.

Se realiza un recuento de estas conclusiones, en función de las siguientes posibilidades, respecto a la guarda y custodia de los hijos:

- 1.- El padre es más idóneo.- El psicólogo se pronuncia sin ninguna duda sobre el padre, siempre en base a los resultados del informe.
- 2.- La madre es más idónea.- La postura del psicólogo es tan clara como en el caso anterior, pero esta vez es la madre.
- 3.- Ambos son idóneos.- El profesional deduce del informe que los dos padres presentan características adecuadas para ocuparse de los hijos y no se define por ninguno.
- 4.- Ambos son idóneos, pero el padre.- El psicólogo establece la idoneidad de ambos padres pero en igualdad de condiciones se inclina por el padre.
- 5.- Ambos, pero la madre.- Se repite la situación anterior aunque en este caso es la madre la elegida.

Respecto al Régimen de visitas, que es el derecho del que no tiene la guarda y custodia, se complementa con el punto anterior, de tal forma, que se asigna el régimen de visitas, al padre que no se le ha concedido la guarda y

custodia. En esta asignación del Régimen de visitas se puntualiza dos modalidades:

- Régimen de visitas normal.- Es el que se establece rutinariamente, y que consiste en tener a los hijos un fin de semana alterno, el 50% de las vacaciones de semana Santa y Navidad y un mes en verano.
- Régimen de visitas especial.- Se especifica una relación con los hijos diferente a la anterior, y que está encaminada a tener un contacto más estrecho con ellos.

4. Dictamen judicial

Estos dos puntos sobre los que opina el psicólogo en las conclusiones del informe, se vuelven a retomar de la sentencia judicial, y el juez se pronuncia sobre ellos, además de considerar otros temas, como el uso del domicilio.

Las posibles decisiones del juez son las mismas que ya hemos expuesto, excepto la n° 3 (ambos son idóneos) ya que el juez está obligado a pronunciarse sobre uno de los dos padres (o considerar que ninguno es idóneo). En la recogida de información, hemos considerado esta tercera alternativa de "ambos", cuando el juez da la guarda y custodia de un hijo a un padre y la del otro, al otro padre.

En relación al Régimen de visitas se asigna, igualmente, al padre o madre que no tiene la guarda y custodia.

D.- Tratamiento de los datos.

De los datos obtenidos de los 85 expedientes se realizó un recuento de frecuencias y porcentajes con el objeto de obtener un análisis descriptivo de las parejas que habían acudido a los juzgados a tramitar su separación o divorcio y realizar un estudio de los informes psicológicos adjuntos a estos 85 expedientes con el propósito de observar la forma de trabajar del psicólogo a la hora de ayudar a resolver estos temas de Familia. Para ello se tuvo en cuenta: qué objetivos sirven de base a los informes, qué procedimientos siguen, qué técnicas se utilizan y a qué conclusión llegan los profesionales en cada uno de estos informes, comparando estas conclusiones psicológicas con las resoluciones judiciales. En cuanto a las técnicas utilizadas, 1) se realizó un recuento total de las pruebas de los 85 informes, teniendo en cuenta que podía usarse más de una prueba en cada caso y con el fin de saber las veces quehan sido usadas, 2) se consideró, en los 85 informes, si se habían utilizado o no alguna de las pruebas de las cuatro clases de técnicas posibles, dividiendo el resultado obtenido de cada una de ellas por el número total de informes de la muestra. Con esto se pretende conocer en qué proporción es utilizada cada grupo de pruebas en los informes.

RESULTADOS

El número de informes obtenidos en los 6 Juzgados de Familia durante un curso, exceptuando los que estan en poder del Fiscal y los que han sido contestados son 85. Las parejas evaluadas con sus hijos en estos informes, presentan una edad de 30-40 años, con hijos de entre 5-10 años y de clase media.

EDAD	% n=85	AÑOS MATRIMONIO	% n=85
20 - 30 AÑOS	19.4	- DE 5 AÑOS	22.3
31 - 40 "	43.0	5 - 10 "	41.2
41 - 50 "	33.5	11 - 20 "	30.6
+ DE 50 "	4.1	+ DE 20 "	5.9

HIJOS	%n=165	NIVEL SOCIAL	% n=85
- DE 5 AÑOS	14.0	MUY ALTA	8.2
5 - 10 "	47.0	ALTA	21.2
11 - 15 "	28.4	MEDIA	42.3
16 - 20 "	6.6	MEDIA BAJA	25.9
+ DE 20 "	4.0	BAJA	2.3

El 69% de las personas que toman la iniciativa de presentar la demanda de separación son mujeres, y en el caso de divorcio presentan un tanto por ciento menos alto (53%) pero sigue siendo mayor que el de los hombres.

	EL	ELLA
SEPARACION (n=68) %	31	69
DIVORCIO (n=17) %	47	53

En cuanto a la petición del informe pericial, está repartido entre ambos sexos y el juez, sin que existan diferencias.

PETICION INFOR.	% n=85
EL	33
ELLA	34
JUEZ	33

De los 85 informes, el objetivo que sirve de base para la realización del mismo es, en el 82.4% de los casos, el de evaluar qué padre es más idóneo para cuidar a los hijos y por lo tanto asesorar al juez sobre la concesión de la guarda y custodia de éstos. En el 16.6% restante el objetivo está en informar sobre el régimen de visitas adecuado y si existe alguna dificultad para que se ejerza por uno de los padres.

OBJETIVO INFORME	% n=85
IDONEIDAD PARTES	82.4
REGIMEN VISITAS	16.6
OTROS	1

En el 88,3% de los informes estudiados, no figura el resumen de los autos, necesario para centrar la evaluación en un contexto jurídico. Asimismo, en el 100% de estos informes no se presentan los resultados de las pruebas y en el 23,5% de los informes no se mencionan el tipo de pruebas practicadas.

	SI	NO
RESUMEN AUTOS (n=85)	11.7	88.3
RESULT. PRUEBAS (n=85)	0	100
IDENTIF. PRUEB. (n=85)	76.5	23.5

PRUEBAS UTILIZADAS EN LOS 6 JUZG.	% n=347
ENTREVISTAS	34.5
CUESTIONARIOS	28.5
PROYECTIVAS	25.5
OBSERVACION	11.5
TOTALES	100

Tabla I

ENTREVISTA	% n=119
SEMI-EST	57.1
ABIERTA	38.7
ESTRUCTURADA	4.2

PROYECTIVAS	% n=89
ROSCH	28
FAMIL	24.8
MACH	19
TAT	16.8
DIBJ-LIB	6.8
CAT	4.6

CUESTIONARIOS	% n=99
16PF	33.3
TAMAI	25.3
EPQ	19.2
CHTE	9.1
CEP	7.1
MMPI	3
IAC	3

OBSERVACION	% n=40
NO SISTEM.	60
SISTEMAT.	40

Respecto a las técnicas mencionadas en los informes, (Tabla I), podemos observar que las que más se utilizan son las entrevistas, que representan un 34,5%, preferentemente la entrevista semiestructurada, con un 57,1% seguida de la entrevista abierta con un 38,7% y sólo se utilizó la estructurada en el 4,2% restante.

La segunda técnica que se menciona en los informes son los cuestionarios, con un 28,5%, siendo los más utilizados el 16PF, seguidos de el TAMAI y el EPQ (Tabla I).

La pruebas proyectivas, son utilizadas casi en la misma proporción (25,5%), ocupando el primer lugar el Rorscharch.. seguido por el test de dibujo de la familia, de Corman, el Machover y el TAT (Tabla I).

La técnica menos veces utilizada es la observación, (11.5%), usándose preferentemente la observación no sistemática.

El peso que cada una de estas clases de técnicas presenta, en la elaboración del informe pericial, en relación a la totalidad de las técnicas utilizadas, es diferente. La entrevista es la técnica que más importancia se le da a la hora de proceder a la utilización de pruebas para elaborar el informe pericial (0,83) para el juez de Familia.

Proporción del uso de las técnicas en el informe

ENTREVISTA	0.83
CUESTIONARIO	0.50
PROYECTIVA	0.49
OBSERVACION	0.04

Los cuestionarios, preferentemente los de personalidad, y las pruebas proyectivas, ocupan el siguiente nivel de importancia, par elaborar el mencionado informe. Ambas técnicas presentan pesos muy similares (0,50 y 0,49), respectivamente). El peso menor para confeccionar el informe pericial; en esta muestra, lo tienen la técnica de observación (0,4).

Si nos fijamos en la utilización de cada técnica, según cada juzgado, en relación al total de su uso en todos los juzgados, la entrevista se emplea en proporciones similares, excepto en el juzgado E, cuyo resultado se desvirtua al no mencionar ninguna otra técnica, en la elaboración de los informes, aunque se deduce que sí las utiliza. Los cuestionarios son utilizados también por todos los juzgados. Las técnicas proyectivas, se utilizan en unos juzgados, (B y D, sin contar con el E y F, que no hay datos, pero si los utilizan) y no en otros, o escasamente (C y A). La observación, también es utilizada por todos los juzgados, aunque el A la utiliza más y el B, menos. (Tabla II)

Porcentaje de cada una de las técnicas, según cada juzgado, en relación al total de cada técnica.

JUZG.	ENTREV.	CUEST.	PROYECT.	OBSERV.
A	16	32.3	7.8	35
B	21.9	21.2	31.2	12.5
C	17.6	18.2	0	20
D	21.9	28.3	61	20
E	4.1	--	--	--
F	18.5	--	--	12.5

Tabla II

Si nos fijamos en los resultados de los informes emitidos en cada uno de los juzgados, tenemos que el psicólogo del juzgado A considera idóneo para ocuparse de los niños al padre o a la madre en el mismo número de casos (14,3%). En el 71,4% concluye que ambos padres son adecuados pero se inclina por el padre en el 42,8% y por la madre en el 28,6%. Estas conclusiones las emite, en base a un paquete de técnicas utilizadas, y que en función del total practicadas en dicho juzgado, tenemos que un 45% de las pruebas utilizadas son cuestionarios, preferentemente el EPQ y el 16PF, ambos de personalidad y en un 26,8% emplea la entrevista, abierta y semi-estructurada. Un 19,7% de las pruebas que utiliza son técnicas de observación, tanto sistemáticas como no sistemáticas; y el uso de las pruebas proyectivas es escasa. (Tablas III y IV)

Resultados informe psicológico	JUZGADOS n=85	
	A	B
EL	14.3	--
ELLA	14.3	62.5
AMBOS-EL	42.8	--
AMBOS-ELLA	28.6	25
AMBOS	--	12.5

% pruebas utilizadas	JUZGADOS	
	A	B
ENTREVISTA	26.8	34.2
CUESTIONARIO	45	27.6
PROYECTIVA	8.5	31.6
OBSERVACION	19.7	6.6

Tablas III y IV

En el juzgado B (Tabla III), el psicólogo concluye que la madre es la más adecuada para ocuparse de los hijos en el 62,5%, en ningún caso el padre. En el 37,5% de los casos considera que ambos están capacitados, aunque en un 25% se inclina por la madre y en el 12,5% restante no se define por ninguno en concreto. Estas conclusiones las realiza, mediante el empleo de un 34% de entrevistas semi-estructuradas y abiertas; un 31,6% de pruebas proyectivas, principalmente el Roscharch; y un 27,6% de las pruebas se

refieren a cuestionarios, preferentemente el 16PF; siendo el uso de la observación, escaso. (Tabla IV)

El psicólogo del juzgado C, presenta (Tabla V) unos resultados que indican la idoneidad de la madre sin ninguna duda en el 50% de los casos mientras que estas circunstancias sólo se dan en el 11,1% con respecto al padre. En el 38,9% las conclusiones no son tan clara y el psicólogo expone que ambos padres son adecuados para encargarse de los hijos, inclinándose por la madre en el 16,6%; por el padre en el 5,7% y en el 16,6% restante no se pronuncia por ninguno en concreto. Este psicólogo emplea, para las conclusiones de sus informes, la entrevista, en un 44,7% del total de las pruebas empleadas, siendo esta semi-estructurada y abierta; un 38,3% de las pruebas, se refieren a cuestionarios de personalidad, sobre todo el EPQ y el 17% de las pruebas son técnicas de observación sistemáticas, no utilizando, en absoluto, las técnicas proyectivas. (Tabla VI)

Resultados informe psicológico	JUZGADOS n=85	
	C	D
EL	11.1	17.8
ELLA	50	58.8
AMBOS-EL	5.6	5.8
AMBOS-ELLA	16.6	11.8
AMBOS	16.6	5.8

Tabla V

% pruebas utilizadas	JUZGADOS	
	C	D
ENTREVISTA	44.7	21.5
CUESTIONARIO	38.3	23.2
PROYECTIVA	--	48.7
OBSEERACION	17	6.6

Tabla VI

En el juzgado D (Tabla V) el psicólogo deduce de su evaluación que la madre es la más apta para el cuidado de los hijos en el 58,8% de los casos frente al 17,8% donde es el padre el más idóneo. En el 16,6% concluye que ambos son competentes inclinándose por la madre en el 11,8% y por el padre en el 5,8% de los casos. El 5,8% restante el psicólogo no se decanta por un padre en concreto. En este juzgado, se ha utilizado, preferentemente, las pruebas proyectivas (48,7%), distribuyéndose, por igual, entre el TAT, Machover, el test de Familia y el Roscharch. Los cuestionarios ocupan el 23,2% de las pruebas utilizadas, principalmente, el 16PF y el TAMAI; y un 21,5% de las pruebas utilizadas son las entrevistas semiestructuradas y abiertas. (Tabla VI)

El juzgado n° E (Tabla VII) sólo presenta 4 casos por irregularidades en su funcionamiento que impidió disponer de más datos. De estos 4 informes, en tres de ellos (75%) el psicólogo se inclina claramente por la madre y en un caso (25%) por el padre. En este juzgado, sólo se mencionan, como técnica utilizada para realizar los informes, la entrevista, pero en la lectura de estos, se deduce la

utilización de otro tipo de pruebas, aunque no se especifican. (Tabla VIII)

Resultados informe psicológico	JUZGADOS n=85	
	E	F
EL	25	12.5
ELLA	75	56.3
AMBOS-EL	--	6.3
AMBOS-ELLA	--	18.6
AMBOS	--	6.3

Tabla VII

% pruebas utilizadas	JUZGADOS	
	E	F
ENTREVISTA	100	81.5
CUESTIONARIO	--	--
PROYECTIVA	--	--
OBSERVACION	--	18.5

Tabla VIII

El último de los juzgados, el F (Tabla VII) se repite las conclusiones favorables a considerar a la madre como la más capacitada para cuidar a los niños, ya que en el 56,3% de los casos así lo expone el psicólogo, frente al 12,5% donde es el padre el más recomendado. En el 24,9% la opinión del psicólogo no es tan clara y menciona que ambos padres son adecuados pero inclinándose por la madre en el

18,6% de los informes y por el padre en el 6,3%. En los restantes casos (6,3%) el psicólogo no se pronunció por el padre o la madre. El psicólogo, no menciona las pruebas utilizadas para la realización del informe, y como en el caso anterior, se desprende de la lectura del informe, el uso de técnicas proyectivas, pero sólo menciona la entrevista. (Tabla VIII)

Referente al régimen de visitas podemos observar que se corresponde con los resultados anteriores de guarda y custodia en sentido inverso, es decir, que cuando se concede la guarda y custodia a uno de los padres el régimen de visitas se aplica al otro padre que no está habitualmente con sus hijos. (Tabla X)

En los resultados de las sentencias realizadas en cada juzgado, tenemos que los jueces de los juzgados A, B, E y F coinciden totalmente con las conclusiones de los psicólogos adscritos a sus respectivos juzgados, en cuanto a la concesión de la guarda y custodia y por tanto del régimen de visitas. Los jueces de los juzgados C y D también coinciden en sus sentencias con las conclusiones de sus psicólogos respectivos, aunque se observan ciertas discrepancias que obedecen a aquellos casos en que el psicólogo no se pronuncia por uno de los padres en concreto y concluye que ambos son idóneos; el juez, en este caso, concede la guarda y custodia a la madre. Lógicamente el pronunciamiento del juez respecto al Régimen de visitas se corresponde con la opinión del psicólogo respectivo en la misma proporción que la guarda y custodia. (Tablas IX y X)

RESULTADO INFORME PSICOLOGICO/DICTAMEN JUDICIAL (%)

GUARDA Y CUSTODIA	A		B		C		D		E		F	
	% n=14		% n=16		% n=18		% n=17		% n=4		% n=16	
	PS	JU	PS	JU	PS	JU	PS	JU	PS	JU	PS	JU
EL	14.3	14.3	-	-	11.1	5.6	17.8	17.8	25	25	12.5	12.5
ELLA	14.3	14.3	62.5	62.5	50	72.2	58.8	64.7	75	75	56.3	56.3
AMBOS-EL	42.8	42.8	-	-	5.6	5.6	5.8	5.8	-	-	6.3	6.3
AMBOS-ELLA	28.6	28.6	25	25	16.6	16.6	11.8	11.8	-	-	18.6	18.6
AMBOS	-	-	12.5	12.5	16.6	-	5.8	-	-	-	6.3	6.3

A, B, C, D, E, F = Juzgados
PS = Resultado informe psicólogo
Ju = Resultado dictamen judicial

Tabla IX

R. VISITAS	A		B		C		D		E		F	
	% n=14		% n=16		% n=18		% n=17		% n=4		% n=16	
	PS	JU	PS	JU	PS	JU	PS	JU	PS	JU	PS	JU
EL	42.8	42.8	81.3	93.7	77.8	83.3	76.5	82.3	75	75	75	68.8
ELLA	57.2	57.2	18.7	6.3	22.2	16.7	23.5	17.6	25	25	25	31.3

A, B, C, D, E, F = Juzgados
PS = Resultado informe psicólogo
Ju = Resultado dictamen judicial

Tabla X

Si tenemos en cuenta los datos globales de los 6 juzgados y las resoluciones de estos 6 juzgados observamos que en el 50,6% de los casos, los psicólogos se inclinan por la madre, sin ninguna duda, como la persona más capacitada para hacerse cargo de los niños. En el 18,9%, aunque también se pronuncian por la madre, mencionan la idoneidad de ambos padres. En el 11,8% de los casos, el informe psicológico da al padre con certeza la prioridad, en cuanto a la competencia para atender a los niños, mientras que las conclusiones, en un 10,6%, no son tan claras pero terminan pronunciándose también por el padre. Finalmente en el 8,1% los psicólogos no se pronuncian por el padre o la madre y concluyen que ambos son válidos para hacerse cargo de sus hijos. (Tabla XI)

GUARDA Y CUSTODIA (n=85)	PSICOLOGO	JUEZ
	%	%
EL	11.8	10.6
ELLA	50.6	55.2
AMBOS-EL	10.6	10.6
AMBOS-ELLA	18.9	18.8
AMBOS	8.1	4.8

Tabla XI

Los resultados globales de las sentencias judiciales también dejan de manifiesto, el acuerdo con los resultados psicológicos. Las diferencias que se observan ya se mencionaron más arriba: El aumento del porcentaje de los

casos en los que se asigna la guarda y custodia a la madre se refiere a los casos en que el psicólogo no se pronuncia por uno, padre/madre concreto y el juez se la da a la madre. (Tabla XI)

Respecto al régimen de visitas, se observa la misma correspondencia entre los resultados de los informes psicológicos, y las resoluciones judiciales, teniendo en cuenta las excepciones mencionadas. (Tabla XII)

REGIMEN DE VISITAS (n=85)	PSICOLOGO	JUEZ
	%	%
EL	23.52	28.23
ELLA	50.58	49.42

Tabla XII

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Los 85 informes realizados en los juzgados de Familia, sobre parejas que acuden al procedimiento contencioso para resolver sus problemas, presentan una edad entre 30-40 años, con hijos de 5-10 años, llevan 5-10 años de matrimonio y pertenecen a una clase media. Casi el 70% de las personas que toman la iniciativa de presentar la demanda de separación o divorcio son mujeres.

En estos 85 informes el objetivo principal planteado es evaluar qué padre es más apropiado para cuidar a los hijos, y asesorar al juez sobre la concesión de guarda y custodia. En estos informes se puede observar que, en general, no consta el resumen de los autos, elemento importante para ver la trayectoria del proceso, ni el estudio de otros informes, ni los elementos útiles para contextualizar la exploración de la pareja (Blau 1984; Mauleón, 1984). En un 24% de estos informes el resultado de las pruebas ni siquiera se mencionan.

Respecto a las pruebas utilizadas en los juzgados, la que ocupa el primer lugar es la entrevista. Esta sirve, principalmente, para recoger información, del entrevistado, pero en el caso que nos ocupa, el padre y la madre saben que la evaluación tiene, como fin, decidir sobre la guarda de los hijos, y por tanto distorsionarán las respuestas mediante la simulación o la deseabilidad social. En otros casos, la situación estresante favorece respuestas incoherentes que hacen pensar en problemas psicopatológicos. En este contexto de confrontación, suele producirse el falseamiento de la información, por el temor a perder a los hijos (Grisso, 1986).

El siguiente instrumento más utilizado es el cuestionario, especialmente los de personalidad. El más utilizado es el 16PF. Este es un cuestionario que pretende dar, en poco tiempo, mucha información la personalidad. Los problemas que plantea, como cualquier cuestionario, se refieren al estilo de respuesta (aquiescencia, respuesta desviada, deseabilidad social y defensividad). Otro aspecto a destacar en este tipo de pruebas es el gran peso que se da a las diferencias individuales, en comparación con la poca importancia atribuida a la situación (Mischel, 1968).

La correspondencia entre factores de personalidad e idoneidad como padre o madres es un tanto dudosa. Y las técnicas proyectivas son utilizadas en la misma proporción que los cuestionarios. De estas técnicas se emplean preferentemente la prueba de Rorschach, el test de la familia, el Machover y el TAT. Las técnicas proyectivas, en general, presentan serias dudas sobre el valor científico de los datos recogidos a través de ellos (Fernández Ballesteros, 1980).

Estas pruebas presentan las mismas dudas que hemos manifestado, respecto a los cuestionarios, la correspondencia entre los datos obtenidos y la idoneidad como padre o madre.

Con estos datos, se concluye globalmente que en el 70% de los casos, la madre es más adecuada para atender a los hijos, mientras que en el 22% se estima que es el padre. El régimen de visitas acompaña complementariamente la guarda y custodia.

La diferencia principal respecto a la utilización de las técnicas en cada juzgado, es el uso de las técnicas proyectivas en unos, y no en otros, reflejando la orientación teórica de los psicólogos. Por lo demás, el objetivo del informe es el mismo en todos, y por tanto la evaluación se planifica para responder a este objetivo.

En conclusión, podemos decir que:

- 1.- El objetivo de los informes solicitados en los conflictos familiares, es principalmente, saber qué padre es más idóneo para cuidar a sus hijos. Este informe, se pide para que el juez tenga un elemento más para tomar la decisión, que la pareja no ha logrado tomar, y por lo que han recurrido a un procedimiento contencioso. En este contexto de confrontación, la evaluación del psicólogo sobre qué padre es el mejor, repite el mismo esquema legal de inocente y culpable (Bernal, 1987; Grossman, 1985) y no parece ser un buen comienzo sobre el que basar la evaluación.
- 2.- Las técnicas utilizadas para la evaluación psicológica, provienen, en su totalidad, de la práctica clínica, no presentando adecuación a este contexto legal (Grisso, 1986, 1987), quedando dudosa la posibilidad de concluir sobre quien es el mejor padre o madre. Además de la inadecuación al contexto, presentan una escasa fiabilidad y validez.
- 3.- El momento en el que se produce la evaluación, no es el más adecuado, ya que los padres piensan que se lo van a jugar todo y pueden, o bien intentar presentarse como "el mejor", o bien, influido por el estrés

situacional, aparecer, ante el evaluador, como no idóneo (Grisso, 1986).

- 4.- La evaluación se encarga de un aspecto parcial, de los conflictos planteados en las disputas de las parejas, cuando acuden a separarse, el de los hijos, sin ver que difícilmente puede haber soluciones parciales, y que si no se resuelven otros temas (generalmente económicos) el tema de los hijos seguirá involucrado en la lucha entre ambos.
- 5.- Las conclusiones de los psicólogos, de los juzgados de familia se corresponden totalmente con la resolución judicial, considerando a la madre como más idónea, aunque se observa cierta inclinación, en los informes psicológicos a considerar también idóneo al padre para el cuidado de los hijos, repercutiendo en la decisión del juez.

En conclusión, podemos decir que, los resultados de los informes psicológicos se basan en la utilización de pruebas psicológicas clásicas de la exploración clínica, de los que difícilmente se pueden deducir qué padre o madre es más adecuado para cuidar a los hijos. Las conclusiones psicológicas sobre la guarda y custodia de los hijos, tienen una total correspondencia con la decisión judicial respecto a este concepto. En los casos donde no está clara la inclinación del psicólogo, hacia el padre o la madre, la decisión judicial dictamina, que se le asigne a la madre, aunque estén en "igualdad psicológica" ambos padres.

ESTUDIO 3 : Intervención Psicológica y Jurídica

Introducción

Método

Resultados

Resumen y Conclusiones

ESTUDIO 3: Trabajo Conjunto

INTRODUCCION

Tres tipos de observaciones justifican la intervención del psicólogo en los procesos de ruptura de pareja. En primer lugar, la forma no conflictiva de romper la relación entre las personas que realizan terapia de pareja nos induce a pensar que las técnicas de comunicación y resolución de problemas empleados, también son útiles a la hora de terminar la relación (Gottman, 1979; Moore, 1983). En segundo lugar, la inhabilidad de los abogados para manejarse con los problemas emocionales de sus clientes, resolviéndolos desde un enfoque exclusivamente legal y de confrontación (Girdner, 1985; Trombetta, 1982) nos anima a brindar a estos profesionales técnicas psicológicas adecuadas, para el manejo de la situación. En tercer lugar, las dificultades emocionales manifestadas por los clientes de los abogados, ante problemas concretos de separación o divorcio, cuando están recibiendo consejo legal (Emerson y Messinger, 1977; Sabalis y Ayers, 1977), nos sugiere la posibilidad de intentar disminuir esta situación emocional, mediante la información y la movilización para la acción. Estas tres observaciones, nos proporcionan elementos que justifican la intervención del psicólogo en los procesos de ruptura, sensibilizando al abogado hacia un trabajo conjunto.

El estudio presentado a continuación, es el resultado de 13 años de experiencia trabajando con abogados, y que se ejemplifica con el diseño de un modelo de trabajo conjunto, en cuya base está una conceptualización de los procedimientos matrimoniales, desde una perspectiva psicojurídica, con

dos objetivos claros: conseguir acuerdos consensuados para tramitar los procedimientos por vía amistosa, y animar a la pareja a que participe en todo el procedimiento e intervenga en la regulación de su vida futura (Bernal y Martín, 1991).

Cuando las dos partes enfrentadas no logran resolver sus conflictos, bien intentando convencer al otro, o bien renunciando cualquiera de ellas a sus demandas, recurren a la intervención de un tercero para la resolución del conflicto (Rubin, 1980). En estos primeros momentos en que el conflicto entra en la vía judicial, el abogado al que se acude puede hacer una labor conciliadora, evitando consejos legales que conduzcan a los interesados a un procedimiento contencioso que intensifique los conflictos existentes y no deje vía abierta a una negociación (Grossman, 1985; Irving, 1980; Ryan, 1985). Trabajar desde el primer momento con el abogado significa cambiar las reglas de actuación de los procesos judiciales, que orientan el cómo proceder cada uno de los intervinientes en función de su rol (Saks y Hastie, 1978).

Las personas que rompen su relación, dicen sentirse confusas y con dificultad para controlar la situación conflictiva en la que se encuentran (Bernal, 1986). La intervención psicológica, en la situación emocional de los clientes de los abogados, está basada en aumentar sus habilidades de enfrentamiento y disminuir su nivel de estrés (Poser, 1976). De ahí las dos fases del modelo propuesto: Información, para que las personas sepan qué hacer, donde dirigirse y qué pasos tienen que dar, así como la fase de Información acerca de sus sentimientos negativos asociados al hecho de separarse, y la fase Educativa, donde

se le proporcionan aquellas técnicas útiles para poder hacer frente a la situación (Bernal y Martín, 1991).

Nuestras hipótesis son que con el modelo de trabajo conjunto, presentado a continuación:

- 1.- Conseguiremos más acuerdos consensuados entre la pareja que acude a separarse o divorciarse, de tal forma que pueda redactarse el convenio regulador y presentarlo al juez, dentro de un procedimiento legal amistoso, evitando el enfrentamiento, un coste elevado y un retraso en la resolución del conflicto, lo que, en conjunto, contribuye a disminuir la intensidad de la experiencia emocional negativa que estas parejas manifiestan.
- 2.- Esta forma de trabajar cooperativamente con el abogado ayuda a mantener los acuerdos alcanzados por la pareja, una vez resuelta su situación legal, a través de un menor nivel de los incumplimientos que con tanta facilidad se dan en las resoluciones consensuadas por los abogados.

METODO

Muestra

El grupo de estudio está formado por 50 parejas que habían acudido al despacho de un abogado solicitando separarse o divorciarse. Sólo tres de las parejas lo hizo de forma conjunta, es decir, los dos miembros de la pareja; en el resto de las parejas acudió un sólo miembro, siendo 32 mujeres y 15 hombres los que tomaron tal iniciativa. El público acudía al despacho de unos abogados, que llevaban varios tipos de asuntos, entre ellos los matrimoniales, pero el trabajo realizado en este despacho es la primera experiencia en España llevada a cabo entre abogado y psicólogo para resolver los problemas de pareja de forma conjunta.

Procedimiento.

Trabajo conjunto con las parejas

- a) En la primera entrevista que se tiene con el cliente que acude al despacho del abogado está presente el psicólogo que trabaja con el abogado. El abogado se presenta, y presenta al psicólogo. Suele haber cierta extrañeza por parte del cliente, extrañeza que se observa por los gestos de la cara y por expresiones que remarcan el motivo de su consulta que es su decisión de separarse.

El abogado deja claro que ambos profesionales conocen el motivo de su visita y que trabajan de forma conjunta para que la separación se lleve de manera más

adecuada. Este es uno de los momentos más duros del trabajo conjunto, ya que el cliente que acude a un abogado no tiene muy claro qué hace un psicólogo ahí. La capacidad de convencimiento del abogado aquí es fundamental ya que si no se cuenta con ello es difícil seguir adelante.

A continuación se escucha su versión de los hechos interviniendo el psicólogo para ir reestructurando las ideas inadecuadas que el cliente presenta en su exposición, y centrando ésta en los hechos reales e interesantes para la recogida de información por parte del abogado.

Al concluir con la versión de los hechos, se le explica el trabajo conjunto, sus ventajas y lo indispensable que es para llevarlo a cabo que su pareja acuda también al despacho a ser informado, si han venido solos. En general expresan su escepticismo sobre que el otro acceda a venir aunque aceptan intentarlo.

- b) El contactar con la otra parte, labor que realiza el psicólogo, es muy complicada y hay que vencer una serie de suspicacias por parte del que no ha acudido al abogado y que se complica cuanto mayor es su resistencia a separarse.

Cuando la otra parte tiene representante legal, corresponde al abogado ponerse en contacto con su compañero para intentar explicarle un nuevo modo de llevar estos temas y apuntar la posibilidad de tener

una entrevista entre ambas partes con el objetivo de llegar a un acuerdo.

- c) En los casos que conseguimos verlos a los dos se les informa desde un punto de vista legal y psicológico. En el terreno legal es conveniente que sepan las ventajas del procedimiento amistoso y las dificultades y consecuencias negativas que tendrían con el procedimiento contencioso. En el terreno psicológico se les brinda información sobre el conocimiento de los propios sentimientos, de los del otro y los de los hijos.
- d) Una vez que ambos ven la conveniencia de llegar a un acuerdo, se estudian los desacuerdos para conseguir puntos intermedios que sean aceptados por ambas partes y que les facilite la realización del Convenio Regulador.

Tratamiento de los datos.

- a) La recogida de información del trabajo conjunto no estuvo diseñada a priori, porque el objetivo de esta primera experiencia era ver cómo podía trabajar un psicólogo y un abogado en un tema privativo del derecho. Todo el esfuerzo estuvo centrado en ir modificando el esquema particular del trabajo del profesional abogado, para ir incorporando elementos psicológicos que condujeran a entender estos casos desde una perspectiva de relaciones interpersonales, y no con presupuestos exclusivamente legales (Duquette, 1978). Al mismo tiempo, el psicólogo va incorporando en su haber una serie de conocimientos legales

sobre la ley de Familia y la dinámica procesal, que son de gran utilidad para ir adecuando más acertadamente la experiencia psicológica al desarrollo del trabajo legal en los asuntos de Familia.

El intercambio de experiencia y de información entre profesionales se hizo prioritaria en este trabajo, repercutiendo negativamente en una buena planificación de la metodología del mismo, y perdiendo datos de indudable valor para poder demostrar, con mayor rigor, la utilidad de esta labor interdisciplinar.

- b) Con los datos recogidos de la información de los sujetos, se llevó a cabo un recuento de frecuencias y porcentajes para describir a las parejas, que habían acudido a separarse o divorciarse, así como aquellas variables que tenían que ver con el procedimiento legal utilizado.

A continuación, se comparó la proporción de acuerdo inicial y final obtenidos en este grupo de estudio, trabajando abogado y psicólogo conjuntamente y los obtenidos en la muestra de parejas donde sólo han trabajado abogados. Así mismo se ha comparado la proporción de incumplimientos de ambas muestras.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos en la muestra de 50 parejas que tramitaron su procedimiento siguiendo el modelo de intervención psicológico-jurídico descrito con anterioridad son los siguientes:

Presentan una edad media que oscila entre 31-40 años, el 50% llevan casados entre 5 y 10 años, el 24% representa a parejas que estan juntos de 11 y 20 años y un 20% de las parejas conviven menos de 5 años. El 68% de las parejas tienen hijos y el porcentaje más alto (40%) pertenecen a una clase media, distribuyéndose el resto por igual por encima y por debajo de la clase media.

		% (n=50)
EDAD DE LAS PAREJAS	20 - 30 AÑOS	32
	31 - 40 AÑOS	48
	41 - 50 AÑOS	16
	MAS DE 50 AÑOS	4

AÑOS DE MATRIMONIO	MENOS DE 5 AÑOS	20
	5 - 10 AÑOS	50
	11 - 20 AÑOS	24
	MAS DE 20 AÑOS	6

HIJOS	CON HIJOS	68
	SIN HIJOS	32

		% (n=50)
CLASE SOCIAL	BAJA	8
	MEDIA-BAJA	26
	MEDIA	40
	MEDIA ALTA	10
	ALTA	16

La persona que demanda los servicios del abogado, es preferentemente la mujer (64%), mientras que en el 30% de los casos, es el hombre quien acude al abogado. Sólo en un 6% de los casos, ambos miembros de la pareja dicen estar de acuerdo en cuanto a la decisión de separarse se refiere, lo cual indica que en un 94% de los casos, es uno solo el que quiere separarse contando, en principio, con la oposición de su pareja.

		% (n=50)
INICIADOR DEL PROCEDIMIENTO	ELLA	64
	EL	30
	AMBOS	6

ACUERDO INICIAL	SI	6
	NO	94

Una vez que se llevó a cabo la tramitación legal, se consiguió que el 74% de las parejas resolvieran sus

problemas por la vía consensual, es decir, las parejas se pusieron de acuerdo en la totalidad de los puntos del convenio regulador, tardando en su tramitación legal, entre 2-4 meses. En el 26% restante, los procedimientos siguieron la vía contenciosa, al no poder conseguir los acuerdos totales, invirtiendo en la resolución de su procedimiento un período de tiempo que oscila entre 14 y 20 meses.

		% (n=50)
ACUERDO FINAL	SI	74
	NO	26
TIEMPO DE DURACION DEL CONFLICTO CON ACUERDO	1 - 2 MESES	36
	3 - 4 MESES	40
	5 - 7 MESES	24
TIEMPO DE DURACION DEL CONFLICTO SIN ACUERDO	10 - 15 MESES	46
	16 - 20 MESES	46
	21 - 25 MESES	8

Entre las causas alegadas para separarse, el 72% se refieren al acuerdo entre los dos miembros de la pareja y/o a una separación previa de hecho entre ambos. El 20% de las parejas adujeron injurias y violación de los deberes maritales o paterno-filiales de un miembro y el 8% restante alega diversas causas, como abandono, infidelidad, malos tratos, etc. Esto es coherente con el resultado obtenido en los acuerdos finales, ya que si el 74% de la muestra acude

a la vía amistosa, el motivo principal propuesto para la separación, debe ser el acuerdo entre ellos o la separación previa.

		% (n=50)
CAUSA ALEGADA	ACUERDO	46
	SEPARACION DE HECHO	26
	INJURIAS Y VIOLACIONES	20
	OTROS (AB.INF.MALOS TRATOS)	8

Entre los puntos del convenio regulador más conflictivos y que más problemas hubo para poner a la pareja de acuerdo, destaca el económico en un 60% de los casos, seguido del relacionado con los hijos, en un 28% y en último lugar el del uso de la vivienda, en un 12%.

		% (n=50)
PUNTOS MAS CONFLICTIVOS DEL CONVENIO REGULADOR	ECONOMICO	60
	HIJOS	28
	USO VIVIENDA	12

Algunas variables que hemos detectado frecuentemente en estas parejas que se separan son, en primer lugar, el embarazo previo al matrimonio, en un 40% de los casos, lo que apunta a pensar que el matrimonio se forzó por esta causa. En el 18% de los casos se da una extrema juventud de las parejas y en el 18% también de los casos se observa la presencia de una conducta negativa reiterada por parte de un miembro de la pareja (generalmente él), como alcoholismo, drogadicción, etc.

		% (n=50)
VARIABLES UNIDAS A LA RUPTURA	EMBARAZO PREVIO	40
	CORTA EDAD	18
	CONDUCTA NEG. REITERADA	18
	OTROS (CLASE SOCIAL, ETC.)	24

Respecto a los incumplimientos llevados a cabo en este grupo de parejas, después de dos años de haber tramitado su procedimiento sólo podemos informar de 20 parejas de los que tramitaron su procedimiento por vía amistosa y que en tres casos hubo incumplimientos. Esto indica que el seguimiento se llevó a cabo en el 54% de las parejas y que el nivel de incumplimientos es del 15%.

		% (n=37)
SEGUIMIENTO	SI	54
	NO	46

		% (n=20)
INCUMPLIMIENTOS	NO	85
	SI	15

Si nos fijamos en la diferencia de proporciones, respecto a las dos formas de trabajar (abogados sólo en el estudio 1 y trabajo conjunto entre psicólogo y abogado en este estudio), observamos lo siguiente:

- 1.- La diferencia que presentan los dos grupos de trabajo en cuanto al acuerdo inicial que muestran las parejas a la hora de plantear su separación o divorcio, es significativa ($z = 3.37$; $p < 0.01$), en el sentido de que la muestra de este estudio presenta menos acuerdos iniciales.
- 2.- El grupo cuya tramitación se llevó a cabo dentro del modelo de trabajo conjunto presenta un porcentaje mayor de casos tramitados por vía amistosa que el grupo llevado por abogados, siendo esta diferencia significativa ($z=4.5$; $p<0.001$).

- 3.- En el grupo de abogados se observa un porcentaje mayor de incumplimientos realizados por vía consensual que en el grupo donde se trabajó conjuntamente, siendo esta diferencia significativa ($z = 2.289$; $p < 0.05$).

		TRAB. CONJUNT % (n=50)	ABOGADOS % (n=1009)
ACUERDO INICIAL	SI	6	29.6
	NO	94	70.4

		TRAB. CONJUNT % (n=50)	ABOGADOS % (n=1009)
ACUERDO FINAL	SI	74	42.2
	NO	26	57.8

		TRAB. CONJUNT % (n=3)	ABOGADOS % (n=1009)
INCUMP. CON AC.	SI	15	40.6

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Los resultados de este trabajo apoyan las hipótesis planteadas en un comienzo, relacionándolas con las conclusiones del primer estudio llevado a cabo con abogados. En esas conclusiones quedó de manifiesto que:

- 1.- El procedimiento consensual es más ventajoso que el contencioso ya que implica un menor coste y una reducción del tiempo empleado en su resolución.
- 2.- Los abogados expertos consiguen tramitar más casos por vía amistosa, pero estos acuerdos no se mantienen, después de la tramitación legal.
- 3.- La opinión favorable del abogado hacia la vía consensual y hacia la intervención del psicólogo favorece el uso del procedimiento consensual.

En este trabajo, realizado de forma conjunta con un abogado experto en temas matrimoniales, partimos de una muestra similar a la utilizada por el grupo de abogados en las variables sociológicas (edad media, número de años de matrimonio, clase social e hijos), de manera que las diferencias encontradas en ningún caso pueden atribuirse a los efectos de estas variables.

Los resultados de los 50 casos llevados de forma conjunta nos indican que:

- 1.- Con el sistema de trabajo conjunto entre psicólogo y abogado se obtiene un porcentaje mayor de asuntos matrimoniales tramitados por vía amistosa que el

conseguido en el grupo de abogados, siendo significativa esta diferencia. Además, esa diferencia se encuentra a pesar de la gran diferencia inicial entre ambos grupos, a favor de los abogados, con respecto al número de parejas que, desde el principio, presentan un acuerdo inicial en tramitar el procedimiento por vía amistosa. Estos resultados son convergentes con los de otros autores (Duquette, 1978; Lévesque, 1987 y Parkinson, 1987).

El alto porcentaje de acuerdos finales conseguidos, supone un mismo porcentaje de tramitaciones gestionadas a través de la vía amistosa, reduciendo de esta forma el tiempo utilizado en resolver el conflicto y el coste del mismo. Esta diferencia del coste, se produce por la mayor simplicidad del procedimiento amistoso y porque esta vía legal posibilita la utilización de un mismo representante legal, abogado y procurador, para las dos partes. Desde un punto de vista psicológico, existen otras ventajas de este mayor uso del procedimiento amistoso, y es que, al no fomentar la lucha entre la pareja, aumenta las posibilidades del acuerdo, reduciendo la intensidad emocional propia de las personas que terminan su relación (Berscheid, 1982), repercutiendo de forma positiva sobre los hijos (Campbell y Johnston, 1986; Kressel, 1987; McIsaac, 1987; Pearson y Thoennes, 1984, 1986).

Otro aspecto que interesa destacar en este trabajo conjunto es el contenido de los temas conflictivos propuestos para negociar. En nuestro modelo, se abordan de forma global, todos los puntos del convenio regulador, y no exclusivamente los relacionados con la

guarda y custodia y régimen de visitas. Esto pone de relieve la importancia del abogado en el manejo de asuntos económicos, regulados en el derecho de familia, ya que como hemos visto en este estudio, los asuntos más conflictivos presentados por las parejas se refieren a cuestiones económicas, como las pensiones o el reparto de las propiedades.

- 2.- El porcentaje de incumplimientos de los acuerdos presentados en el Convenio Regulador es menor en el grupo donde trabajó el psicólogo y abogado de forma conjunta que en el grupo de abogados, siendo esta diferencia significativa.

Esta es la segunda conclusión a la que hemos llegado en este estudio. Las parejas que consiguen acuerdos finales en todos los puntos del convenio regulador, cuando el procedimiento legal ha concluido, cumplen mejor dichos acuerdos de lo que lo hacen las parejas cuyos procedimientos han sido gestionados por el grupo de abogados. Estos resultados nos indican que la negociación llevada a cabo con las parejas para conseguir los acuerdos es diferente en el grupo de abogados que en el del trabajo conjunto. En este último, la mayor participación de la pareja en el proceso de negociación conduce a una mayor satisfacción, y por lo tanto es más difícil que incumplan estos acuerdos (Roehl y Cook, 1985). Esto mismo ha sido estudiado por otros autores, que expresan la renuncia que las personas hacen de autoridad, al dejar el asunto en manos del abogado, aunque sea para gestionar sus acuerdos (McCormack, 1988). Esa falta de participación de los interesados en su propio procedi-

miento y en la resolución del mismo les ocasiona una reducción de la satisfacción psicológica, aunque el trámite se haya resuelto de forma no conflictiva, ya que no se sienten partícipes en esa resolución (Garzón, 1984, 1988; Rubin, 1980). Esta ausencia de implicación en la resolución y el dejar que otros tomen las riendas de sus propios asuntos, reduce el grado de compromiso subjetivo con los acuerdos.

Por consiguiente, la mayor participación de los implicados, en el proceso de negociación, aumenta la probabilidad de mantener los acuerdos a los que ellos mismos han llegado, garantizando de esta manera un derecho de los hijos de conservar a su padre y a su madre, aunque hayan dejado de ser pareja (Chase, 1983; Saposnek, 1983; Wallerstein y Kelly, 1980; Ware, 1982).

ESTUDIO 4 : Mediación

Introducción

Método

Resultados

Resumen y Conclusiones

ESTUDIO 4: Mediación

INTRODUCCION

Este último estudio, recoge las enseñanzas de cada una de las actuaciones de los distintos implicados en los procedimientos matrimoniales, con el fin de presentar un diseño de intervención psicológica, en un contexto judicial, regulado por reglas que orientan el modo de proceder de los distintos actores. Con esto, queremos decir, que si bien se tienen en cuenta la actuación particular de los distintos roles implicados, también se tiene en cuenta el contexto en el que tal actuación se produce (Carroll y Wiener, 1982).

El primer estudio nos muestra cómo los abogados actúan a la hora de resolver los conflictos familiares, y el marco natural donde se desenvuelven, que es de carácter conflictivo (McCormack, 1988). El rol del abogado, en un sistema de confrontación, es actuar a favor de una de las partes en conflicto, protegiendo los derechos e intereses de su cliente (Dillehay y Nietzel, 1986) y favoreciendo, el enfrentamiento entre las partes y la inducción a una resolución legal contenciosa, con implicaciones negativas para todo el núcleo familiar (Eitzen, 1985; Kressel, 1980, 1985, 1987; Thoenes y Pearson, 1985).

El segundo estudio describe la conducta del psicólogo en los Juzgados de Familia, realizando una evaluación psicológica, sobre la idoneidad de ambos padres para el cuidado de sus hijos, e informando de sus conclusiones al juez. El rol del psicólogo, en el mismo contexto de confrontación, es especialmente difícil ya que el propio

sistema legal condiciona el poder seguir las reglas éticas sugeridas por el comité de Psicólogos Forenses (Committee on Ethical Guidelines for Forensic Psycholigists, 1991), reproduciendo el esquema de los abogados, enfrentando a ambas partes por la propia evaluación y por la incidencia de ésta en la decisión del juez.

El tercer estudio, recoge los cambios producidos en la conducta de abogados y psicólogos, cuando trabajan conjuntamente en la resolución de los procesos familiares desde su comienzo. Una mayor sensibilización de los abogados hacia la colaboración del psicólogo, y el uso del procedimiento amistoso, así como una sustitución de la función evaluadora del psicólogo por una mediadora, nos conduce a los objetivos del cuarto estudio: El diseño de un Programa de Mediación, como forma alternativa, al procedimiento contencioso, para resolver problemas de ruptura.

En este cuarto estudio, este modelo se ha ido consolidando, gracias a la experiencia profesional ya mencionada, y que queda reflejada en esta tesis, recogiendo, de cada uno de los distintos estudios, aquello que aporte beneficios psicológicos a las personas, cuando acuden al sistema judicial, con la esperanza de que sean valoradas la legitimidad de sus expectativas y de que se resuelvan los conflictos planteados (Aubert, 1967; Coates y Penrod, 1981; Curran, 1977; Rubin, 1980; Vidmar, 1985; Vidmar y Schuller, 1987).

El Programa describe una serie de fases, preparatorias para que la pareja pueda negociar sus no acuerdos, distinguiendo, los problemas personales de los problemas de

relación y los problemas propios de la ruptura, sobre los que basar la negociación (Kessler, 1978).

En este estudio pretendemos:

- 1.- Describir la aplicación del mencionado Programa, dentro de un servicio público, y analizar las diferencias observadas entre las parejas que interrumpen y completan dicho Programa, con el objetivo de seleccionar aquellas variables que mejor puedan predecir el éxito de la Mediación.
- 2.- Conseguir más acuerdos consensuados que posibiliten un aumento de tramitaciones por vía amistosa.
- 3.- Aumentar la duración de los acuerdos, después de la resolución judicial, disminuyendo el número de incumplimientos, repercutiendo de forma positiva sobre la pareja (Grossman, 1985; Ryan, 1985) y sobre los hijos (Campbell and Johnston, 1986; Kressel, 1987; McIsaac, 1987; Olson et al., 1980; Solomon et al., 1982; Pearson y Thoennes, 1986; Vanderkooi y Pearson, 1983).

METODO

Muestra

Está compuesto por 56 parejas que quieren separarse o divorciarse y que aún no han tramitado legalmente su procedimiento. Acuden al Centro de Mediación para poder llevar a cabo la separación o el divorcio de forma no conflictiva. Hay que destacar que aunque parece suponer una mayor predisposición a estar la pareja de acuerdo, esto no es así ya que en primer lugar, en general, es un miembro de la pareja el que viene a informarse previamente, con muy escasa información sobre la Mediación, cuando no distorsionada. En segundo lugar, cuando se le informa de que tiene que acudir su pareja para poder entrar en el Programa, verbalizan que eso va a ser imposible, que el otro no va a querer. En tercer lugar, el esfuerzo que ha supuesto el que acuda al Servicio la pareja del que lo demanda es indicativo del no acuerdo inicial que, en general, presentan las parejas de esta muestra.

La información que estas parejas tienen de la existencia de este Centro de Mediación es a través de los medios de Comunicación (prensa, radio y T.V.). En su gran mayoría son parejas con hijos, con un nivel profesional medio.

Procedimiento

El programa de Mediación (Tabla I) está diseñado como paso previo a la tramitación judicial y tiene como objetivos:

- Conseguir acuerdos en el proceso de separación
- Elaborar el Convenio Regulador

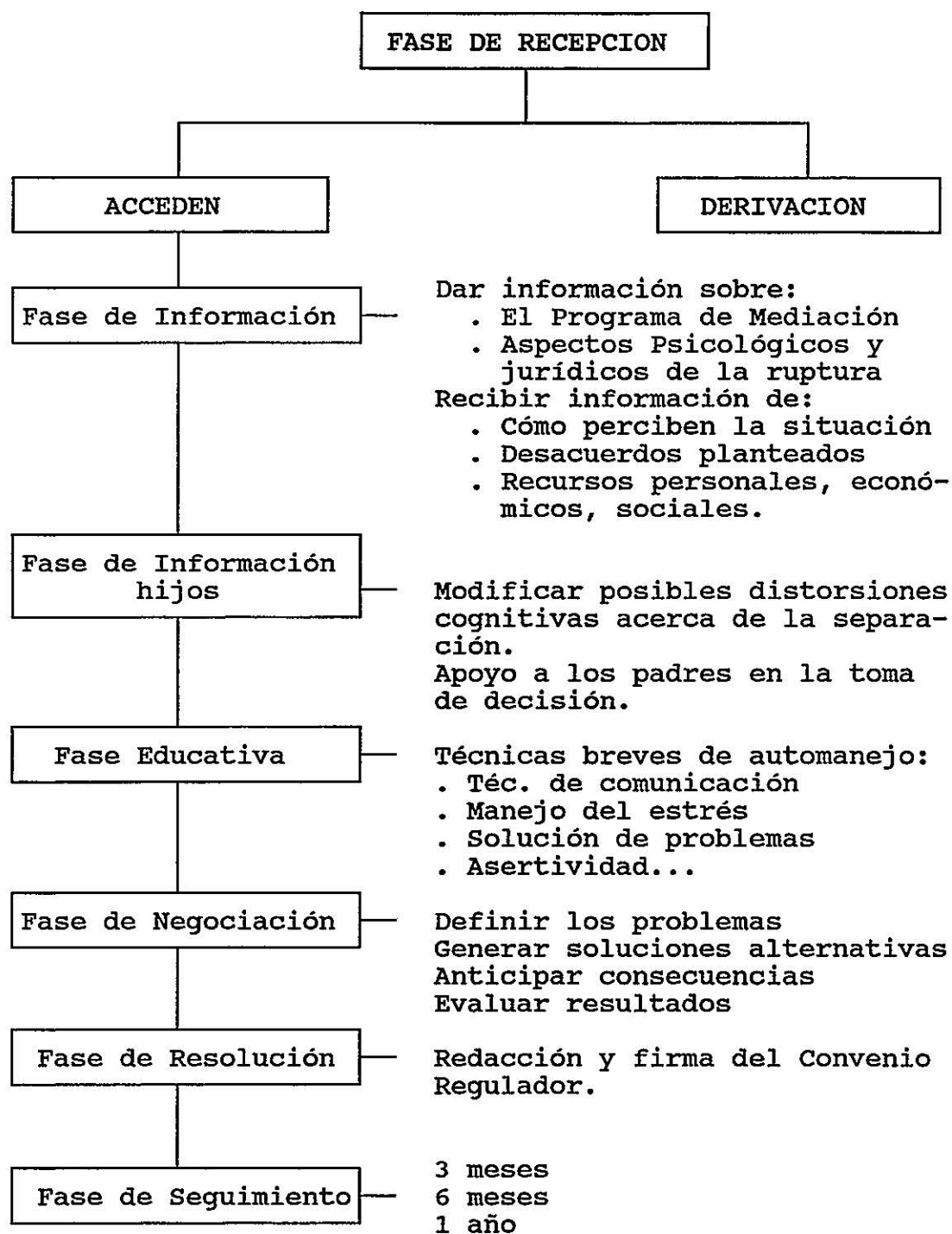
El programa está constituido por una serie de fases por las que las parejas van introduciéndose. Cada una de ellas presenta características propias en cuanto a objetivos, procedimiento, duración y profesionales que intervienen. Los criterios que deben reunir las parejas para poder usar este programa son:

- Tener tomada la decisión de separarse
(Por lo menos un miembro de la pareja)
- No haber iniciado los trámites legales

FASES DEL PROGRAMA DE MEDIACION (Esquema I)

Fase de Recepción .- En esta primera entrevista se evalúa la adecuación de la problemática presentada al Programa, derivándose a otros Servicios aquellos que no cumplen los criterios de admisión al mismo. Está diseñado para dar información a la persona que demanda el servicio sobre el Programa de Mediación, sus objetivos y sus reglas así como tomar información personal del entrevistado. Esta información personal está recogida en un cuestionario que se adjunta en el Anexo. El otro tipo de información que se ofrece comprende los siguientes elementos:

PROGRAMA DE MEDIACION



Describir el contenido del Programa de Mediación, donde se ofrece información psicológica y jurídica para luego pasar a unas sesiones de negociación en donde se van perfilando los acuerdos mutuos sobre los temas legales comprendidos en el Convenio Regulador, así como el contenido legal de cada uno de los puntos.

Dejar claro el objetivo de la Mediación, que no es una terapia para que la pareja arregle sus problemas de relación y esté junta, sino que consiste en ayudar a la pareja que ya tiene tomada la decisión de separarse (por lo menos uno de los dos) a que ésta se lleve a cabo de forma no conflictiva, ayudando a conseguir acuerdos en aquellos temas que no lo están para poder así tramitar su separación o divorcio por vía amistosa.

Distinción entre los dos tipos de procedimientos legales para acceder a la separación o al divorcio. El amistoso, con un menor coste y duración así como un menor daño a los hijos y a ellos mismos y el contencioso, donde el conflicto de pareja existente se agudiza por la lucha legal propia de este procedimiento adversarial.

Motivar al que demanda el servicio lo ventajoso de ser autor de las decisiones que se tomen acerca de su futuro y el de sus hijos, sin dejarlo en manos de un abogado o un juez.

Comentar las reglas mínimas en las que se basa la Mediación y su conformidad para aceptarlas si deciden entrar en el Programa de Mediación:

- Objetivo principal: intentar el acuerdo.

- No utilizar la Mediación para postponer la ruptura.
- Las pérdidas deben ser repartidas por igual, es decir no se trata de ganar a costa de los demás.
- Enfocar la negociación en base al mejor interés de los hijos.
- Mantener el equilibrio entre ambas partes, sin ejercer el poder de uno sobre el otro.
- Controlar la agresividad (dar permiso al mediador para intervenir cuando ésta se presente).

Una vez que el demandante acepta el Programa, se le instruye sobre cómo darle la información al otro miembro de la pareja, haciendo que repita la información ante nosotras para corregir posibles errores. En caso de que el otro se niegue a venir, debe llamarnos para intentarlo nosotras. Si ocurre esto último, nos ponemos en contacto telefónico con la otra parte. La información telefónica está diseñada con todo detalle en cuanto a contenido y forma. Es similar a la utilizada en el trabajo conjunto, descrito en otro apartado, pero la ventaja de ésta es que puede empezarse presentando el Programa de Mediación como Servicio Público subvencionado por el Ministerio de Asuntos Sociales desde la Dirección de Protección Jurídica del Menor, con un interés especial en los hijos y en que no repercuta entre ellos de forma negativa la manera de plantear la separación sus padres. A continuación se le brinda las excelencias de la Mediación y su novedad en España y se termina con una invitación a conocer este Servicio sin compromiso alguno mediante una entrevista individual.

La Fase de Recepción se repite con el cónyuge del demandante. Esta entrevista la realiza el psicólogo y el abogado.

Fase de Información.- Esta fase se realiza con los dos miembros de las parejas que han aceptado comenzar el programa. Se trata de ofrecer una serie de informaciones avaladas por la investigación psicológica, cuya ignorancia puede dificultar la negociación:

En primer lugar, se comenta el principio de reciprocidad con el fin de responsabilizar a ambos en la decisión de separación evitando el papel de víctima y culpable tan corriente en estos casos.

En segundo lugar, se manifiesta la comprensión de las emociones negativas de uno o ambos miembros de la pareja, explicando la presencia de ciertas variables que influyen en esta reacción emocional, pero adelantando la poca utilidad de las mismas para resolver el problema que tienen planteado.

En tercer lugar, se explica los derechos de los hijos de seguir contando con ambos padres y la relación tan estrecha entre el comportamiento de los padres y los problemas emocionales de los hijos asociados a la ruptura.

En cuarto lugar se les indica cómo plantear conjuntamente a los hijos su decisión de separarse en función de la edad de éstos y de ciertas características individuales.

Por último se adelantan comportamientos usuales en la negociación en función de la utilización de una serie de emociones negativas habituales y el cómo poder corregirlas.

Fase de Información a los hijos.- El objetivo de esta fase es evaluar las respuestas emocionales ante la separación y

los posibles problemas psicológicos de los niños asociados a ella, con el fin de eliminar posibles dificultades en el proceso de negociación así como las respuestas problemáticas de sus padres. Para realizar esta fase los padres deben acceder a que sus hijos se introduzcan en el Programa de Mediación. Si no se cuenta con su aprobación, se intenta la intervención indirecta en los hijos a través de los padres.

Ambas fases de información, son realizadas por el psicólogo.

Fase Educativa.- Las personas que en la fase de Información han presentado ciertas ideas no adaptativas, que indican posibles problemas en la negociación, como por ejemplo, la resistencia de un miembro de la pareja a separarse alegando la injusticia de tenerse que someter a la decisión del otro y pronosticando un grave desastre para los hijos por culpa de esta decisión; se realiza una o más sesiones que tienen como objetivo modificar la idea inadecuada y así preparar a ambos miembros de la pareja para las sesiones de negociación.

Fase de Negociación.- Consiste en una serie de entrevistas conjuntas donde se van negociación cada uno de los puntos del Convenio Regulador: guarda y custodia, régimen de visitas, reparto de bienes, pensiones y uso del domicilio.

En estas sesiones se ponen de acuerdo el psicólogo y el abogado en cuanto al orden de los temas a tratar, teniendo en cuenta la dificultad de los mismos para la pareja en particular y siguen un orden de menor a mayor problema. Cada punto a discutir está precedido por la

explicación correspondiente y escuchando las propuestas de ambas partes.

La sesión siguiente comienza recordando todos los acuerdos conseguidos en la sesión anterior, abriendo el camino con la explicación del tema siguiente. Se les va dando feed-back positivo ante los acuerdos, presentando cada punto del Convenio como generador de alternativas a proponer por ambas partes para luego evaluar las consecuencias positivas y negativas para todos los miembros del nucleo familiar.

Hay ocasiones en que es conveniente tener alguna sesión de negociación con cada uno de los miembros de la pareja por separado para poder tratar más detenidamente una alternativa porque la negociación se encuentra en un punto muerto. Si se llevan a cabo estas sesiones por separado es conveniente realizarlas con los dos miembros en paralelo para garantizar la imparcialidad.

Las sesiones de negociación son realizadas por psicólogo y abogado.

Fase de Resolución.- Una vez conseguidos los acuerdos consensuados de todos los puntos del Convenio Regulador, se redacta este por el abogado y nos reunimos con la pareja (y a ser posible con los hijos) para que lo firmen. A este momento se le da importancia ya que supone el resultado de los esfuerzos de ambos miembros de la pareja para no permanecer en sus posiciones iniciales y ceder ambos en un intento de alcanzar un punto intermedio entre las dos posturas enfrentadas.

Fase de Seguimiento.- A los seis meses de terminado el Programa de Mediación, se tiene una entrevista con ambos miembros de la pareja para tener información sobre el cumplimiento del Convenio y si ha habido algún inconveniente.

Descripción de los instrumentos

A.- Cuestionario de Recepción.- Del cuestionario elaborado para recoger información de cada miembro de la pareja, aquí se presenta una reducción del mismo ya que sólo nos hemos basado en parte de la información que no resultaba útil para el propósito de esta investigación.

En primer lugar se recogieron datos sociológicos de ambas partes de la pareja, como edad, número de años de matrimonio, hijos, profesión, etc.

En segundo lugar el grado subjetivo de sentimientos negativos con respecto a la separación, así como el grado subjetivo de expectativas de conflicto que supondrá la separación para cada miembro de la pareja, en una escala de 0-10 para ambos grados.

Esta escala se dividió en tres niveles en función del siguiente:

Puntuación de 0-3: Algún sentimiento negativo unido a la separación, o algún grado de conflicto.

Puntuación de 4-6: Sentimientos negativos o grado de conflictos altos.

Puntuación de 7-10: Sentimientos negativos o grado de conflictos muy altos.

En tercer lugar datos sobre la ruptura:

- Cuanto tiempo hace que terminó su relación
- Quién propuso romper
- Si estaban ambos de acuerdo en esta decisión
- Causa real de la misma
- Problemas que le preocupan más

Hoja Resumen del Proceso.- Donde se recoge todo el contenido de todo el proceso por el que la pareja ha pasado: n° de sesiones, si ha completado o no si ha interrumpido y en qué fase. Causa de la interrupción...

Hoja de Seguimiento.- Donde se refleja posibles problemas que la pareja presenta a los seis meses de realizar su Convenio Regulador, así como una nueva valoración del grado de sentimientos negativos con respecto a la separación así como el grado subjetivo de conflicto y una valoración del grado de satisfacción con el Programa, durante y después de llevarlo a cabo.

Tratamiento de los datos

En primer lugar, se llevó a cabo un recuento de frecuencias y porcentajes para describir las características de las parejas que han acudido al Programa de Mediación, formando a continuación tres grupos en función de si comienzan o no el programa y si lo terminan, de forma que obtenemos los tres grupos siguientes:

- 1.- Parejas derivadas, aquellas que no reúnen alguno de los requisitos de acceso al programa, o bien han iniciado ya el trámite legal y no lo quieren interrumpir, o bien ninguno de los miembros de la pareja ha tomado la decisión de separarse.
- 2.- Parejas que interrumpen el programa. Se trata de aquellas parejas en que ambos ya conocen el funcionamiento del Programa de Mediación y que una vez introducidos en el mismo no llegan a completarlo.
- 3.- Parejas que completan el programa. Son aquellas que acceden a éste y lo llevan a cabo con éxito, completando todas las fases del mismo y terminando con la firma del Convenio Regulador donde se especifican los acuerdos conseguidos, fijando de esta forma su nueva manera de funcionar en relación a ellos mismo y a sus hijos.

En segundo lugar, se realiza un estudio de las parejas que interrumpen el Programa, en qué fase del mismo se quedan, cuál es el motivo de la interrupción y la opinión del mediador sobre la misma.

En tercer lugar, se comparan los dos grupos que comienzan el programa (interrumpen/completan) con el fin de establecer diferencias que nos puedan ayudar a predecir características más favorables para que la mediación se utilice con éxito.

En cuarto lugar, se realiza un recuento del seguimiento llevado a cabo a los 6 meses de firmado el Convenio Regulador. El objetivo es constatar que los acuerdos

consensuados siguen manteniéndose y que ningún miembro de la pareja ha incumplido alguno de estos acuerdos. Al mismo tiempo se recoge información sobre posibles incidentes con el abogado que le llevó el caso o en el juzgado correspondientes. Si existe alguna discrepancia en cuanto a lo establecido en el Convenio por haber cambiado algo la situación inicial, se vuelve a tratar con ambos miembros para así poder disminuir las diferencias y evitar que se acuda a la vía legal.

En quinto y último lugar, se compararon las tres formas de resolver los trámites de familia para ver las ventajas e inconvenientes de estos tres estilos de trabajo.

RESULTADOS

De las 56 parejas atendidas en el Programa de Mediación, el 62,5% son mujeres y el 37,5% hombres. La edad de las parejas se sitúa entre 31-40 años y llevan entre 11-15 años de pareja, teniendo la gran mayoría hijos (91%). El 53,5% de estas parejas tienen un nivel profesional medio (administrativos, comercio, hostelería, ...)

SEXO		% (n=56)
	MUJER	62.5
	HOMBRE	37.5

EDAD	% n=112	AÑOS MATRIM. % n=55	
20-30	25	0-5	23.2
31-40	38.5	6-10	16.1
41-50	29.5	11-15	25
51-60	5.3	16-20	12.5
+ 60	1.7	21-25	16.1
		26 o más	5.3

Si nos fijamos en el grado subjetivo de sentimientos negativos que las parejas sienten respecto al hecho de separarse, el 61,6% presentan un nivel muy elevado, el 17,8 un nivel elevado y sólo un 19% dice experimentar algo de sentimientos negativos.

Respecto al grado de conflicto que las parejas esperan tener a la hora de ponerse de acuerdo tenemos que el 35,7% piensa que no tendrá mucho conflicto, el 31,3% sin embargo espera que la negociación sea muy conflictiva y el 26,7% espera tener conflictos.

Grado Sent. Neg. % n=112		Grado de Exp Conf. % n=112	
0 - 3	19	0 - 3	35.7
4 - 6	17.8	4 - 6	26.7
7 - 10	61.6	7 - 10	31.3
N.E.	1.6	N.E.	6.3

De estas 56 parejas, 46 terminan con éxito el programa, cumpliendo los objetivos propuestos, conseguir acuerdos y elaborar y firmar el Convenio Regulador. De las 10 restantes, 8 interrumpieron el programa en alguna de las fases del mismo y 2 parejas se derivaron a otro servicio ya que no tenían intención de separarse. Por lo tanto el éxito alcanzado, utilizando la Mediación, es el 85,1 (46/54).

	% n=56
Parejas que terminan	82.1
Parejas que interrumpen	14.3
Parejas derivadas	3.6

El porcentaje mayor de estas parejas (51,8%), son mujeres las que demandan el servicio y a la vez han tomado la decisión de romper la relación; un 10,7% es ella quien busca el servicio pero la decisión la ha tomado él. En igual proporción (16%), están aquellas parejas que ellos demandan el servicio y a la vez romper la relación, y las que demandan ellos el servicio pero la decisión de romper es de ellas. Sólo el 5,3% restante la decisión de acudir al centro la tiene él aunque la de romper, ambos.

DEMANDANTE / TOMA DE DECISION	% n=54*
ella / ella	51,8
ella / él	10,7
ella / ambos	0
él / él	16,1
él / ambos	5,3

* Del total de la muestra (56), dos se derivan. El grupo es de 54

Del total de las parejas, nos encontramos que mientras el 32% ambos dicen estar de acuerdo a la hora de plantear su separación o divorcio, el 68% sólo un miembro de la pareja quiere hacerlo, contando con la resistencia del otro.

DE ACUERDO EN LA PROPUESTA

	% n=54
SI	32.1
NO	67.9

De las 8 parejas que han interrumpido el programa (Tabla I), tenemos que tres de ellas lo hacen en la fase de Información II, al comienzo del programa, y los motivos tienen que ver con expectativas no cumplidas de las personas que demandan el servicio. En dos casos los demandantes no han decidido ellos romper la relación, sino sus parejas y acuden con la idea de que se les apoye en sus demandas para sacar al otro de su error. Al no ver cumplidas sus expectativas, esos mismos demandantes deciden no continuar el Programa. En el tercer caso, ella es la que demanda el servicio y la que ha decidido separarse, aunque esta afirmación no se corresponde con la realidad y este caso se asemeja a los dos anteriores en que acude reclamando ayuda para que le hagamos entender a él que su comportamiento no es adecuado, decidiendo, a continuación, seguir con la relación y abandonar el programa.

N	FASE	N SESION	CAUSA	DE- MAND.	DECI- SION	OPINION MEDIADOR
1	Información	-	Desacuerdo con el programa.	ELLA	EL	Espera apoyo a la mujer. Inconformidad con que le informemos a él que también puede tener a los hijos.
2	Información	-	Se niega a negociar	EL	ELLA	El pensaba que podríamos convencerla para que no se separase.
3	Información	-	Vuelven a estar juntos.	ELLA	ELLA	Ella quiere que le expliquemos a él lo mal que se comporta con ella.
4	Negociación	6	Seguir juntos	ELLA	ELLA	Ella está en relación de desigualdad (Prob.psicológicos)
5	Negociación	2	Interferencia exterior	ELLA	EL	Ella quiere utilizar la Mediación para no separarse.
6	Negociación	4	El rompe la negociación. No quiere separarse	ELLA	ELLA	Ella está en relación de desigualdad (alcoholismo de él).
7	Negociación	1	Interferencia exterior.	EL	ELLA	El quiere utilizar la Mediación para no separarse.
8	Negociación	2	El rompe la negociación. No quiere separarse	ELLA	ELLA	Ella está en relación de desigualdad (alcoholismo de él).
		X=3				

Tabla I

En cuanto a las otras cinco parejas que interrumpen, estas lo hacen en fase de Negociación, con una media de 3 sesiones de negociación por pareja. Las causas apuntadas para el abandono son, en dos casos, interferencia del exterior, generalmente abogados y familia que cuestionan la utilidad de la Mediación, y aconsejan utilizar la vía contenciosa, con la pretensión de conseguir más ventajas. En otros dos casos, el que no quiere separarse rompe la negociación y abandona, con la idea de que si es tan problemático ir a resolver su caso por vía contenciosa, su pareja se volverá atrás en su decisión. En el caso restante, ella, que demanda y toma la decisión, vuelve a plantear estar en pareja. De estos cinco casos, dos presentan un claro intento de utilizar la mediación para que no se produzca la separación, intentando que la pareja reconsidere su decisión ante la dificultad planteada. En los otros tres casos existe un trastorno psicológico de un miembro de la pareja que impide avanzar en la Negociación y sitúa a ambos miembros de la relación en una posición de desigualdad.

Si comparamos los porcentajes de ambos grupos de parejas, las que terminan el programa y los que interrumpen obtenemos los siguientes datos (Tabla II):

Entre las parejas que interrumpen el programa hay más demandantes mujeres (75%) que entre las parejas que completan el programa (58%). Así mismo la edad media de las parejas es menor (32,8 años) en el grupo de los que interrumpen, que entre las parejas que completan (37,7 años). El nivel profesional es mayor entre aquellos que interrumpen (60% profesionales y directivos) que los que concluyen el programa (60% administrativos y comercio).

Respecto a los años de matrimonio se observa una distribución más regular en las parejas que completan que en los que interrumpen donde el porcentaje mayor está en las parejas que tienen de 10-15 años de matrimonio (37,5%). En cuanto a los hijos, de las parejas que interrumpen, el 75% tiene 1 ó 2 hijos. El 25%, 3 ó más hijos y no hay ninguna pareja sin hijos. Sin embargo, entre las parejas que concluyen el programa se puede apreciar que el porcentaje mayor (41%) son parejas con 1 hijo, el 32% tiene 2 hijos, el 15% tiene 3 o más y un 11% no tienen hijos.

		INTERR.	TERMINAN
SEXO DEMANDANTE		% n=8	% n=46
	MUJER	75	58.7
	HOMBRE	25	41.3

		INTERR.	TERMINAN
EDAD PAREJAS		% n=16	% n=92
	20 - 30 AÑOS	31.3	25
	31 - 40 AÑOS	43.7	39.1
	41 - 50 AÑOS	25	28.3
	51 - 60 AÑOS	0	5.4
	más de 60 AÑOS	0	2.2

Tabla II

		INTERR.	TERMINAN
PROFESIONES		% n=16	% n=92
	PROFESIONALES, etc.	37.5	21.7
	ADMINISTRATIVOS	25	30.5
	COMERCIO	12.5	28.3
	CONSTRUCCION	25	13
	OTRAS	0	6.5

		INTERR.	TERMINAN
AÑOS MATRIMONIO		% n=8	% n=46
	1 - 5 AÑOS	25	26
	6 - 10 AÑOS	12.5	17.5
	11 - 15 AÑOS	37.5	23.9
	16 - 20 AÑOS	12.5	10.9
	21 - 25 AÑOS	12.5	15.2
	26 o más	0	6.5

		INTERR.	TERMINAN
HIJOS		% n=8	% n=46
	0 HIJOS	0	10.9
	1 HIJOS	37.5	41.3
	2 HIJOS	37.5	32.6
	3 o más HIJOS	25	15.2

Tabla II (cont.)

Respecto al grado de sentimientos negativos que las parejas manifiestan sentir ante la separación, un 93,75% del grupo que interrumpe el programa dice experimentar el grado máximo, mientras que el porcentaje del grupo que completa el programa y experimentan este grado máximo, es menor (54,4%).

En cuanto al grado de conflicto esperado por las parejas para conseguir el acuerdo, tenemos que el 90% de las que han interrumpido el programa creen que será alto o muy alto, en contraste con las parejas que completan el programa cuyo porcentaje de nivel alto o muy alto de conflicto se sitúa en 52,2%.

		INTERR.	TERMINAN
		% n=16	% n=92
GRADO DE SENTIMIENTOS NEGATIVOS	0 - 3	0	22.8
	4 - 6	6.3	20.6
	7 - 10	93.7	54.4
	N.E	0	2.2

		INTERR.	TERMINAN
		% n=16	% n=92
GRADO DE CONFLICTO ESPERADO	0 - 3	18.8	39.2
	4 - 6	43.8	23.9
	7 - 10	37.4	29.3
	N.E	0	7.6

Si comparamos los dos grupos de parejas (interrumpen/terminan) en función de quién demanda el servicio y quién ha decidido separarse, observamos que el porcentaje mayor de las parejas que interrumpen, son aquellas en las que ella acude al servicio pero es él el que ha decidido la separación. El porcentaje menor lo presentan aquellas parejas que él demanda el servicio y a la vez ha tomado la decisión de separarse. En este grupo no se presenta ningún caso en que lo hayan decidido los dos conjuntamente. En el grupo de parejas que terminan el programa de Mediación, el porcentaje mayor se da cuando ella es la que demanda y decide la separación.

	INTERR.	TERMINAN
DEMANDA / DECIDE	% n=8	% n=46
ella / ella	25	52
ella / él	37.5	6.5
él / él	12.5	19.5
él / ella	25	15.5
él / ambos	0	6.5
TOTAL	100	100

Comparación del grupo total de parejas que acuden al programa de Mediación (interrumpen y completan) en relación a quién demanda el servicio y quién toma la decisión de separarse.

Cuando la persona que demanda el servicio y la que decide separarse es la misma, parece que completan el programa con más facilidad, ya que en pocos casos interrumpen el programa. Cuando es ella la que demanda el servicio y él el que decide la separación, existe las mismas posibilidades de que la pareja termine el programa y tramite su separación por vía amistosa que de que interrumpen el programa. Sin embargo, si ocurre al revés, que demande él el servicio y decida ella romper, existe un 77,8% de conseguir los acuerdos finales y, por tanto, separarse por vía amistosa.

	INTERR.	TERMINAN	TOTAL
DEMANDA / DECIDE	% n = 54	%	%
ella / ella	7.7	92.2	100
ella / él	50	50	100
él / él	10	90	100
él / ella	22.2	77.8	100
él / ambos	0	100	100

Finalmente de las parejas que interrumpen, sólo el 12.5% presentan acuerdo inicial en la separación, mientras que el porcentaje de acuerdo entre las parejas que terminan

el programa es mayor, 32.6%. Esto parece indicar que las parejas que toman ambos la decisión de separarse, cuentan con una mayor probabilidad de terminar el programa y, por tanto, de conseguir tramitar su procedimiento por vía amistosa.

ACUERDO EN LA DECISION DE SEPARARSE

	INTERRUMPEN	COMPLETAN
	% n=8	% n=46
SI	12.5	32.6
NO	87.5	67.4
TOTAL	100	100

Seguimiento

De las 46 parejas que terminaron con éxito el Programa, se ha podido obtener información de 38 parejas, lo cual supone un 82,6% del total. De esas 38 parejas entrevistadas, se ha confirmado que sólo el 7,9% ha incumplido algún punto del Convenio Regulador, aunque ninguno ha acudido a la vía legal. Este índice tan bajo de incumplimientos, nos confirma la idea mantenida en esta tesis de que el uso de la Mediación favorece el mantenimiento de los acuerdos realizados en la fase de negociación.

	% n=46
Parejas con las que se llevó a cabo el seguimiento	82.6
Parejas con las que no se llevó a cabo el seguimiento	17.4
Total parejas que termina	100

	% n=38
Parejas que no incumplen los acuerdos	92.1
Parejas que incumplen algún acuerdo	7.9
Total parejas con seguimiento	100

Comparación de los resultados del estudio 1, 3 y 4. Si comparamos los tres tipos de trabajos, el de los abogados, el conjunto, entre psicólogo y abogado, y el de la Mediación, en la resolución de los problemas matrimoniales obtenemos los siguientes resultados:

ACUERDOS FINALES

Abogados	42% (426)
Psicólog./Abog.	74% (37)
Mediación	85.1% (46)

Los abogados, trabajando sólo de forma tradicional, consiguen que el 42% de las parejas resuelvan legalmente sus problemas acudiendo a la vía amistosa, mientras que cuando se utiliza el modelo de trabajo conjunto (abogado y psicólogo), este porcentaje asciende a un 74%, siendo significativa esta diferencia ($z=4,5; p<0.001$).

Si comparamos los acuerdos finales alcanzados por los abogados (42%) y el alcanzado con la mediación (85,1%), también obtenemos un éxito más elevado con las técnicas de mediación, siendo esta diferencia significativa ($z=6,19; p<0.001$).

Cuando comparamos los acuerdos finales alcanzados en el trabajo conjunto (74%) y los obtenidos en la Mediación (85,1%), también tenemos un porcentaje mayor de acuerdos finales con la mediación que con el trabajo conjunto, aunque esta diferencia no es significativa ($z=1,41; p>0.05$). Lo que nos indica que no hay tanta diferencia entre el

trabajo conjunto y el de Mediación, y que las diferencias quizás se deban más a un mayor control en el diseño y en la recogida de información, justificando de esta forma el mayor éxito alcanzado en los acuerdos finales, por el grupo de Mediación.

INCUMPLIMIENTOS

Abogados	40.6% (173)
Psicólog./Abog.	15% (3)
Mediación	7.8% (3)

Las parejas que consiguen acuerdos finales, en el grupo de abogados, y que tramitan el procedimiento por vía amistosa, el 40,6% incumple alguno de los puntos acordados en el Convenio Regulador, mientras que esto sólo ocurre en el 15% de los casos resueltos en el grupo donde trabajan psicólogo y abogado, siendo esta diferencia significativa ($z=2.289; p<0.05$).

Este porcentaje de incumplimientos de los abogados, también es mayor que el que obtiene el grupo de Mediación (7,8%) siendo esta diferencia significativa ($z=3.98; p<0.01$). Estos datos nos informan que los acuerdos alcanzados por los abogados no son verdaderos acuerdos, ya que no se mantienen, mientras que en el trabajo conjunto y en el de mediación sí se mantienen los acuerdos conseguidos en el proceso de negociación.

El porcentaje de incumplimiento obtenido en el grupo de mediación es menor que el del trabajo conjunto, aunque esta diferencia no es significativa ($z=0.845; p>0.05$). Esto podría explicarse, por lo que mencionamos anteriormente, ambos trabajos no son tan diferentes y el trabajo conjunto podría ser una forma de trabajo mediacional.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en este estudio apoyan los planteamientos de partida. Estos resultados ponen de manifiesto, en primer lugar, la viabilidad del Modelo de Mediación descrito, dentro de un contexto de Servicio Público. Ya habíamos visto, en el estudio 3, las ventajas del uso de un modelo alternativo al tradicional, para resolver legalmente los conflictos familiares desde la práctica privada. En este estudio queda, también de manifiesto, la posibilidad de su uso dentro de un servicio público. A un nivel descriptivo, las parejas que participan en este Programa de Mediación, presentan características distintivas, según que termien el Programa o lo interrumpan en alguna de sus fases. Respecto a las características sociológicas, las parejas que interrumpen el Programa tienen una edad media menor, un nivel profesional mayor, y una media más alta de hijos que las parejas que completan el Programa.

Las parejas que interrumpen el Programa presentan un grado de sentimientos negativos ante la separación mayor, que las parejas que completan. Igualmente, las parejas que interrumpen también presentan un nivel de expectativas de conflicto a la hora de conseguir acuerdos más elevado que el de las parejas que terminan.

Cuando la persona que acude a pedir información y la que ha decidido separarse es la misma, se cuenta con unas posibilidades elevadas de concluir el Programa con éxito. Si la persona que demanda el servicio es mujer, pero el que ha tomado la decisión es hombre, se cuenta con 50% de

posibilidades de terminarlo, aumentando este 50%, cuando se cambia el sexo del que demanda y el que toma la decisión.

El análisis descriptivo de las parejas que interrumpen el Programa, nos indica que cuando éstas abandonan el Programa en la primera fase, generalmente es indicativo de un intento de utilizar la mediación, por parte del miembro de la pareja que no quiere separarse, para que el otro cambie de opinión. Cuando la interrupción se produce avanzado el Programa, ésta se relaciona o con interferencias del exterior, abogados o familiares que aconsejan un procedimiento contencioso, con la pretensión de sacar más ventajas, o bien, con alguna variable individual que sitúa a un miembro de la pareja en una posición de desigualdad, por lo que la negociación no puede avanzar.

En segundo lugar, los resultados de este estudio nos indican que, con el uso de la mediación, conseguimos más acuerdos entre la pareja, por lo que el porcentaje de procedimientos tramitados por vía amistosa es mayor que los conseguidos por el grupo de abogados, siendo estadísticamente significativa esta diferencia. El porcentaje de tramitaciones amistosas, por medio de la mediación, es también mayor que el obtenido en el trabajo conjunto, aunque esta diferencia no es significativa. La explicación puede estar en que estamos ante un mismo método de trabajo, y las diferencias se deben a una mayor precisión del Modelo último. Es importante señalar, que al aumentar los casos tramitados por vía amistosa, se consigue disminuir las tramitaciones contenciosas, con el beneficio psicológico correspondiente para todo el núcleo familiar, evitando una situación legal conflictiva que complica la problemática ya

existente en la pareja, repercutiendo negativamente sobre los hijos.

En tercer lugar, el nivel de incumplimiento de los acuerdos consensuados, obtenido en el grupo donde se ha utilizado la mediación, es menor que el obtenido por el grupo de abogados, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Esto no indica que los acuerdos alcanzados por la pareja, en las sesiones de negociación, se mantienen después de concluido el proceso legal. La permanencia de estos acuerdos garantiza el que ambos padres sigan manteniendo una relación con los hijos, con los consiguientes beneficios sobre su desarrollo psicológico (Campbell y Johnston, 1986; Elkin, 1984; Jacobson y Jacobson, 1987; Kressel, 1987; McIsaac, 1987)

El nivel de incumplimiento obtenido en este estudio, también es menor (7,8%) que el obtenido en el trabajo interdisciplinar (15%), aunque esta diferencia no es tampoco significativa. Es interesante señalar, que en el convenio regulador realizado en el Programa de Mediación, se le brinda a la pareja la oportunidad, en el caso de producirse algún incumplimiento, volver a plantear el motivo de tal incumplimiento para resolver los desacuerdos por medio de la negociación, evitando que la pareja utilice la vía judicial.

IV. CONCLUSIONES GENERALES

Los resultados obtenidos en los cuatro estudios que conforman esta tesis, se adecuan a los planteamientos propuestos para el desarrollo de la misma. Podemos observar, en estos estudios, un gradual acercamiento a la conclusión final: el Modelo de Mediación presentado es una buena alternativa al tradicional modo del derecho de abordar los conflictos familiares. Otros autores también presentan resultados similares en cuanto al uso efectivo de la Mediación (Folberg and Taylor, 1984; Kressel, 1987; Kressel y Pruitt, 1989; Moore, 1986; Pruitt et al., 1989; Sales, 1981)

En el desarrollo de este Modelo, se ha tenido en consideración el rol desempeñado por cada uno de los actores intervinientes en esta situación social. En primer lugar, los abogados, que con su peculiar formación, entran a resolver los conflictos familiares, sin establecer diferencias con cualquier otro tipo de conflicto (Duquette, 1978), utilizando el esquema aprendido en la Facultad, ganar el caso, y poner todo su saber al servicio de este fin (Dillehay, 1989; McCormack, 1988). Los resultados del estudio 1 nos muestran el uso frecuente, por parte de los abogados, del procedimiento contencioso como trámite legal para resolver los conflictos planteados por la pareja a la hora de separarse o divorciarse. Estos resultados, confirman las desventajas del uso del procedimiento contencioso, en comparación con las ventajas del consensual o amistoso. Por otro lado, ciertas características de los abogados, como la opinión favorable a la resolución amistosa de los procedimientos familiares y

a la colaboración del psicólogo, junto con una experiencia profesional en este tipo de asuntos, hemos visto que favorece la consecución de acuerdos, orientando a la pareja hacia la vía amistosa. Sin embargo, la diferencia estadísticamente no significativa encontrada entre los dos tipos de incumplimientos (contencioso y amistoso) nos indica que estos acuerdos conseguidos por estos abogados, no son verdaderos acuerdos, sino que se ha influido en la pareja, aceptándolos, de entrada, sin que ella misma haya intervenido en esta resolución.

En segundo lugar, tenemos al segundo actor: el psicólogo. Su reciente incorporación al contexto judicial, ha hecho que repita el esquema aprendido en otras áreas con más tradición profesional, como es la clínica. El modelo de evaluación clínico, orientado a sacar a la luz todos los problemas y alteraciones del evaluado, con el fin de corregirlos, está basado en la petición de ayuda que los sujetos manifiestan cuando acuden a un psicólogo. Aquí, en el contexto legal, esto no se da. La pareja que acude a un procedimiento contencioso para conseguir la separación, lo que manifiesta es su dificultad para vivir con su pareja, pero en ningún caso cuestiona la convivencia con sus hijos. Sin embargo, las distintas percepciones del porqué de la separación, y la falta de acuerdo en esta decisión, les hace entrar en un duro combate, donde todo se cuestiona, incluyendo el cuidado de los hijos. En este contexto, el psicólogo no ayuda a resolver los conflictos que la pareja presenta, y agudiza el enfrentamiento al intentar evaluar cuál de los dos progenitores está más capacitado

para cuidar a los hijos (cuando lo que es posible es que ambos lo estén), y además se esforzarán por presentarse ante el evaluador como el mejor candidato, desprestigiando al otro, si resulta conveniente.

Los resultados del estudio 2 nos confirman esta imagen del psicólogo evaluador, usando técnicas de la práctica clínica, sin adecuarse al contexto legal, y basando esta evaluación en un objetivo sumamente conflictivo y de difícil solución, provocador, además, de más enfrentamiento entre la pareja: quién es mejor padre o madre.

La actuación de estos dos profesionales, abogado y psicólogo por separado, presentan características similares que dificultan la resolución pacífica de los enfrentamientos de la pareja. Ambos cumplen un rol asignado tradicionalmente, y el contexto en el que actúan (procedimiento contencioso) favorece dicho rol. Por motivos distintos, ambos profesionales intentan mostrar al Juez, lo acertado de sus conclusiones. El abogado mediante las pruebas hábilmente preparadas, quiere demostrar lo justa que es la reclamación de su cliente, y el psicólogo con las conclusiones de su evaluación presenta a aquel de los candidatos que más características positivas muestre, en comparación con el otro, facilitando al juez la toma de decisión.

El Modelo de trabajo conjunto (estudio 3), presenta una forma distinta de intervenir ambos profesionales, introduciendo los

resultados de los dos primeros estudios, para demostrar la efectividad de un tipo de intervención, donde ambos profesionales están al servicio de la pareja, no defendiendo intereses parciales. disminuyendo su nivel de enfrentamiento y conduciéndolos hacia una vía amistosa. La pareja entra a formar parte activa dentro del contexto social, es el tercer actor, opinando y planteando sus propias alternativas. Esta forma de intervención conjunta consigue tramitar más procedimientos amistosos que los conseguidos por el grupo de abogados, repercutiendo de manera positiva en todo el núcleo familiar.

Además de conseguir elevar el porcentaje de acuerdos finales, con el consiguiente alejamiento de la pareja de la tramitación legal conflictiva, con este tipo de intervención, se consigue que los acuerdos alcanzados por la pareja, en el proceso de negociación, se mantengan, una vez concluido el procedimiento legal. Esto ocurre, porque la negociación de los acuerdos pasa a ser competencia de la propia pareja, actuando los profesionales como mediadores de forma imparcial, dejando que ellos sean los artífices de sus propios arreglos. Esta participación en los acuerdos, evita los incumplimientos, tan frecuentes en estos casos, como hemos visto en el estudio 1.

Una vez demostradas las ventajas del Modelo de trabajo conjunto en la práctica privada, y perfeccionado dicho Modelo, se muestra su viabilidad como Servicio Público, obteniendo unos

resultados en el estudio 4 que coinciden con las hipótesis planteadas: Con el uso de la Mediación se consiguen más acuerdos consensuados que se materializan en tramitaciones amistosas, y un menor nivel de incumplimientos, con las consiguientes ventajas psicológicas para todo el núcleo familiar. En este último estudio, se describen, también, características distintivas de las parejas que completan e interrumpen el Programa de Mediación, y que nos informan de las variables que mejor pueden predecir el éxito de la Mediación. En este estudio nosotros podemos señalar las siguientes:

- . El acuerdo de los cónyuges en la decisión de separarse.
- . Coincidencia en la persona que demanda el servicio con la que toma la decisión.
- . Nivel medio de sentimientos negativos a la separación.
- . Nivel medio de expectativas de conflicto acerca de los acuerdos para separarse.
- . Parejas sin hijos.

Para terminar quisieramos añadir que la experiencia de la Mediación en otros países, y la experiencia experimentada en España, con este Programa, nos hace salir al paso de acontecimientos futuros para evitar, si es posible, su impacto.

En primer lugar, la formación de los abogados en temas psicológicos y de mediación es prioritario para que la Mediación siga

adelante y no se vea obstaculizada por recelos de los profesionales del derecho.

En segundo lugar, una formación sólida de los psicólogos en estrategias de Mediación, para evitar la actuación en este atractivo campo de licenciados sin preparación, que cuestionarían la eficacia del uso de la Mediación, en sus primeros momentos de implantación en España.

En tercer lugar, la divulgación a la población de la existencia de la Mediación y de sus ventajas como alternativa al uso tradicional de solucionar legalmente estos temas.

En cuarto lugar, fomentar trabajos de investigación sobre la Mediación que tengan en cuenta estrategias utilizadas en las sesiones de negociación, el rol del mediador y el seguimiento de las parejas que llevan a cabo programas de este tipo.

Finalmente, sensibilizar a todos los profesionales del derecho (jueces, fiscales, abogados...) de la conveniencia de orientar a los posibles usuarios de la justicia, la conveniencia de acudir a un Servicio de Mediación, antes de hacerlo a la vía judicial.

V. REFERENCIAS

- Abelsohn, D. (1983). Dealing with the abdication dynamic in the postdivorce family: A context for adolescent crisis. Family Process, 3, 359-383.
- Ainsworth, M.D. (1971). Algunos problemas de validación de las técnicas proyectivas. En E.I. Megargee (Ed.), La métrica de la personalidad. Méjico: Trillas.
- Alberdi, I. (1987). Cambio familiar y divorcio. En E. Echeburua (Ed.), Parejas en conflicto: Estrategias psicológicas de intervención.
- Ammerican Bar Association. (1981). Model code of professional responsability. Chicago: National Center for Professional Responsibility.
- Anastasi, A. (1980). Tests psicológicos. Madrid: Aguilar.
- Andry, R.G. (1984). The current status of the psychologist as an expert witness in criminal trials. Bulletin of the British Psychological Society, 37, 236-237.
- Angeli, F. (1980). Psicología guiridica. Guistizia Penale, 2, 60-64.
- Arntzen, F. (1970). Psychologie der Zeugenaussage. Einführung in die forensische Aussagensychologie. Verlag f. Psychol Hogrefe.

- Arntzen, F. (1980). Elterliche Sorge und Persönlicher Umgang mit Kindern aus Gerichtspsychologischer Sicht. Ein Grundriss der Forensischen Familienpsychologie. Beck. C.H.
- Arntzen, F. (1983). Die Grenzen experimenteller Verfahren in der Forensischen Aussagepsychologie. Zeits. Exp. Angew. Psychol., 4, 523-528.
- Association of Family and Conciliation Courts. (1984). Guidelines for establishing Court connected Family Conciliation and Mediation Services. Octubre.
- Aubert, V. (1967). Courts and conflict resolution. Journal of Conflict Resolution, 11, 40.
- Auerbach, J.S. (1983). Justice without law? Resolving disputes without lawyers. Nueva York: Oxford University Press.
- Avila Espada, A. (1986). El peritaje psicológico en los procesos judiciales. En F. Jimenez Burillo y M. Clemente (Ed.), Psicología social y sistema penal. Madrid: Alianza Universidad, 185-208.
- Bahr, S.J., Chappell, C.B. y Marcos, A.C. (1987). An evaluation of a trial mediation program. En J.A. Lemmon (Ed.), New insights into family mediation. Mediation Quarterly, 18. San Francisco: Jossey-Bass.
- Beal, E. (1980). Separation divorce and single-parent families. En E. Carten y M. Mc.Goldrick (Ed.), The family life cycle: A framework for family therapy.

- Belsky, J. (1980). Child maltreatment: An ecological integration. American Psychologist, 4, 320-335.
- Benians, R.C. (1980). Impact of marital breakdown on children. The Journal of Maternal and Child Health. Parts I and II, Octubre y Noviembre.
- Bernal, T. (1986). Pautas contextuales en la expresión emocional en la pareja. Revista de Psicología General y Aplicada, 6, 1215-1228. Madrid.
- Bernal, T. (1987). El trabajo del psicólogo en los Juzgados de Familia. Memoria presentada al Ministerio de Justicia. Madrid.
- Bernal, T. (1988). Peritaje en los procedimientos matrimoniales. Escuela de Verano del Colegio Oficial de Psicólogos. Universidad Complutense de Madrid.
- Bernal, T. (1990). Dificultades para la evaluación en los casos de ruptura marital. Alternativa de intervención psicológica. Comunicación presentada al II Congreso del Colegio Oficial de Psicólogos, Area de Psicología Jurídica. Valencia. Abril.
- Bernal, T. (1991). Programa de Mediación. Centro de Psicología APSIDE. Madrid.
- Bernal, T. y Andrés, V. (1991). Memoria del Programa de Mediación. Presentada al Ministerio de Asuntos Sociales. Centro de Psicología APSIDE. Madrid.

- Bernal, T. y Martín, G. (1991). Separación y divorcio negociado: un trabajo interdisciplinar. Anuario de Psicología Jurídica. Colegio Oficial de Psicólogos. Madrid.
- Bernstein, B.E. (1977). Lawyer and counselor as an interdisciplinary team: Interfacing for the terminally ill. Death Education, 1, 277-291.
- Berscheid, E. (1982). Atraction and emotional interpersonal relationships. En M.S. Clark y S.T. Fiske (Ed.), Affect and cognition: The 17th Annual Cornegie Symposium of Cognition. Hillsdale, N. Yersey: Erlbaum.
- Bienenfeld, F. (1983). Child custody mediation: thechniques for counsellors. Attorneys and parents. Nueva York: Science and Behavior Books.
- Bienenfeld, F. (1985). The problem with divorce is that they turn into woares. Conciliation Courts Review, 1, 33-42.
- Bisio, B. (1975). Psicologia criminale. Roma: Bulzoni.
- Blau, T.H. (1959). Private practice in clinical psychology. Nueva York: Appleton-Century-Crofts.
- Blau, Th. (1984). The psychologist as expert witness. Nueva York: John Wiley and Sons.

- Bloom, B.L., Asher, S.J. y White, S.W. (1978). Marital disruption as a stressor: A review and analysis. Psychology Bulletin, 85, 867-894.
- B.O.E. 20/07/1981, Ley 30/1981 de 7 de Julio.
- Bornstein, G., Rapoport, A., Kerpel, L. y Katz, T. (1989). Within and between group communication in intergroup competition for public goods. Journal Experimental and Socical Psychology, 25, 422-36.
- Brett, J.M. y Goldberg, S.B. (1983). Mediator-advisors: a new thrid-party role. En M.H. Bazerman y R.J. Lewicki, Negotiating in organizations. Newbury Park, Ca: Sage.
- Brown, H.F. (1979). Crisis intervention treatment in child abuse programs. Social Casework, 7, 430-433.
- Brown, P.F. (1981). The psychologist in the courts. Australian Psychologist, 3, 423-432.
- Burton, J.W. (1969). Conflict and communication: The use of controlled communication in international relations. Londres: MacMillan.
- Cain, B. (1988). Divorce among ederly women: A growing social phenomenon. Social Casework: The Journal of Contemporary Social Work, 69, 563-568.

- Caldwell, R.A., Bloom, B.L. y Hodges, W.F. (1984). Sex differences in separation and divorce: A longitudinal perspective. En A.U. Rickel, M. Gerrard y I. Iscoe (Ed.), Social and psychological problems of women: Prevention and crisis intervention. Washington, D.C.: Hemisphere.
- Campbell, J.C. (1976). Successful negotiation: Trieste 1954. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Campbell, L. y Johnston, J. (1986). Impasse-directed mediation with high conflict families in custody disputes. Behavioral Sciences and the Law, 2, 217-241.
- Canepa, G. (1983). Criminological problems of diagnostic activities in the italian criminal-justice system. En F. Ferracuti y M.E. Wolfgang (Ed.), Criminological diagnosis an international perspective, 109-127.
- Carnevale, P.J. y Conlon, D.E. (1988). Time pressure and strategic choice in mediation. Organization Behavior Human Deccision Process, 42, 111-33.
- Carroll, J.S. y Wiener, R.L. (1982). Cognitive social psychology in court and beyond. En A. Hastorf y A. Isen (Ed.), Cognitive social psychology. Nueva York: Elsevier.
- Cattell, R.B. (1972a). 16PF. Cuestionario factorial de personalidad. Adaptación española en Sección de Estudios de TEA Ediciones. Madrid, 1975.

Cattell, R.B. (1972b). El análisis científico de la personalidad. Barcelona: Fontanella.

Chase, G.A. (1983). Previsitation anxiety, postvisitation depression, visitation phobia, visitation conflicts: Preludes to child custody conflicts. Conciliation Courts Review, 1, 81-86.

Clausen, J. (1968). Perspectives in childhood socialization. En J. Clausen, Socialization and society. Boston, Massachussets; Little, Brown, 130-181.

Clemente, M., Bernal, T., Hernández, A. y De Paul, P. (1990). Motivación y psicología jurídica. En L. Mayor y F. Tortosa, Ambitos de aplicación de la psicología motivacional. Bilbao: D.D.B.

Coates, D. y Penrod, S. (1981). Social psychology and the emergence disputes. Law and Society, 15, 655.

Código Civil. (1991). Madrid: Tecnos.

Colosi, T.R. y Berkeley, A.E. (1989). Negociación colectiva: el arte de conciliar intereses. Limusa.

Committee on Ethical Guidelines for Forensic Psychologists. (1991). Speciality guidelines for forensic psychologists. Law and Human Behavior, 6, 655-665.

- Compernelle, T. (1982). Adequate joint authority of parents: a crucial issue for the outcome of family therapy. En F. Kaslow (Ed.), The international book of family therapy. Nueva York: Brunner-Mazel.
- Coogler, O.J. (1978). Structured mediation in divorce settlement: A handbook for marital mediators. Lexington, Mass: Lexington Books.
- Cooke, G. (1980). The role of the forensic psychologist. Springfield, IL.: Charles C. Thomas Publisher.
- Corman, L. (1967). El test del dibujo de la familia, en la práctica médico-pedagógica. Buenos Aires: Kapelusz.
- Cormick, G.W. (1981). Environmental mediation in the US. Experience and future directions I'. Manuscrito no publicado, presentado en Annual Meeting of The American Association for Advancement of Science. Toronto, Canada.
- Curran, B. (1977). The legal needs of the public. Chicago: A.B.F.
- Davidson, H., Ray, L. y Horowitz, R. (1982). Alternative means of family dispute resolution. Washington, D.C.: American Bar Association.
- Davis, G. y Roberts, M. (1988). Access to agreement: A consumer study of mediation in family disputes. Milton Keynes: Open University Press.

- Deutsch, M. (1973). The resolution of conflict: Constructive and destructive processes. New Haven: Yale University Press.
- Díaz Usandivaras, C.M. (1986). El ciclo del divorcio en la vida familiar. Revista de Terapia Familiar, 15. Buenos Aires: Ediciones AEC. 15-35
- Díez-Picazo, L. y Gullón, A. (1982). Derecho de familia. Derecho de sucesiones. En L. Díez-Picazo y A. Gullón (Ed.), Sistema de derecho civil. Madrid: Tecnos.
- Dillehay, R.C. (1989). Conducta de abogados y dinámica psicológica. En A. Garzón, Psicología y justicia. Valencia: Promolibro.
- Dillehay, R.C. y Nietzel, M.T. (1986). Psychological consultation in trial preparation and conduct. En M.F. Kaplan (Ed.), The impact of social psychology on procedural justice. Springfield, IL.: Charles C. Thomas Publisher.
- Dingwall, R. y Eekelaar, J. (1988). Mediation and the legal process. Oxford: Clarendon Press.
- Donohue, W.A. (1991). Communication, marital dispute and divorce mediation. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Doob, L.W. (1970). Resolving Conflict in Africa: The Fermeda Workshop. New Haven, CT: Yale University Press.

- Douglas, A. (1962). Industrial peacemaking. Nueva York: Columbia University Press.
- Druckman, D. y Harris, R. (1990). Alternative models of responsiveness in international negotiation. Journal Conflicts Resolution, 34, 234-52.
- Duffy, K.G., Grosch, J.W. y Olczak, P.W. (1991). Community mediation: A handbook for practitioners and researchers. Nueva York: Guilford Press.
- Duquette, D.N. (1978). Child advocacy law clinic. Journal of Clinical Child Psychology, 3.
- D'Zurilla, T.J. y Goldfried, M.R. (1971). Problem solving and behavior modification. Journal of Abnormal Psychology, 78.
- Edmead, F. (1971). Analisis and prediction in international mediation. Nueva York: UNITAR, Study PS-2.
- Eitzen, T. (1985). A child's right to independence legal representation in a custody dispute. Family Law Quarterly, 1, 53-77.
- Elkin, M. (1984). Joint custody: In the best interest of the family. En J. Folberg (Ed.), Joint custody and shared parenting. The Bureau of National Affairs, Inc. and the Association of Family and Conciliation Courts.

- Ellis, A., Grieger, R. y colaboradores. (1981). Manual de terapia racional-emotiva. Bilbao: Desclee de Brouwer.
- Emerson, R.M. y Messinger, S.L. (1977). The micro-politic of trouble. Social Problems, 25, 121-134.
- Emery, R.E. y Wyer, M.M. (1987). Child custody mediation and litigation: an experimental evaluation of the experience of parents. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 179-86.
- Entrena Klett, C.M. (1982). Matrimonio, separación y divorcio. (En la legislación actual y en la historia). Pamplona: Aranzadi.
- Exner, J.E. (1976). Projective techniques. En I. Weiner, (Ed.), Clinical methods in psychology. Nueva York: Wiley.
- Eysenck, H.J. y Eysenck, S.B.G. (1976). Psychoticism as a dimension of personality. Londres: Hodder and Stoughton.
- Fernández Ballesteros, R. (1980). Psicodiagnóstico. Concepto y metodología. Madrid: Kapelusz.
- Fernández Ballesteros, R. (1984). Psicodiagnóstico. Unidades Didácticas. Madrid: UNED.
- Fisher, R. y Ury, W. (1978). International mediation: Ideas for the practitioner. Nueva York: International Peace Academy.

- Folberg, J. (1983a). A mediation overview: History and dimensions of practice. En J.A. Lemmon (Ed.), Dimensions and practice of divorce mediation. Mediation Quarterly, 1, 3-14. San Francisco: Jossey-Bass.
- Folberg, J. (1983b). Divorce mediation - Promises and problems. Manuscrito preparado para Midwinter meeting of American Bar Association. Section on Family Law, St Thomas.
- Folberg, J. (1984a). Divorce mediation - The emerging american model'. En J.M. Eekelaar, y S.N. Katz (Ed.), The resolution of family conflict, comparative legal perspectives, 193-211.
- Folberg, J. (1984b). Joint custody and share parenting. The Bureau of National Affairs Inc. and the Association of Family and Conciliation Courts.
- Folberg, J. y Taylor, A. (1984). Mediation: A comprehensive guide to resolving conflicts without litigation. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Fosar Benlloch, E. (1982). La Separación y el divorcio en el derecho español vigente. En E. Fosar Benlloch, Estudios de derecho de familia. Barcelona: Bosch, Casa Editorial.
- Frei, D. (1976). Conditions affecting the effectiveness of international mediation. Peace Science Social, 26, 67-84.

- French, J.P.J. y Raven, B.H. (1959). The bases of social power. En D. Cartwright, Studies in social power. Ann Arbor: University of Michigan.
- Friedman, L. (1972). The idea of right as a social and legal concept. Journal of Social Issues, 27, 189-198.
- Friedman, L. (1975). The legal system: a social science perspective. Nueva York: Russell Sage.
- García Varela, R., González Poveda, P., López-Muñiz Goñi, M. y Sierra Gil de la Cuesta, I. (1982). La Ley de Divorcio. Experiencias de su aplicación. Madrid: Colex.
- Garzón, A. (1984). Psicología judicial. Monográfico nº 1. Boletín de Psicología. Valencia.
- Garzón, A. (1988). Procesamiento social y conflicto civil. Boletín de Psicología, 19, 59-87. Valencia.
- Garzón, A. (1989). Psicología judicial y justicia. Valencia: Promolibro.
- Gaudet, F.J. (1938). Individual differences in the sentencing tendencies of judges. Archives of Psychology, 230.
- Girdner, L.K. (1985). Strategies of conflict: Custody litigation in the United States. Journal of Divorce, 1, 1-15.

- Giusti, E. (1987). El arte de separarse. Madrid: Alhambra.
- Goldberg et al. (1985). Dispute resolution. Boston: Little, Brown.
- Goldsmith, J. (1982). The post divorce family system. En F. Walsh (Ed.), Normal family processes. Nueva York: Guilford Press.
- González, A.G. (1979). Análisis de la relación de pareja. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Gordon, T. (1988). Líderes eficaz y técnicamente preparados. Méjico: Diana.
- Gottman, J.M. (1979). Marital interaction. Experimental investigations. Nueva York: Academic Press.
- Grant, R.L. y Maletzky, B.M. (1972). A scientific approach to psychiatric record keeping. Psychiatry in Medicine, 3, 119-129.
- Green, R.K. y Schaefer, A.B. (1984). Foresinc psychology. A primer for legal and mental health professionals. Springfield, IL.: Charles C. Thomas Publisher.
- Grisso, Th. (1986). Evaluating competencies. Forensic assessments and instruments. Nueva York: Plenum Press.

- Grisso, Th. (1987). The economic and scientific future of forensic psychological assessment. American Psychologist, 9, 831-839.
- Grossman, C. (1985). El proceso de divorcio. Derecho y realidad. Buenos Aires: Abaco.
- Gudjonsson, G.H. (1984). The current status of the psychologist as an expert witness in criminal trials. Bulletin of the British Psychological Society, 37, 80-82.
- Gulliver, P.H. (1977). On mediators. En I. Hamnett, (Ed.), Social anthropology and law. Londres: Academic Press.
- Gulliver, P.H. (1979). Disputes and negotiations: A cross-cultural perspective. Nueva York: Academic Press.
- Gullota, G. (1979). Psicología guiridica. Roma: Angeli.
- Halpern, H.A. (1973). Crisis theory: a definitional study. Community Mental Health Journal, 9, 342-349.
- Hauser, B.B. (1985). Custody in dispute: Legal and psychological profiles of contesting families. Journal American Academic Child Psychiatry, 24, 518-530.
- Haward, L. (1981). Forensic psychology. Londres: Batsford Academic & Educational Ltd.

- Haynes, J.M. (1978). Divorce mediator: A new role. Social Work, 5-9.
- Haynes, J.M. (1980). Managing conflict: the role of the mediator. Conciliation Courts Review, 2, December.
- Haynes, J.M. (1981). Divorce mediation: A practical guide for therapists and counsellors. Nueva York: Springer Publishing Co.
- Haynes, J.M. (1982). A conceptual model of the process of family mediation: Implications for training. The American Journal of Family Therapy, 4, 5-16.
- Haynes, J.M. (1983). The process of negotiations. Mediation Quarterly, 1, 75-92.
- Haynes, J.M. (1985). Matching readiness and willingness to the mediator's strategies'. Negotiation Journal, 79-92.
- Haynes, S.N. y Jensen, T. (1979). The interview as a behavioral assessment instrument. Behavior Assessment, 1, 97-106.
- Haynes, S. y Wilson, C. (1979). Behavioral assessment. San Francisco: Jossey-Bass.
- Hernández y Hernández, P. (1983). Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil (TAMAI). Madrid: TEA Ediciones.

- Hesnard, A. (1966). Psicología del delito. Roma: Giuffré.
- Hetherington, E.M., Cox, M., & Cox, R. (1977). The aftermath of divorce. En J.H. Stevens, Jr., & M. Matthews (Ed.), Mother-child, father-child relations. Washington, D.C.: NAEYC.
- Hill, B.J. (1982). An analysis of conflict resolution techniques: From problem-solving workshops to theory. Journal Conflict Resolution, 26, 109-38.
- Hodges, W.F. y Bloom, B.L. (1986). Preventive intervention for newlaw separated adults: One year later. Journal of Preventive Psychiatry, 1, 35-49.
- Holmes, T.H. y Rahe, R.H. (1967). The social readjustment rating scale. Journal of Psychosomatic Research, 11, 213-218.
- Holt, R.R. (1970). Yet another look at clinical an statistical prediction: Or, is clinical psychology worth while?. American Psychology, 25, 337-349.
- Idaszak, J.R. y Carnevale, P.J.(1989). Thrird party power: some negative effects of positive incentives. Journal of Applied Social Psychology, 19, 499-516.
- Iklé, F.C. (1964). How nations negotiate. Nueva York: Harper & Row.
- Irving, H. (1980). Divorce mediation: The rational alternative. Toronto: Personal Library Publishers.

- Jacobson, G.F. y Jacobson, D.S. (1987). Impact of marital dissolution on adults and children: The significance of loss and continuity . En J. Bloom-Feshbach y S. Bloom-Feshbach and associates, The psychology of separation and loss. Jossey-Bass.
- James, A.L. y Wilson, K. (1986). Couples, conflict and change: Social works with marital relationships. Tavistock. .
- Jiménez Burillo, F. y Clemente, M. (1986). Psicología social y sistema penal. Madrid: Alianza Universidad.
- Johnston, J.R. y Campbell, L.E.G. (1987). Multifamily mediation: The use of groups to resolve child custody disputes. En D.T. Saposnek (Ed.), Applying family therapy perspectives to mediation. Mediation Quarterly, 14/15. San Francisco: Jossey-Bass.
- Johnston, J.R., Campbell, L.E.G. y Mayes, S.S. (1985). Latency children in post-separation and divorce disputes. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 24, 563-574.
- Karambayya, R. y Brett, J.M. (1989). Managers handling disputes: Third party roles and perceptions of fairness. Academic Management Journal, 32, 687-704.
- Kaslow, F.W. (1984). Divorce: An evolutionary process of change in the family system. Journal of Divorce, 3, 21-40.

- Kaslow, F.W. (1986). The emotional process of divorce and its interface with the mediation process. En J. Folberg y A. Milne (Ed.), Divorce mediation. Theory and practice. Nueva York: Guilford Press.
- Kaslow, F.W., & Schwartz, L. (1987). The dynamics of divorce: a life cycle perspective. New York: Brunner-Mazel.
- Kelly, J.B. (1981). The visiting relationship after divorce: research findings and clinical implications. En I.R. Stuart & L.E. Abt (Ed.), Children of separation and divorce: Management and treatment. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Kelly, J.B. (1982). Divorce. The adult perspective. En B.B. Wolman (Ed.), Handbook of development psychology. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Kelly, J.B. (1988). Longer-term adjustment in children of divorce: Converging findings and implications for practice. Journal of Family Psychology, 2, 119-140.
- Kerr, C. (1954). Industrial conflict and its mediation. American Journal of Sociology, 60, 230-45.
- Kessler, S. (1978). Creative conflict resolution: Mediation. Atlanta: National Institute for Professional Training.
- Kessler, S. y Bostwick, S. (1977). Beyond divorce: Coping skills for children. Journal of Clinical Child Psychology, 6, 38-41.

- Kochan, T.A. y Jick, T.A. (1978). The public sector mediation process: a theory and empirical examination. Journal of Conflicts Resolution, 22, 209-40.
- Kolb, D. (1983). The Mediators. Cambridge, MA: MIT Press.
- Kolb, D. (1986). Who are organizational third parties and what do they do? En R.J. Lewicki, B.H. Sheppard y M.H. Bazerman (Ed.), Research on negotiation in organizations, 1. Greenwich, CT: JAI Press.
- Konecni, V.J. y Ebbesen, E.B. (1982). Social psychology and the law: The choice of research problems, settings, and methodology. En V.J. Konecni y E.B. Ebbesen (Ed.), The criminal justice system. San Francisco: W.H. Freeman and Co.
- Krantzler, M. (1973). Creative divorce. New York: M. Evans and Company Inc.
- Kremenjuk, V. (1991). International negotiation: Analysis, approaches, issues. San Francisco: Jossey-Bass.
- Kressel, K. (1972). Labor mediation: An exploratory survey. Albany, NY: Association Labor Mediation Agencies.
- Kressel, K. (1985). The process of divorce: How professionals and couples negotiate settlements. Nueva York: Basic Books.

- Kressel, K. (1987). Clinical implications of existing research on divorce mediation. The American Journal of Family Therapy, 1, 69-74.
- Kressel, K., Jafee, N., Tuchman, B., Watson, C. y Deutsch, M. (1980). A typology of divorcing couples: Implications for mediation and the divorcer process. Family Process, 2, 101-116.
- Kressel, K. y Pruitt, D.G. (1989). Mediation research. San Francisco: Jossey-Bass.
- Landsberger, H.A. (1955a). Interaction process analysis of professional behavior: A study of labor mediators in twelve labor-management disputes. American Sociological Review, 20, 566-75.
- Landsberger, H.A. (1955b). Interaction process analysis of the mediation of labor-management disputes. Journal of Abnormal and Social Psychology, 51, 552-59.
- Lazarus, R.S. (1980). The stress and coping paradigm. En L.A. Bond y R.C. Rosen (Ed.), Competence and coping during adulthood. New England: New Hampshire University Press.
- Levésque, J. (1987). La médiation en matière familiale: un nouveau champ de pratique en service social. Le travail social aujourd'hui. Actes du Congrès. Rufuts.

- Levinson, D.J. (1978). The seasons of a man's life. Nueva York: Alfred A. Knopf.
- Lewis, R.A. & Spanier, G.B. (1979). Theorizing about the quality and stability of marriage. En W.R. Burr, R. Hill, R.I. Nye, & I.L. Reiss (Ed.), Contemporary theories about the family. New York: Free Press.
- Liberman, R.P., Wheeler, E.G., De Visser, A.J.M., Kuehnel J. y Kuehnel, T. (1987). Manual de terapia de pareja. Bilbao: Desclee de Brouwer.
- Liebel, H. y Uslar, W.von (1975). Forensische Psychologie. Eine Einführung. Stuttgart: Kohlhammer.
- Lluís Font, J.M. (1981). Test de la familia. Barcelona: Oikos-Tau.
- López Alarcón, M. (1983). El nuevo sistema matrimonial español. Madrid: Tecnos.
- López Valadez, (1980). Psicología y derecho, una visión integrativa. Anuario de sociología y psicología jurídica.
- Louisell, D.W. (1955). The psychologist in today's legal world. Minnesota Law Review, 3, 235-272.
- Maggiolo, W.A. (1971). Techniques of mediation in labor disputes. Nueva York: Oceana Publications.
- Maggiolo, W.A. (1985). Techniques of mediation. Nueva York: Oceana Publications.

- Magid, K. (1980). Divorce is. Evergreen C.P.
- Martín, G. y Bernal, T. (1989). Intervención psicológica y jurídica en procesos matrimoniales. Revista del Colegio de Abogados de Ciudad Real, 4, 84-90.
- Mauleón, J. (1984). El Psicólogo como perito en los tribunales ordinarios. I Congreso del Colegio Oficial de Psicólogos. Madrid.
- McCombie, S.L. (1980). The rape crisis intervention handbook: A guide for victim care. Nueva York: Plenum Press.
- McCormack, M.H. (1988). Toda la verdad sobre los abogados. Barcelona: Grijalbo.
- McCrory, J.P. (1985). The mediation process. Manuscrito presentado en The Bromley Conference. Bromley. Abril.
- McCrory, J.P. (1988). Confidentiality in mediation (conciliation) of matrimonial disputes. Modern Law Review.
- McGillavry, D.H.D. (1988). La Médiation aux Pays-Bas. Service Social dans le Monde, 4. Lieja.
- McGillis, D. (1981). Conflict resolution outside the courts. En L. Bickman (Ed.), Applied Social Psychology Annual. Beverly Hills, CA: Sage.

- McIsaac, H. (1987). Toward a classification of child custody disputes: An application of family systems theory. Mediation Quarterly, 14/15.
- Meichenbaum, D. (1977). Cognitive behavior modification. Nueva York: Plenum Press.
- Milne, A. (1979). Joint custody. A handbook for judges, lawyers and counselors. Portland, Oregon: Association of Family Conciliation Courts.
- Mira y López, E. (1932). Manual de psicología jurídica. Barcelona: Salvat.
- Mitchell, A. (1985). Children in the widdle; Living through divorce. Tavistock.
- Moore, C.W. (1983). A general theory of mediation: Dynamics, strategies, and moves. New Brunswick, Nueva York: Rutgers University.
- Moore, C.W. (1986). The mediation process: Practical strategies for resolving conflict. San Francisco: Jossey-Bass.
- Munné, F. (1986). La investigación y la intervención psicológicas en el sistema jurídico. Papeles del Psicólogo. Madrid: Colegio Oficial de Psicólogos.
- Muñoz-Sabaté, Ll., Bayés, R. y Munné, F. (1980). Introducción a la psicología jurídica. Méjico: Trillas.

- Neville, W.G. (1984). Mediation for therapists and their spouses. En F.W. Kaslow (Ed.), Psycotherapy with psychotherapists. New York: Haworth Press.
- O'Callagahn Muñoz, X. (1983). Derecho de familia. En X. O'Callagahn Muñoz, Compendio de derecho civil. ERDP.
- Olson, D. et al. (1980). Custody resolution counseling: Description and comparison with custody study. En Child custody: Literature review and alternative approaches, Monograph of the Hennepin County (Minneapolis) Domestic Relations Division, 97-136.
- Palenski, J. (1984). The use of mediation by police. Mediation Quarterly, 5, 31-38.
- Parkinson, L. (1986). Conciliation in separation and divorce: Finding common ground. Croom Helm.
- Parkinson, L. (1987). Separation, divorce and families. Mcmillan.
- Parkinson, L. (1988). Family mediation: In theory and in practice. Service Social dans le Monde, 4.
- Paul, D. (1984). Growing legal awareness of the clinical psychologist: The Illinois model. American Journal of Forensic Psychology, 1, 39-47.
- Pearson, J. y Thoennes, N. (1982). Mediation & Divorce: the benefits outweigh the cost. Family Advocate, 3, 26-32.

- Pearson, J. y Thoennes, N. (1984). Mediating and litigating custody disputes: A longitudinal evaluation. Family Law Quarterly, 17, 497-524.
- Pearson, J. y Thoennes, N. (1985). Research report: Mediation versus the courts in child custody cases. Negotiation Journal, 3, 235-244.
- Pearson, J. y Thoennes, N. (1986). Mediation in custody disputes. Behavioral Sciences and The Law, 2, 203-216.
- Pelechano, V. (1976). Psicodiagnóstico. Unidades didácticas. Madrid: UNED.
- Peplau, L.A. y Gordon, S.L. (1985). Women and men in love: Gender differences in close heterosexual relationships. En V. O'Leavy, R.K. Cluger, B.S. Wallston, Women, gender and social psychology. Hillsdale, N.J.: Erlbaum.
- Peters, E. (1952). Conciliation in action. New York, CT: Natl. Foremen's Inst.
- Peters, E. (1955). Strategy and tactics in labor negotiations. New London, CT: Natl. Foremen's Inst.
- Poser, E.G. (1976). Strategies for the behavioral prevention. The behavioral management of anxiety, depression and pain. Nueva York: Brunner-Mazel.

- Pons González, M. y del Arco Torres, M.A. (1985). Separación, divorcio y nulidad matrimonial: régimen jurídico. Granada: Comares.
- Price, S. y McCreary, C. (1976). Mental health consultation for a clinical law training program. Journal of Community Psychology, 4, 168-173.
- Pruitt, D.G. (1990). Organizational negotiators as intermediaries. Presentado al tercer Annual Meeting Int. Assoc. Confl. Management. Vancouver: British Columbia.
- Pruitt, D.G., Carnevale, P.J., Ben-Yoav, O., Nochajski, T.H. y Van Slyck, M. (1983). Incentives for cooperation in integrative bargaining. En R. Tietz (Ed.), Aspiration levels in bargaining and economic decision making. Berlin: Springer. *correcto*.
- Pruitt, D.G. y Rubin, J.Z. (1986). Social conflict: Escalation, stalemate, and settlement. Nueva York: Random House
- Pruitt, D.G., Welton, G.L., Fry, W.R., McGillicuddy, N.B., Castrianno, L. y Zubeck, J.M. (1989). The process of mediation: Caucusing, control, and problem solving. En M.A. Rahim (Ed.), Managing conflict: An interdisciplinary approach. Nueva York: Praeger.
- Rabin, A.I. (1981). Assessment with projective techniques: A concise. Nueva York: Springer.

- Rehmus, C.M. (1965). The mediation of industrial conflict: a note on the literature. Journal of Conflicts Resolution, 9, 118-26.
- Richardson, C.J. (1988). La mediation des divorces rattachés aux tribunaux dans quatre villes canadiennes: un aperçu des résultats de recherche. Canada. Ministère de la Justice.
- Roberts, M. (1988). Mediation in family disputes. Hampshire: Wildwood House.
- Roberts, S. (1979). Order and dispute: An introduction to legal anthropology. Penguin, Harmondsworth.
- Roberts, S. (1983). The study of dispute: Anthropological perspectives. En J.A.Bossy (Ed.), Disputes and settlements: Law and human relations in the west. Cambridge.
- Roehl, J.A. y Cook, R.F. (1985). Issues in mediation: Rhetoric and reality revisited. Journal of Social Issues, 41, 161-178.
- Rosenhan, D.L. (1982). Psychological abnormality and law. En C.J. Scheirer y B.L. Hammonds (Ed.), The master lectures series: Psychology and the law, 2. Washington, D.C.: APA.
- Rosenthal, D.E. (1974). Lawyer and client: Who's in charge? Nueva York: Russell Sage Foundation.

- Rubin, J.Z. (1980). Experimental research and third-party intervention in conflict: Toward some generalization. Psychological Bulletin, 87, 379-91.
- Rubin, J.Z. (1981). Introduction. En J.Z. Rubin (Ed.), Dynamics of third party intervention: Kissinger in the middle east, 3-43. Nueva York: Praeger.
- Rubin, J.Z. (1985). Third party intervention in family conflict. Negotiation Journal, 1, 363-72.
- Rubin, J.Z. y Brown, B.R. (1975). The social psychology of bargaining and negociation. Nueva York: Academic Press.
- Rwezaura, B. (1984). Some aspects of mediation and conciliation in the settlement of matrimonial disputes in Tanzania. En J.M. Eekelaar y S.N. Katz (Ed.), The resolution of family conflict: Comparative legal perspectives. Toronto: Butterworths.
- Ryan, J.P. (1985). L'avocat médiateur: un nouveau rôle pour les avocats dans la pratique du divorce sans affrontement. Institut canadien pour l'administration de la justice. Ottawa.
- Sabalis, R.F. y Ayers, G.W. (1977). Emotional aspects of divorce and their effects on the legal process. Family Coordinator, 26, 391-394.

Sadoff, R.L. (1980). Working with the forensic psychologist. En G. Cooke. The role of the forensic psychologist. Springfield, IL: Charles C. Thomas Publisher.

Saks, M.J. y Hastie, R. (1978). Social psychology in court. Nueva York: Van Nostrand Reinhold Co.

Sales, B. (1977a). Perspectives in law and psychology: The criminal justice system. Nueva York: Plenum Press.

Sales, B. (1977b). Psychology in the legal process. Nueva York: Spectrum.

Sales, B.D. (1981). The trial process. Nueva York: Plenum Press.

Sales, B.D. y Elwork, A. (1980). Issues in training forensic psychologist. En G. Cooke. The role of the forensic psychologist. Springfield, IL: Charles C. Thomas Publisher.

Salts, C.J. y Zonakes, C.E. (1983). Effects of divorce counseling on adjustment and self-concept. Journal of Divorce, 6, 55-68.

Saposnek, D.T. (1983). Mediating child custody disputes. Londres: Jossey-Bass.

Saposnek, D.T. (1985). What is fair in child custody mediation? Mediation Quarterly, 8, 9-16.

- Sarton, S. (1983). Der psychowissenschaftliche Sachverständige in Strafverfahren. Kriminol. Schftenr. 81. Kriminalistik.
- Schelling, T.C. (1960). The strategy of conflict. Cambridge: Harvard University.
- Seisdedos, N. (1981). 16PF. Monografía técnica. Madrid: TEA.
- Shaffer, T.L. (1976). Legal intervention and counseling in a nutshell. St. Paul: West Publishing.
- Shapiro, J.J. y Caplan, M.S. (1986). Partin sense: a couple's guide to divorce mediation.
- Shaw, J.I., Fischer, C.S. y Kelley, H.H. (1973). Decision making by third parties in settling disputes. Journal of Applied and Social Psychology, 3, 197-18.
- Sheppard, B.H. (1984). Third party conflict intervention: a procedural framework. En B.M. Staw y L.L. Cummings (Ed.), Research in Organizational Behavior, 6, 141-90. Greenwich, CT: JAI Press.
- Shoenfield, M.K. y Shoenfield, B.P. (1981). Interviewing and counseling. Philadelphia: The American Law Institute.
- Silva, F. (1981). La entrevista. En R. Fernández Ballesteros y J.A.I. Carroble (Dir): Evaluación conductual. Metodología y aplicaciones. Madrid: Pirámide.

- Silva, F. y Pelechano, V. (1978). La entrevista. Apuntes del Departamento de Psicología Evolutiva y diferencial. Valencia: Universidad de Valencia.
- Silverstein, O. (1988). Single women: later years. En M. Walters, B. Carter, P. Papp, & O. Silverstein (Ed.), The invisible web: Gender patterns in family relationship. New York: Guilford Press.
- Simkin, W.E. (1971). Mediation and the dynamics of collective bargaining. Washington (D.C.): The Bureau of National Affairs.
- Smart, C. (1982). Justice and divorce: The way forward?. Family Law, 5, 135.
- Sobell, L.C. y Sobell, M.B. (1975). Outpatient alcoholics give valid self-reports. J. of nerv. and Ment. Dis., 161, 32-42
- Solomon, L., Taylor, K., Wolman, R., Orenstein, T. y Fitzgerald, M. (1982). Toward more effective working relationships between therapists and lawyers in divorce and child custody decisions. Presentado al Annual Meeting of the Massachusetts Psychological Association. Boston.
- Sprott, J.A. (1973). Psychological aspects of estate planning. Journal of Forensic Psychology, 5, 25-39.
- Stevens, C.M. (1963). Strategy and collective bargaining negotiation. McGraw Hill.

- Stulberg, J. (1981). The theory and practice of mediation: A reply to Professor Susskind. En S.B. Goldberg, E.D. Green, y F.E.A. Sander (Ed.), Dispute resolution. Little, Brown.
- Sturgess, D.G. y Roberston, J.M. (1981). The forensic use of psychosocial evidence. Australian Psychologist, 3, 407-411.
- Summers, D.A., Tagliaferro, J.D. y Fletcher, D.J. (1970). Judgment policy and interpersonal learning. Behavior Science, 15, 514-521.
- Susskind, L. y Cruikshank, J. (1987). Breaking the impasse. Nueva York: Basic Books.
- Susskind, L. y Ozawa, C. (1985). Mediating public disputes: obstacles and possibilities. Journal Social Issues, 41, 145-59.
- Thoennes, N. y Pearson, J. (1985). Predicting outcomes in divorce mediation: The influence of people and process. Journal of Social Issues, 41, 115-126.
- Thomas, K.W. (1982). Manager and mediator: a comparison of third-party roles based upon conflict-management goals. En G.B.J. Bomers y R.B. Peterson (Ed.), Conflict Management and Industrial Relations. Boston: Kluwer Nijhoff.

- Thomson, D.M. (1983). Role of the experimental psychologist in the judicial system. En G. Wardlaw (Ed.), Role of psychologits in the criminal justice system, 99-114. Australian Institute of Criminology.
- Touval, S. y Zartman, I.W. (1985). International mediation in theory and practice. Boulder, CO: Westview Press.
- Touzard, H. (1981). La mediación y la solución de los conflictos. Herder.
- Trombetta, D. (1982). Custody evaluation and custody mediation: A comparison of two dispute interventions Journal of Divorce, 6, 65-77.
- Uhlenberg, P., Cooney, T. y Boyd, R. (1990). Divorce for women after midlife. Journal of Gerontology: Social Sciences, 45, S3-S11.
- Valladares, E. (1982). Nulidad, separación y divorcio. Civitas.
- Vanderkooi, L. y Pearson, J. (1983). Mediating divorce disputes: Mediator behaviors, styles and roles. Family Relations, 32, 557-566.
- Vázquez Iruzubieta, C. (1982). La pensión indemnizatoria en los juicios de separación y divorcio. La Ley, 394.
- Vidmar, N. (1985). An assessment of mediation in a small claims court. Journal of Personality and Social Psychology, 41, 127-44.

Vidmar, N. y Shuller, A. (1987). Individual differences and the pursuit of legal rights: A preliminary inquiry. Law and Human Behavior, 4, 299-318.

Vives Biel, J. (1983). La técnica de dictamen psicológico y su valoración ante los tribunales. Anuario de Sociología y Psicología Jurídica, 49-56.

Walker, J.A. (1987). Divorce mediation - An overview from Great Britain in the role of mediation in divorce proceedings: A comparative perspective. Vermont Law School Dispute Resolution Project.

Wall, J.A.Jr. y Rude, D.E. (1985). Judicial mediation: Techniques, strategies, and situational effects. Journal Social Issues, 41, 47-63.

Wall, J.A.Jr. y Rude, D.E. (1987). Judge's mediation of settlement negotiations. Journal of Applied Psychology, 72, 234-39.

Wall, J.A.Jr. y Rude, D.E. (1991). The judge as mediator. Journal of Applied Psychology, 76, 54-59.

Wallerstein, J.S. y Kelly, J.B. (1980). Surviving the breakup: How children and parents cope with divorce. Nueva York: Basic Books.

Walton, R.E. (1969). Interpersonal peacemaking: Confrontations and non-direct communication. Reading, MA: Addison-Wesley.

- Ware, C. (1982). Sharing parenthood after divorce. Nueva York: The Viking Press.
- Warner, C.G. (1981). Conflict intervention in social and domestic violence. Bowie, Md.: Robert J. Brady, Co.
- Watzlawick, P. (1984). The Invented reality. Nueva York: Norton y Comp.
- Webster, C.D., Menzies, R.J. y Jackson, M.A. (1983). Clinical assessment before trial. Legal issues and mental disorder. Woburn: Butterworths.
- Wegener, H. (1981). Einführung in die forensische psychologie. Wissenschaftliche Buchges.
- Weiss, R.S. (1985). Marital separation: Managing after a marriage ends. Nueva York: Basic Books.
- Weitzman, L.J. (1985). The divorce revolution. Nueva York: The free Press.
- Wener, C. y Coulter, J.B. (1962). A reliability study of developmental histories. Child Development, 33, 453-462.
- Whiteside, M. (1982). Remarriage: A family developmental process. Journal of marital and family therapy, 2.

- Wishik, H. (1984). Family disputes: Problems arising from the regulation of the legal practice. In a study of barriers to the use of alternative methods of dispute resolution. Vermont Law School Dispute Resolution Project.
- Wolman, R. y Taylor, K. (1990). Psychological effects of child custody disputes on children and families. En Children in the legal arena. Presentado en The Annual Meeting of the American Psychological Association. Boston.
- Wolpe, J. (1958). Psychotherapy by reciprocal inhibition. Stanford, California: Stanford University Press.
- Wolpe, J. (1969). The Practice of behavior therapy. Oxford: Pergamon Press.
- Ziskin, J. (1980). Giving expert testimony: Pitfalls and hazards for the psychologist in Court. En G. Cooke, The role of the forensic psychologist. Springfield, IL.: Charles C. Thomas Publisher.

VI. A N E X O

Facultad de Psicología

Madrid, 21 de Octubre 1988

Muy Sr. mío:

De acuerdo con la conversación telefónica mantenida con Vd. sobre su participación en la investigación sobre "Separación y Divorcio" que está llevando a cabo la Universidad Autónoma de Madrid, departamento de Psicología Social para una tesis doctoral, me dirijo a Vd. adjuntándole dos tipos de cuestionario. Uno que recoge los datos de los casos llevados en ese despacho en el período 1986-87 y otro cuestionario a contestar por cada uno de los profesionales que trabajan en el mismo.

Una vez contestados, ruego los envíen a la siguiente dirección :

Trinidad Bernal Samper
Doctor García Tapia 128
28030-MADRID
Tf. 430.11.12

Agradeciendo su colaboración, atentamente le saluda.

T. Bernal

DATOS DE LAS SEPARACIONES Y DIVORCIOS LLEVADOS
EN SU DESPACHO DURANTE EL PERIODO 86-87

1. Número de SEPARACIONES

2. Número de DIVORCIOS

3. Años de matrimonio de las parejas :

- 5 años	5 - 10	11 - 20	20 - 30	+ 30
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

4. Edad de las parejas :

- 20 años		20 - 30		31 - 40		41 - 50		+ 50	
EL	<input type="text"/>	EL	<input type="text"/>	EL	<input type="text"/>	EL	<input type="text"/>	EL	<input type="text"/>
ELLA	<input type="text"/>	ELLA	<input type="text"/>	ELLA	<input type="text"/>	ELLA	<input type="text"/>	ELLA	<input type="text"/>

5. Nº de hijos :

0	1	2	3	+3
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

6. Situación social de las parejas:

Baja	Media-baja	Media	Media-alta	Alta
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

7. Qué miembro de la pareja requirió sus servicios:

EL	ELLA	AMBOS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

8. Acuerdo inicial entre ambos:

SI	
NO	

9. Solución final

Con acuerdo	
Sin acuerdo	

10. Del total de los casos llevados en este período 86-87
¿a quién se le asignó la guarda y custodia?

A la madre	
Al padre	
A ambos	

11. ¿En cuántos casos con acuerdo se ha incumplido lo acordado?

12. ¿Quién lo ha incumplido?

El	
Ella	
Ambos	

13. ¿Cuál ha sido el punto que ha provocado el incumplimiento?

- Patria Potestad y Guarda y Custodia

- Régimen de visitas, comunicación y estancia.

- Atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar ☐
- Contribución a las cargas del matrimonio y alimentos ☐
- Liquidación del régimen económico matrimonial ☐
- Pensión por desequilibrio económico ☐
- Litis expensas ☐

14. ¿En cuántos casos, sin acuerdo, se ha incumplido la sentencia?

15. ¿Quién la ha incumplido?

El	:	<input type="checkbox"/>
Ella	:	<input type="checkbox"/>
Ambos	:	<input type="checkbox"/>

16. ¿Cuál ha sido el punto que ha provocado el incumplimiento?

- Patria Potestad y Guarda y Custodia ☐
- Régimen de visitas, comunicación y estancia ☐
- Atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar ☐
- Contribución a las cargas del matrimonio y alimentos ☐
- Liquidación del régimen económico matrimonial ☐
- Pensión por desequilibrio económico ☐
- Litis expensas ☐

17. Duración del procedimiento:

Con acuerdo	
1-2 meses	
3-4 meses	
5-7 meses	
+7 meses	

Sin acuerdo	
10-15 meses	
16-20 meses	
21-25 meses	
+25 meses	

18. Coste del procedimiento:

Con acuerdo	
- 100.000	
100-150	
150-200	
200-300	
+ 300	

Sin acuerdo	
- 200.000	
200-300	
300-400	
400-500	
+ 500	

19. Causa alegada para la separación:

Acuerdo	
Separación hecho	
Violación deberes	
Abandono	
Infidelidad	
Otros	

OTROS DATOS A CUMPLIMENTAR POR CADA UNO
DE LOS ABOGADOS

Edad

Sexo

1. ¿Lleva otros asuntos, además de los matrimoniales?

NO

SI

¿Qué otros? :.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. ¿Desde cuándo ejerce la abogacía?

3. ¿Desde cuándo la ejerce en asuntos matrimoniales?

4. ¿Piensa que estos asuntos matrimoniales deberían tramitarse por vía amistosa?

- Desacuerdo total

- Ligero desacuerdo

- Neutral

- Ligeramente de acuerdo

- Totalmente de acuerdo

5. Si ha conseguido tramitar el procedimiento por vía amistosa, pese a existir un desacuerdo inicial ¿Cómo lo ha conseguido?

- Puesta en contacto con el abogado contrario

- Puesta en contacto con la otra parte interesada

- Por iniciativa de la parte contraria

- Por acuerdo entre los interesados ☐
- Por intervención de un profesional psicólogo ☐
- Otros ☐

6.¿Cree Vd. que una colaboración psicológica ayudaría a resolver de forma adecuada los procedimientos matrimoniales?

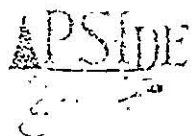
SI ☐

NO ☐

¿Por qué?

[illegible]

[illegible]



nº de carpeta

Separación...
Divorcio...

DATOS PERSONALES DEL DEMANDANTE

Edad..... Sexo..... Estado civil..... Profesión.....

Puesto de trabajo horario.....

Estudios..... Ingresos anuales.....

Quién propuso romper: VD ☐ EL OTRO ☐ AMBOS ☐

Estaban de acuerdo los dos con la propuesta | ..

sí ☐ no ☐

Grado subjetivo de sentimientos negativos con respecto a la separación (de 0 a 10)

Grado subjetivo de las expectativas de conflicto que supondrá la separación (de 0 a 10)

¿Qué espera recibir aquí?.....
.....

DATOS FAMILIARES

PAREJAS CASADAS

nº de años de matrimonio

edades al contraer el matrimonio:

EL ELLA.....

nº de años de convivencia en común antes del matrimonio.....

PAREJAS NO CASADAS

nº de años de convivencia.....

edades al comenzar a vivir juntos:

EL ELLA.....

PAREJAS CASADAS Y NO CASADAS

nº de hijos de la pareja						otros hijos del cónyuge masculino						otros hijos del cónyuge femenino					
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Edades.....																	
Sexo.....																	

Otras personas que vivan en el domicilio conyugal.....